UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
CARRERA DE SOCIOLOGIA

TRABAJO DE TESINA

"El diagnóstico y su receta: la convergencia de proyectos entre las Fuerzas Armadas y la fracción más concentrada del capital durante el Proceso de Reorganización Nacional"

Esteban Alejandro Falcón

Director de Tesina: Mgter. Amelia Barreda

INTRODUCCIÓN

Al realizar un análisis de la historia de nuestro país, no resulta para nada complejo llegar a la conclusión de que estos dos siglos de vida que tiene la Argentina están irremediablemente signados por la inestabilidad, la cual parece abarcar todos los territorios de su vida pública. A esto, cabría agregar como agravante el hecho de que dicho marco de inestabilidad, el cual en diversas ocasiones terminó por devenir en severas y profundas crisis, lejos de verse atenuado por el paso tiempo, da la sensación de revestir un carácter de perpetuidad, al punto de haberse convertido ya en un rasgo estructural de la vida política, económica y social de la nación.

Por supuesto, dicho estado de continua incertidumbre e inestabilidad tiene costos muy altos para el país y su funcionamiento, sobre todo cuando, como mencionábamos, la mera situación de inestabilidad se convierte en un fuerte proceso de crisis de la sociedad en su conjunto, la cual experimentará serias dificultades para salir adelante y devolver al país a un marco que pudiera ser considerado de normalidad.

Además, lo que podría considerarse el lado más perverso de toda esta lógica radica en el hecho de que las cargas y los costos de dichas situaciones de crisis no son repartidos en forma equitativa entre los distintos actores sociales, sino que, si algo ha mostrado la historia de nuestro país en este sentido, es que siempre han sido las clases populares y trabajadoras aquellas encargadas de asumir la parte más "pesada" de dichos procesos de derrumbe institucional y económico.

Las características particulares de la dinámica que asumen dichos cimbronazos son aquellas que nos dan la pauta de que estas crisis, como marca que les es propia, están directamente relacionadas con las disputas de las fracciones de clases dominantes para imponer sus propios proyectos políticos, económicos y sociales, con el nivel de éxito o fracaso que registran en sus intentos por lograrlo y con el papel que desempeña el Estado en dichos enfrentamientos.

Esta caracterización de los procesos de crisis institucionales en la Argentina no estaría completo si no agregáramos al análisis la participación de otro actor que, luego de 1930, se convirtió en un interlocutor válido y legítimo en toda discusión relevante

que se sostuviera relacionada con los aspectos más importantes de la vida del país: las Fuerzas Armadas.

En efecto, y tras haber ejecutado el golpe de Estado de septiembre de 1930, el cual derrocara al presidente constitucional electo, Dr. Hipólito Yrigoyen, las Fuerzas Armadas, con particular preponderancia del Ejército, en tanto era la fuerza que revestía mayor antigüedad y prestigio, inauguraron una nueva lógica política que instalaba al golpe de Estado institucional como un mecanismo válido de recambio de autoridades.

De esta manera, tenía su nacimiento una novedosa modalidad a nivel político, la cual le daría al siguiente medio siglo de vida nacional una impronta caracterizada por la sucesión permanente en la primera magistratura de la nación de figuras civiles y militares, las cuales, a través de complejísimas redes de intereses y relaciones, confabularían y conspirarían en forma continua contra los distintos poderes de turno, en el caso de que estos no presentaran en sus proyectos programáticos un perfil que resultara coincidente con los suyos propios.

Esta nueva dinámica política, caracterizada por la confluencia entre militares, políticos y distintos sectores de la sociedad civil, conformada para acceder a las esferas decisionales y de poder, estructurada alrededor del mecanismo del golpe de Estado como recurso para desplazar a las autoridades de turno, se presentaría como el principal obstáculo de cara a consolidar un marco de estabilidad institucional y certidumbre en cuanto al funcionamiento del sistema económico y de la sociedad civil. Dada esta situación, la posibilidad de estructurar un proyecto superador, el cual pudiera ubicarse por encima de los diversos intereses corporativos o de poder, y que pudiera ser legitimado por el apoyo de la sociedad en su conjunto, principalmente por los sectores populares, se presenta como totalmente impracticable a nivel empírico.

En este sentido, el golpe de Estado de 1976, autodenominado Proceso Reorganización Nacional, el cual presentó la particularidad de reunir dentro de sí al conjunto de las tres Fuerzas Armadas, representa el último eslabón de esta cadena de interrupciones del orden institucional para desplazar a unas autoridades elegidas democráticamente.

No obstante, la característica más relevante de esta nueva administración castrense será el carácter refundacional que la misma presentará y que, en base a las experiencias fallidas de los gobiernos militares previos, le indicaba que la única forma

de encaminar el rumbo del país era encarando un proceso de reestructuración de la sociedad en su conjunto, el cual debía ser operado "de arriba hacia abajo" por las Fuerzas Armadas, el único actor social no "contaminado" ni por la política ni por los diferentes intereses corporativos que atraviesan a las organizaciones de la sociedad civil.

Fue en base a ese espíritu cruzado que los militares procesistas, atravesados entre otras influencias por la Doctrina de Seguridad Nacional, llevaron a cabo profundas transformaciones en la vida social, política y, sobre todo, económica del país, encarando en este último aspecto un proceso de transformación de la estructura productiva nacional, de las estrategias de valorización del capital y de los mecanismos de acumulación de excedente.

Las mismas, que mostraban un perfil netamente liberal-conservador, así como una fuerte tendencia a la concentración y centralización del proceso de acumulación de capital, parecían brindar una respuesta a las tan postergadas cuentas pendientes que la fracción más concentrada de la clase dominante nacional tenía para con sus rivales de la burguesía argentina, surgida al calor del peronismo y la industrialización por sustitución de importaciones y, sobre todo, las clases populares y trabajadoras.

En relación con esto, y retomando lo que mencionáramos previamente con respecto a la distribución de las cargas y los costos en los que incurre el país cada vez que debe atravesar por un proceso de crisis, la Argentina presenciaría durante este período el nacimiento de una "carga" que condicionaría a partir de ese momento cualquier decisión ligada al ejercicio de su soberanía como nación: el crecimiento exponencial de su deuda externa y su posterior proceso de transferencia al sector público.

Las consecuencias desastrosas de esta medida, entre otras de similar gravedad, excedieron largamente al período analizado en el presente trabajo, a la vez que ejercieron una férrea presión sobre el gobierno constitucional que asumió el poder luego de la apertura democrática, así como un profundo condicionamiento sobre todas sus decisiones relevantes. Las "deudas" heredadas por la nueva administración atravesaban al conjunto de la sociedad, lo cual provocó que debieran salir a la luz nuevas estrategias de apelación a un electorado que se encontraba descreído y distanciado con respecto a cualquier tipo de manifestación que pudiera ser interpretada como política.

Es por eso que, en base a todo lo mencionado anteriormente, este trabajo se plantea como hipótesis de desarrollo que, dada la virtual situación de nivelación

existente entre las fracciones de clase dominantes en la Argentina, a la cual Portantiero denomina de "empate hegemónico, y la posibilidad que cada una de ellas tiene de ejercer su poder de veto sobre el proyecto de las otras, la fracción más concentrada del capital del país, la "oligarquía diversificada" de acuerdo a la terminología propuesta por Basualdo, con el fin de imponer su propio proyecto hegemónico y consolidar de esa manera la "revancha oligárquica" de la que también habla Basualdo, instaurando así un modelo de acumulación novedoso que vendría a socavar las bases del existente en el país durante las últimas tres décadas, suple la que a priori es su principal debilidad estructural que es la falta de un correlato o fuerza política que represente sus intereses en la sociedad civil y en la vida política de la nación, apelando al recurso del golpe de Estado institucional encabezado por las Fuerzas Armadas, produciéndose de esa forma una confluencia entre los proyectos de ambos grupos.

A su vez, las Fuerzas Armadas plantean un "Proyecto Nacional" que se presenta como superador con respecto a los "fracasos" evidenciados por las anteriores gestiones militares de gobierno, pero cuyo objetivo es en realidad provocar una radical transformación de las estructuras económicas y políticas a través de la eliminación de la resistencia por medio de la denominada "lucha antisubversiva", siendo en este sentido la fracción más concentrada de la clase dominante del país y sus representantes a nivel técnico e intelectual el grupo más adecuado para llevar adelante el plan de gobierno de la Junta Militar en todo lo relacionado al proceso de disciplinamiento que debía encararse en el mundo del trabajo y a nivel del modelo de acumulación.

Teniendo en cuenta lo planteado y la hipótesis de trabajo establecida, el presente trabajo se plantea como objetivo general contribuir al análisis y descripción de la convergencia entre los proyectos de la fracción más concentrada del capital en la Argentina y el gobierno militar durante el Proceso de Reorganización Nacional y cómo, a partir de producida la misma, dicha fracción de clase dominante logró consolidar su proyecto hegemónico, postergando los proyectos de las fracciones antagónicas a las cuales se enfrenta, superando la que, como se dijo, se presenta como su debilidad estructural más importante, la falta de correlato político en la sociedad civil, rompiendo de esta manera la situación de virtual nivelación en que se encontraba con respecto a los otros grupos de poder existentes, consolidando de esa manera la instauración de un nuevo

modelo de acumulación en el país, así como también el elenco militar pudo consolidar las bases para lo que sería el Proceso de Reorganización Nacional.

Con respecto a los objetivos específicos planteados, los mismos apuntan a: establecer en qué consistían tales proyectos y qué medidas se tomaron para llevarlos a cabo, describir la formación del "complejo militar-industrial", así como también dar cuenta de cómo se manifestó la existencia de la gestión liberal-corporativa llevada a cabo por los nuevos cuadros tecno-burocráticos y detallar que cambios generó el nuevo modelo de acumulación instalado en el país luego del golpe de Estado, no sólo a nivel de la estructura económica-productiva, sino también a nivel político-social y, atento a esto, puntualizar cuál fue el papel que asumieron los diferentes grupos y partidos políticos, así como también la sociedad en general, con respecto a los proyectos de los grupos dominantes y el gobierno militar.

El desarrollo de la argumentación se encuentra enmarcado dentro de la Sociología Histórica, siendo su propósito realizar un análisis histórico/sociológico de un período determinado de la historia argentina reciente. La metodología a utilizar pretende dar cuenta de la situación existente en el momento histórico seleccionado, estableciendo un marco teórico cuya estructura conceptual principal es la provista por el materialismo histórico.

En este sentido, no sólo se toman las categorías y conceptos principales incluidos en la que se podría llamar la principal corriente dentro de dicha teoría, es decir, la marxista-leninista, con sus conceptos de clase y fracciones de clase, capital, modo de producción y modelo de acumulación, entre otros, sino que también se procura recuperar los aportes teóricos de Antonio Gramsci, sobre todo aquellos ligados a categorías tales como hegemonía y transformismo, así como también los análisis por el realizados con respecto al accionar corporativo de las clases y fracciones de clase dominantes y su comportamiento dentro de lo que el autor denomina bloque histórico, en tanto la legitimidad de los proyectos de estos grupos, así como su capacidad política están dadas también en función de su capacidad de validarlas frente a la sociedad civil: la posibilidad para estos de convertirse en una alternativa hegemónica depende de ello.

A fin de organizar la exposición, el trabajo está estructurado de la siguiente manera: una introducción en la que se describe el tema principal del trabajo y las características que revisten al mismo de relevancia dentro del estudio de la historia

política-económica de la Argentina; cinco capítulos, los cuales están divididos, según su desarrollo, en: un primer capítulo que tiene como objetivo trazar las trayectorias históricas de los dos grupos que fueron los principales protagonistas del período analizado, las Fuerzas Armadas y la fracción más concentrada del capital nacional; un segundo capítulo que posiciona al Proceso de Reorganización Nacional en su correspondiente marco espacio-temporal, dando cuenta del contexto nacional, regional e internacional; un tercer capítulo que describe no sólo de cómo se ejecutó el golpe de Estado de 1976, sino también como se puso en funcionamiento la feroz maquinaria represiva y en qué consistía el proyecto de gobierno de las cúpulas militares; un cuarto capítulo que analiza el modelo económico implementado por el gobierno militar, la valorización financiera, así como todas las transformaciones que su ejecución implicó; y, finalmente, un quinto capítulo en el cual se describe el proceso de convergencia entre los proyectos de ambos grupos, a partir de los mecanismos de las cuasi rentas de privilegio, el funcionamiento del complejo económico-estatal privado y la gestión liberal-corporativa del equipo económico de la dictadura.

Al finalizar la argumentación contenida en los diferentes capítulos del trabajo, arribamos a las conclusiones alcanzadas producto de su realización. En las mismas, se pretende comprobar si, efectivamente, existió un proceso de convergencia entre los proyectos de los dos grupos que resultaron los principales actores del Proceso de Reorganización Nacional: las Fuerzas Armadas y la fracción más concentrada de la clase dominante argentina, a la cual dimos en llamar la oligarquía diversificada. Dicha convergencia, la cual habría resultado de la coincidencia de diagnósticos con respecto a qué debía hacerse para reencausar y devolver el orden a una nación en crisis, terminaría por acercar a ambos grupos y encaminarlos hacia la realización de sus objetivos, los cuales, a pesar de ser específicos, tenían muchos puntos de contacto.

Al análisis de dicho proceso de convergencia entre estos dos grupos, de cómo se estructuró el mismo y las consecuencias que provocó es que se consagran las siguientes páginas.

***CAPITULO I*: ANTECEDENTES DE LOS PRINCIPALES ACTORES DEL PROCESO DE REORGANIZACION NACIONAL**

El presente capítulo tiene como objetivo describir la dinámica inestable y de crisis estructural permanente que el sistema político nacional comenzó a experimentar a partir del año 1930, fecha en la cual tuvo lugar el primer golpe de Estado del siglo XX en la Argentina y que, durante un espacio de poco más de medio siglo, consagraría a dicho mecanismo del golpe de Estado institucional como un mecanismo legítimo para llevar a cabo los recambios de autoridades.

Al mismo tiempo, convertirá a las Fuerzas Armadas, con especial énfasis en el Ejército, en un interlocutor político y válido, a la vez que el país será víctima de un estado de crisis estructural permanente, la cual, como veremos, responde en su mayor parte al accionar y al perfil de su clase dominante por excelencia.

1.1 Inestabilidad y fragilidad del sistema político nacional: la alternancia entre civiles y militares

A partir del año 1930, la alternancia en el poder entre gobiernos elegidos democráticamente y aquellos de corte autoritario ejercidos por las Fuerzas Armadas, más específicamente por su fuerza más importante y representativa, el Ejército, se convirtió en una constante en la vida política nacional, dinámica que convirtió al Ejército en un interlocutor válido en las diferentes discusiones de importancia que se daban en el ámbito público argentino. Lo que es más, su fortaleza radicaba principalmente en el hecho de que se convirtió en un actor de tal relevancia que las principales fuerzas políticas del país necesitaban imperiosamente de su aprobación y su anuencia para ejecutar sus diversos proyectos e iniciativas de mayor relevancia.

En este sentido, y con el fin de ilustrar la mencionada dinámica de la vida política argentina desde el comienzo de la alternancia en el poder entre civiles y militares, Alain Rouquié nos provee de un clasificación que resulta a todas luces ilustrativa de dicho proceso, a partir de la cual el autor separará a los distintos gobiernos civiles surgidos desde 1930 en tres categorías, las cuales se agregan a las previamente existentes con

respecto a los regímenes militares, las que pueden dividirse en "provisional o caretaker", dentro de la cual se podría ubicar al gobierno de la Revolución Libertadora de 1955, que derrocara al general Perón en su segunda presidencia constitucional, clasificación que en ocasiones puede también adoptar la modalidad del disfraz civil, como fue el caso del golpe palaciego de 1962, que desplazó del poder al gobierno de corte desarrollista del Dr. Arturo Frondizi; la segunda alternativa de clasificación para gobiernos militares es aquella que Rouquié denominará "constituyente", dentro de la cual incluye los mandatos de la Revolución Argentina de 1966 y el Proceso de Reorganización Nacional de 1976.[1]

En cuanto a los gobiernos civiles, el autor desarrolla los siguientes tres tipos para caracterizarlos: en primer lugar se encuentran los que se apoyan en la tutela de las Fuerzas Armadas para ejercer su gobierno, como es el caso de los primeros mandatos de Juan Domingo Perón hasta los años 1951-1952; en segundo término, están aquellos que gobiernan neutralizando al Ejército por contar con cierto nivel de legitimidad militar propia, siendo el caso más representativo el de la Concordancia liderada por el general Agustín P. Justo durante el período que va desde 1932 a 1938; y, finalmente se ubican aquellos cuyo inexorable destino es ser victimas de un golpe de Estado militar que los desplace del poder.[2]

Como agregado a esta caracterización de los diferentes gobiernos civiles desde 1930 puede mencionarse un detalle llamativo por su constante presencia, y que está relacionado con el hecho de que, a pesar de que mostraban un escaso nivel de radicalización o de que no existían grandes diferencias a nivel programático entre los diferentes grupos políticos, lo cual se desprende del consenso bastante amplio que existía en lo referente a los lineamientos económicos a seguir por estas fuerzas políticas y sociales, la victoria a toda costa sobre los adversarios siempre se encontró privilegiada por sobre el resguardo de la vida institucional.

Esto se da a pesar de que ninguno de los golpes de Estado antes mencionados se produjo en la Argentina con el fin de derrocar a un gobierno que representara una amenaza para el *status quo* social, dada su pretensión de reformas a nivel estructural. A pesar de no existir registro alguno en nuestro país de ningún presidente electo que haya accedido al poder presentando un programa de gobierno de corte socialista o cualquier

[1] Rouquié, Alain. "Hegemonía militar, Estado y dominación social". En Rouquié, Alain (comp.): **Argentina, hoy**. pág. 15.
[2] Ibidem. pág. 15.

alternativa en este sentido, se observa como todos los partidos, en los momentos en que les toca interpretar el papel de ser fuerzas de oposición, ejercen maniobras de carácter conspirativo halagando a los militares golpistas y erosionando los esfuerzos institucionales de todo tipo por preservar la endeble legalidad alcanzada, lo cual nos da la pauta para comenzar a analizar la fuerte vinculación entre militares y políticos en el complejo juego de las representaciones sociales y políticas en la Argentina.

En lo que respecta a la dinámica de las formas de intervención de los distintos gobiernos militares, vemos que fueron evolucionando hacia una mayor publicidad, a medida que la dominación militar se iba consolidando a nivel institucional. Lo que se observa es que, por un lado, la proscripción de los partidos mayoritariamente populares con el recurso de la "democracia restringida" y, por el otro, las diferentes alianzas o convergencias cívico-militares impiden que los principios constitucionales de corte liberal tengan efectivamente relación con el poder real, contribuyendo de esta manera al descrédito del sistema político legal desestabilizándolo de forma permanente[3].

En este sentido, fue el general Agustín P. Justo el primero en liderar un régimen representativo de tipo limitado, el cual sucedió a la fase de "democracia ampliada" inaugurada con el triunfo del Partido Radical en el año 1916, y que se extendió hasta 1930. Dicho régimen fundamentó su posibilidad de existencia tanto en la proscripción de su principal adversario en la arena política, el mencionado radicalismo, como así también en un sistema de fraude electoral de un carácter bastante osado, al cual se dio en llamar "patriótico", dado que permitía a las tradicionales oligarquías vernáculas la conservación del poder recuperado de manos de la plebe luego del golpe del año 1930. Este mecanismo que, a través de las proscripciones y el fraude electoral, pospondría a la UCR políticamente desde 1930 hasta 1943, se reeditaría con el Partido Justicialista y el movimiento peronista en su conjunto a partir de 1955, cuando el triunfante golpe de Estado denominado Revolución Libertadora proscribiera al que se convirtió a partir de 1946 en el partido mayoritario por excelencia de la política argentina.

Todo este equilibrio inestable de alianzas político-militares y fragilidad institucional se vio a su vez aún más complejizado por el exilio de Perón luego de ser derrocado en 1955, y por la consecuente ausencia de alternativas políticas para sus seguidores, lo cual da pie a una serie de escisiones y divisiones en los partidos en lo que

[3] Ibidem. pág. 16-17.

se refiere a la mencionada "cuestión peronista", polémica de la cual no estuvieron exentas las Fuerzas Armadas. Planteado este escenario político, se establecerán una serie de afinidades de larga duración entre civiles y militares que dejarán asentado al mecanismo del golpe de Estado institucional como el proceso normal de devolución del poder público. Ya sean aquellos que reclamen ese poder en nombre de la justicia social, de las libertades y la democracia, de los ideales del liberalismo o del populismo, todas las fuerzas políticas manifestaron su disposición a enfrentarse en forma despiadada e ilegal para recuperarlo, dinámica a la cual hay que agregar la constante presencia del Ejército en la política, el cual a su vez contaba con no pocas ni sencillas internas y frentes propios.

El electo presidente en el año 1958, el radical disidente y desarrollista, Dr. Arturo Frondizi, quien triunfara en la contienda electoral gracias al apoyo masivo de los votantes peronistas, que lo acompañaron a instancias del propio líder del movimiento desde el exilio, llevó adelante su gobierno bajo la estricta tutela de las Fuerzas Armadas, cuya dirección estaba encarnada en ese momento por los sectores más fervientemente antipopulistas y antiperonistas, denominados habitualmente en la jerga política del momento como "gorilas".

En este sentido, la cúpula mayor del Ejército consideraba que la victoria de Frondizi en las elecciones era el resultado de una alianza antidemocrática y espuria. Como agravante, cabe agregar que el triunfo electoral del candidato desarrollista había pospuesto las pretensiones presidenciales del candidato de las Fuerzas Armadas, el cual pertenecía a la tendencia liberal del radicalismo. Esto provocaría que dicho partido opositor, apoyado por las jerarquías militares, no ahorrara al nuevo presidente ningún tipo de molestias, asentando desde su asunción misma, las bases para un nuevo golpe de Estado, el cual finalmente se produciría cuatro años después, cuando la coalición conformada por los radicales del pueblo y los militares antipersonalistas le derrocase en 1962.

La historia se repetiría de manera muy similar en 1963, año en el que fue elegido presidente el radical del pueblo, Dr. Arturo Illia, por una minoría de votantes, en un contexto donde el peronismo permanecía proscripto. Esta vez, y dados los cambios en la cúpula del Ejército, la cual pasa a evidenciar un carácter mucho más cercano al desarrollismo que al "gorilismo", serán estos militares antirradicales junto con los

frondizistas los que comenzarán a gestar un nuevo golpe de Estado, el cual finalmente tuvo lugar en 1966, y que se caracterizó por su ejecución no violenta y muy bien planeada.

Dicho golpe, que venía anunciándose desde hacía ya un año atrás, contó con una fuertísima campaña propagandística, la cual se dedicó a consagrar la figura de estos militares "arcángeles blindados"[4] como los abanderados de una epopeya tecnológica y de la grandeza nacional, satirizando la figura de los radicales del pueblo, ligándolos al lugar común de la "modorra" y la siesta provinciana, simbolizadas en las ya clásicas tortugas y palomas.

De esta manera, observamos la tutela que ejercen las Fuerzas Armadas sobre la vida política nacional, interviniendo siempre, pero no como solución de última instancia frente a la presencia de una situación extrema que pudiere ameritarlo, sino como un verdadero partido militar abocado a hacer triunfar aquella línea política con la cual estuvieren identificadas sus mayores jerarquías, ignorando de esta forma la expresión de las mayorías en los comicios, o incluso aquella sostenida por otro sector del propio Ejército.

Sin embargo, el gobierno militar de la "Revolución Argentina", instaurado en 1966, va a presentar características diferentes a sus predecesores. Como se mencionó en la clasificación del comienzo del capítulo, dicha dictadura pertenece a las de tipo constituyente, y su principal referente y quien asumiera la presidencia de la nación, general Juan Carlos Onganía, se propuso llevar adelante grandes reformas a nivel económico y social, las cuales producirían una futura redistribución de las fuerzas políticas.

Dichas transformaciones iban a orientarse en favor de las grandes sociedades industriales nacionales y, sobre todo, de las extranjeras, reformas que, de acuerdo al presidente, necesitarían de un período de alrededor de diez años para ser implementadas, las cuales, a su vez, daban la pauta de haberse generado en un espacio ideológico signado por las concepciones neocorporativistas. No obstante, y luego de la notable escalada que experimentó la violencia política y revolucionaria, producto del ahogo de las libertades llevado a cabo por esta dictadura militar-tecnocrática, y que hiciera eclosión en 1969 con el "Cordobazo", el entonces presidente, general Agustín Lanusse,

[4] Ibidem. pág. 18.

reemplazante de Roberto Levingston, quién a su vez reemplazara a Ongania, procuró generar para las Fuerzas Armadas un retiro en buenos términos del poder, buscando una salida que permitiera una vuelta a la vida institucional pero no sin la tutela de los militares.

Dicha propuesta recibió el nombre de "Gran Acuerdo Nacional", y tuvo como propósito principal buscar la aprobación civil del cumplimiento por parte de los militares de su "misión", así como también una ambiciosa intención de presentar a las futuras elecciones a un candidato militar que pudiera asegurar la pacificación del país y, a su vez, disipara en las filas del Ejército el sentimiento de frustración producto de una nueva retirada del poder sin haber logrado alcanzar los objetivos propuestos. Por supuesto, esta intentona fracasó y los militares fueron testigos del retorno de Perón a la primera magistratura de la nación, apoyado en forma absolutamente masiva por el voto popular, y que se encarnó en la victoria electoral de Héctor J. Cámpora en las elecciones de 1973, las primeras en las que volvía a partir el justicialismo en forma libre luego de 18 años de proscripción.

1.2 Institucionalización y legitimidad política de las Fuerzas Armadas argentinas

Los hechos históricos arriba mencionados nos permiten la posibilidad de discernir determinados aspectos constantes de la participación de los cuadros militares en la vida política nacional, así como también comprender en qué forma dicho involucramiento alcanzó un carácter institucionalizado y consagró la existencia del denominado "partido militar".

En una primera instancia, podemos observar cómo la Argentina se diferencia de otros países donde la intervención en la política por parte de las Fuerzas Armadas se presenta como una reserva en última instancia del orden establecido en situaciones excepcionales. Dicha situación de asimetría con respecto a los sectores castrenses de otras naciones podría inducir a pensar que el permanente estado de politización de los militares argentinos derivaría simplemente de la débil consistencia que dicha estructura presenta a nivel institucional.

No obstante, esta hipótesis queda completamente descartada dada la marcada distinción existente en el país entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas. La Argentina cuenta con un Ejército modernizado y profesional al estilo prusiano desde principios del siglo XX, el cual pertenece mucho más al aparato del Estado que a la sociedad civil, lo cual les representa un enorme grado de autonomía, tanto en relación a los distintos gobernantes de turno como a los grupos sociales y políticos en general, con respecto a los cuales incluso se muestran hostiles en su gran mayoría.

En este sentido, las relaciones cívico-militares en la Argentina se diferencian notablemente de las existentes en los sistemas constitucionales pluralistas, estableciendo unas reglas de juego ligados al desarrollo de valores pretorianos que atraviesan la vida política nacional. Como se mencionó, las Fuerzas Armadas constituyen un actor legítimo del sistema político institucional, lo cual queda evidenciado en que nunca las insubordinaciones militares en contra del orden constitucional provocan la unión de las diferentes fuerzas civiles a fin de ejercer una férrea defensa de las instituciones democráticas. Lo que es más, la fuerza política que al momento de un golpe se encontraba ocupando el rol de opositora, generalmente solía brindar su apoyo a los militares golpistas, en contra de quien fuera que estuviera ocupando el poder del Estado, dinámica que descansa en la creencia de aquellos derrotados en la contienda electoral de poseer un carácter de legitimidad superior al de sus adversarios, lo cual les permite justificar su apelación a las fuerzas castrenses para ejecutar su revancha política, mecanismo del que todas las agrupaciones políticas principales han sido víctimas y victimarias en algún momento.

En consonancia con lo anterior, podemos señalar que, y como ya se mencionó, todos los partidos y agrupaciones políticas buscan la aprobación de los militares para sus planes. La importancia adquirida por el Ejército en el juego político-institucional lo convierte en un actor principal de la actividad decisional más importante, y "los militares son vistos como socios mayoritarios en un juego complejo y a veces bizantino en el que nada se hace contra ellos o sin ellos"[5]. Consecuencia de esto, todas los partidos políticos buscan que el Ejército responda a sus propias aspiraciones, las cuales pueden incluso ser contradictorias, como fue el caso del Partido Comunista, el que, a pesar del acérrimo anticomunismo de las Fuerzas Armadas, se empecinó en la búsqueda de oficiales

[5] Ibidem. pág. 27

"patriotas y progresistas"; el mismo PC que en 1976 diera un cierto apoyo crítico al gobierno de Videla a fin de evitar que el golpe pudiera tomar una dirección pinochetista-fascista, procurando favorecer la formación de una "convergencia cívico-militar" que pudiera permitir salir del impasse institucional y retornar a los valores democráticos.

Es así que el militarismo adquiere un carácter universal y el "sueño del coronel propio"[6] se convierte en el mecanismo establecido a través del cual los grupos políticos pueden especular con llegar al poder. Dada esta característica del sistema, civiles y militares, lejos de enfrentarse, se complementan y disponen alianzas que evidencian un perpetuo equilibrio inestable, razón por la cual puede argumentarse que no son los militares los exclusivos responsables de la fragilidad institucional, en tanto fue testigo la historia nacional de cómo los grupos civiles rondaban los cuarteles en busca de aliados armados que pudieran ejecutar los golpes de Estado que ellos no podían llevar a cabo, lo cual se complementa, por supuesto, con la búsqueda por parte de las cúpulas de las Fuerzas Armadas de apoyos políticos y sociales sin contrapartida. En este contexto de militarización de la vida pública, la estabilidad y la regularidad institucional se vuelven imposibles, lo cual se agrava por los propios intereses corporativos de los militares como institución.

Ahora bien, cabe preguntarse frente a esta situación, cuál es el por qué de esta guerra de todos contra todos en el sistema político argentino, la cual terminó llevando en última instancia a este estado de militarización de la vida institucional, en el que se experimenta un juego de suma cero en el que la destrucción del enemigo se presenta como de vital importancia para la propia supervivencia, objetivo por el cual es pasible de ser derribado el tan dificultosamente obtenido orden legal y constitucional. Las respuestas más tradicionales al respecto no parecen ser en este sentido las más satisfactorias.

Una de ellas, aquella que trata de explicar esta situación como resultado del poco dinamismo económico, choca en realidad con el hecho de que no puede achacarse la puesta en marcha de las "revoluciones" militares exitosas a una caída en la actividad económica, lo cual se refleja en el crecimiento que experimentó el PBI por aquellos años inmediatos a los golpes de 1955, 1962 y 1970, siendo este último el año que precedió el

[6] Ibidem. pág. 28.

cambio de un presidente militar, contexto que mostraba también una considerable tasa de crecimiento económico anual.[7]

Las hipótesis que intentan explicar esta particularidad del caso argentino como consecuencia de una supuesta crisis de participación política no son menos erradas. Teniendo en cuenta que las intervenciones militares tienen por principal objetivo desconocer los resultados del sufragio universal, podría inferirse que dichos golpes institucionales funcionarían como mecanismos desmovilizadores de las clases medias y populares, urbanas y rurales, que adquirieron sus derechos políticos efectivos en forma temprana.

La inexactitud de dicha explicación permite, no obstante, plantear varios interrogantes: cómo es que una participación política consentida por los grupos de poder puede provocar una crisis de participación, así como también por qué ante la ausencia de cualquier amenaza de tipo realmente revolucionaria, el sistema democrático y representativo no puede sostenerse. La experiencia de otras sociedades, que han demostrado el posible uso conservador del sufragio, incluso aquellas con fuertes rigideces, sugiere que dicho recurso del mecanismo violento de desmovilización para quebrar el normal funcionamiento del sistema proviene del marco político, y que sólo móviles ligados a los intereses y a la composición de la clase dominante nacional, más conocida como "oligarquía", podrían justificarlo.

Desde esta perspectiva, la ausencia de un partido conservador de masas de características definidas, capaz de reunir la confianza de los grupos económicos y sociales principales y conformar un frente con posibilidades concretas de ganar las elecciones resulta muy significativa. La falta desde 1914 de un partido con dichas características, pasible de formar parte del juego institucional, hace pensar que los intereses vinculados al *status quo* nunca pudieron consolidar una representación política legítima y sólida que les permitiera participar de los comicios con cierta chance concreta de ganar, lo cual explicaría, en cierta forma, su inclinación a actuar por fuera o incluso en contra del sistema representativo y a mostrarse tan indulgentes con el fraude electoral y las proscripciones políticas.

En base a todo lo anterior, arribamos en forma provisional a una conclusión: las características que asumen los hechos políticos, sociales y económicos más relevantes se

[7] Ibidem. pág. 30.

debe a la existencia de un grupo pequeño que, a pesar de no estar ligado directamente al aparato del Estado, ejerce sobre este una influencia tan determinante que condiciona en forma directa la soberanía del mismo y de sus medidas, y que participa de las decisiones más importantes relacionadas con la vida institucional de la nación a través de la presión que logra ejercer mediante los diferentes mecanismos que tiene a su disposición, producto del cúmulo de poder que detenta. Llamaremos a dicho grupo, recuperando la terminología aportada por Eduardo Basualdo[8], la "oligarquía diversificada". Al análisis de su origen, intereses y actividades está dedicado el siguiente apartado.

1.3 Perfil, origen y comportamiento de la "oligarquía diversificada" argentina

Jorge Schvarzer y Jorge Sábato[9], en sus análisis de esta situación de permanente crisis estructural y política que vive la Argentina, llegan no solamente a la conclusión que adelantáramos en el apartado anterior de que en gran parte dicha crisis de representatividad y de ausencia de orden institucional se debía a la existencia en el país de ese grupo concentrado que detenta la hegemonía del poder económico y social, al que denominamos "oligarquía diversificada", sino que agregan, en consonancia con lo anteriormente dicho, que dicha circunstancia podría encontrar su explicación en que estos grupos no lograron controlar exitosamente a los distintos gobiernos electos ni lograron establecer alianzas permanentes y estables con los distintos militares golpistas que colaboraron con ellos para derribarlos; no obstante este argumento, los autores llegaron además a la conclusión de que "los grupos dominantes prefirieron y estimularon sistemáticamente la ruptura de toda estabilidad política en el pais".[10]

A diferencia de lo que indicaría la lógica, cuya demostración podemos observar en la evolución de la actividad económica de los países centrales durante sus períodos de crisis, Schvarzer y Sábato dilucidan, luego de un profundo análisis, que durante estos cimbronazos institucionales las clases dominantes nacionales no sufrieron graves perjuicios como para reorientar sus comportamientos, los cuales fomentaban el caos

[8] Basualdo, Eduardo. **Estudio de Historia Económica Argentina**. p. 97.
[9] Sábato, J. y Schvarzer, J. "Funcionamiento de la economía y poder político en la Argentina: trabas para la democracia". En Rouquié, A. y Schvarzer, J. (comps.): **¿Cómo renacen las democracias?** pág. 179.
[10] Ibidem. pág. 179.

económico, social y político, a lo cual debería agregarse que tampoco consideraron que, favoreciendo el crecimiento de la economía en su conjunto, pudieran ver incrementados sus ingresos.

Partiendo de esta premisa de que el caos económico y social no resultaba verdaderamente perjudicial para estos grupos, los autores desarrollan una serie de explicaciones ligadas a la lógica del sistema político y económico argentino y su clase dominante por excelencia, los cuales pueden permitirnos una mayor claridad con respecto a esta situación particular, y que se desarrollan a continuación.

La primera es aquella ligada a la propia lógica del sistema político argentino y a su base económica. La economía de cualquier sociedad se articula alrededor de tres fenómenos básicos: la producción de bienes y servicios, las distintas formas que adquiere el proceso de expansión y crecimiento de esa producción y los distintos mecanismos de distribución de dichos productos y servicios en la sociedad. La particularidad del caso argentino, a diferencia de las naciones centrales, reside en el hecho de que en nuestro país los sectores productivos no han logrado nunca la hegemonía a nivel del sistema económico, sino que buena parte del proceso económico tiene su origen en un contexto donde lo que es principalmente fomentado es la captación de recursos en los espacios de circulación del dinero, y no en aquellos circuitos ligados a las actividades productivas, lo cual imprime al sistema una particularidad que lo distingue, por la preeminencia del comercio exterior y del manejo del dinero, de los que tuvieron lugar en los países centrales.

La segunda explicación está relacionada con la génesis y consolidación histórica de dicho modelo de funcionamiento económico, y que puede dividirse en tres diferentes momentos: el primero es el de la integración de la economía argentina al mercado mundial durante el período 1880-1920, durante el cual se consolida dicho modelo. Dicho proceso se originó gracias al exponencial crecimiento de la producción y la exportación de granos y carne, aprovechando las ventajas ofrecidas por la pampa húmeda, una enorme pradera templada y despoblada, de las más grandes del planeta, que se logró explotar hacia la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, no es suficiente con señalar las ventajas otorgadas por las condiciones naturales del país, dado que en otras naciones como Estados Unidos, Canadá o Australia, las condiciones climáticas y naturales eran

altamente similares, por lo cual es relevante señalar las diferencias con dichos casos, las cuales se desprenden del sistema de producción adoptado en la pampa.

El mismo otorgó una mayor eficiencia económica a las grandes explotaciones frente a las de las familias de colonos, lo cual permitió consolidar la formación de grandes latifundios y dio origen a una clase de grandes terratenientes y, junto con esto, a un fuerte proceso de concentración de la riqueza. Por otra parte, acostumbró a dicha clase empresaria a actuar con un criterio de eficiencia capitalista, el cual les dictaba que debían alternar permanentemente la producción agrícola o ganadera en función de las oportunidades ofrecidas por el mercado, comportamiento que les permitía disminuir riesgos y generar un margen de ganancia superior al que se obtendría realizando incrementos en la productividad de los factores, lo cual desestimó, por supuesto, la posible colocación de ganancias en inversiones productivas especializadas y favoreció la preferencia por mantener los activos líquidos o semilíquidos, todo esto apoyado en la alta productividad de la pampa húmeda, la que les mostraba el carácter más provechoso de ampliar la frontera de explotación de la tierra en vez de aumentar la productividad de la misma.

El segundo momento histórico es aquel denominado de cierre de la economía argentina mediante la sustitución de importaciones, y que podríamos ubicar en el período 1930-1960. Luego de la concreción de la ocupación de la pampa húmeda hacia 1920, fenómeno que quedó en un segundo plano como consecuencia de la crisis de 1929, el nuevo proceso de industrialización se orientó a atender un mercado local previamente existente y que hasta ese momento satisfacía su demanda con bienes provenientes del exterior, por lo que la imposibilidad de importar bienes extranjeros otorgó a la industria nacional naciente la chance de operar con un mercado de tipo cautivo.

La evolución de esta industria tuvo la particularidad de darse con una modalidad de rama por rama, por lo cual el crecimiento del conjunto de la actividad industrial sólo reflejaba la suma de avances esporádicos de corta duración que no lograban dinamizar al conjunto de la misma, a lo cual debe agregarse que dicho proceso estuvo liderado por grandes empresas oligopólicas y grandes grupos industriales nacidos al calor del modelo de funcionamiento empresario que estimulaba la concentración y les permitía manejar a discreción los precios relativos y, por lo tanto, obtener ingresos reales muy superiores a los que se darían en una economía de libre mercado. Hay que señalar, sin embargo, que

este cambio en el funcionamiento del modelo económico, lejos de desanimarlos, alentó a los empresarios, los cuales utilizaron su tendencia habitual a manejarse con alta liquidez para convertirse en empresarios multifacéticos que aprovechaban los cambios de frente para llevar su dinero y sus inversiones a aquella rama de la industria que les garantizara la mayor rentabilidad posible en vez de buscar dicho aumento de la ganancia a través de la especialización productiva y del aumento de la productividad.

En este proceso el papel del Estado comenzó a ser fundamental en lo referente a la distribución del ingreso. La creciente necesidad de divisas y la presión de los grandes intereses económico-corporativos lo llevaron a ejercer un fuerte control de las importaciones, siendo las decisiones del sector público las que definían la evolución de la balanza comercial y, a través de la misma, el perfil de la evolución industrial, la estructura de los precios relativos y la distribución del ingreso. Dicha importancia en el manejo del Estado quedará aún más en evidencia con el surgimiento del peronismo en la década del cuarenta, el cual dio pie a que nuevos grupos sociales que fueron adquiriendo protagonismo reclamaran un mayor nivel de participación en la distribución del ingreso y en la vida política, pero excedería los fines del presente trabajo entrar en mayores precisiones sobre dicho proceso.

Finalmente, el último momento es el de la apertura al circuito financiero internacional desde 1960. A pesar de no contar con una fecha de inicio tan clara como fue 1929 para el período anterior, los cambios en el funcionamiento del modelo económico comenzaron a tomar forma a partir de ese año y alcanzaron su expresión más acabada desde 1975 en adelante. Las características del modelo anterior llevaron al empresariado a reforzar ese comportamiento que los llevaba a priorizar el manejo del dinero líquido y a comenzar a fugar capitales del país. La puesta en práctica de ambas estrategias les permitió protegerse de los riesgos creados por la puja de ingresos, a la vez que encontraron en las mismas poderosos mecanismos de obtención y canalización de beneficios por fuera de la esfera productiva.

Desde 1955, cada vez que los representantes de la clase dominante asumieron el control de la política económica ensayaron estrategias de liberación del mercado financiero y la eliminación de restricciones al flujo de divisas con el exterior, a lo cual se suma el hecho de que la escasez relativa de inversiones comprometía seriamente las posibilidades de crecimiento de la economía argentina, agravado esto por un contexto de

fuertes pujas sectoriales, producto del estancamiento económico, que no hacían más que convencer a las clases dominantes de lo adecuado de su estrategia. A su vez, la fuerte presencia de la inflación, a la vez que agravaba el clima de tensión política y social, ofrecía a estos grupos nuevas alternativas de beneficios a través de la manipulación de los precios relativos, proceso que, como veremos en posteriores capítulos, no hizo sino agravarse luego de la segunda mitad de la década del setenta con la llegada al poder de los militares y el denominado Proceso de Reorganización Nacional.

Por último, la tercera explicación que esgrimen los autores tiene que ver con el funcionamiento del sistema político mismo, el que, sujeto a un análisis profundo, da la pauta de tener, debajo de su apariencia de desconcierto absoluto, una lógica que lo guía y que lo mantiene en una inestabilidad de la que sacan provecho los sectores dominantes, y que puede ser explicada a partir de cuatro razones principales.

La primera está relacionada con la tendencia de estos grupos a frenar el crecimiento de la economía y las consecuencias que este comportamiento implica, explicación que puede ligarse en forma directa al comportamiento descrito más arriba, mediante el cual los empresarios nacionales privilegian las actividades comerciales y financieras sobre las productivas, tendiendo a priorizar las decisiones coyunturales y los beneficios rápidos, estancando a largo plazo el crecimiento económico del país. Dicha dinámica tiene, como consecuencia más perversa, el deteriorar la base misma de legitimación del sistema capitalista sobre la cual los grupos privilegiados pretenden construir su hegemonía política.

En la medida en que el crecimiento se retrasa o se bloquea, todas las relaciones de poder en la sociedad comienzan a alterarse y los conflictos se agudizan, lo cual se manifiesta de manera más visible en la situación de puja cada vez más descarnada por la distribución del ingreso con respecto a un total que apenas se incrementa, y donde todos los sectores quieren lograrlo a costa de los otros, siendo la forma más habitual en que se expresa dicha contienda las variaciones de los precios relativos, las cuales se vuelven más abruptas y profundas. A diferencia de lo que ocurre en los países capitalistas centrales, donde las crisis promueven mecanismos de regulación y corrección destinados a resolverlas, en la Argentina el comportamiento de los empresarios les permitía no sólo menguar los daños producidos, sino incluso transformarlos en beneficios, lo cual ayuda a

entender, como veíamos al comienzo de este capitulo, porqué la violencia se convirtió en un mecanismo habitual de resolución de conflictos.

La segunda particularidad que presenta el funcionamiento del sistema político es la que nos alerta sobre la homogeneidad que presenta esta oligarquía diversificada argentina, así como también acerca de la relación que esto guarda con la mencionada crisis de legitimidad política. En este sentido, los empresarios y grupos dominantes locales presentan dos características que los diferencian de sus pares en países que atravesaron procesos históricos similares al nuestro: en primer lugar, la diversificación en las actividades de los mismos impidió que se formaran fracciones netamente separadas que estuvieran inclinadas a defender sus intereses específicos frente a la presión que pudieran ejercer los otros grupos, los cuales los provee de una mucho mayor cohesión interna. En segundo lugar, el modelo de funcionamiento del sistema permite desarrollar en su seno una fuerte concentración de ingresos, creando un estrato superior en su cúpula, la fracción más concentrada de la clase dominante argentina a la que dimos en llamar oligarquía diversificada, la cual dispone de un poder económico formidable y de una influencia política muy poderosa.

A luz de esta particular situación surge el drama de la legitimidad política en la Argentina, dado que, al polarizarse los conflictos políticos en torno a esa fracción de clase dominante, la cual, no obstante podría procurarse algún tipo de apoyo apelando a otros sectores empresarios menores y de la clase media, encuentra virtualmente imposible dejar de ser minoritaria a nivel representativo en un régimen político democrático y con sufragio universal.

Planteada esta situación, la disputa por el poder quedaría encerrada en un dilema irresoluble: si la oligarquía pretendía mantener un régimen de democracia restringida, se generaba una profunda e incontrolable contradicción con la vigencia de una estructura democrática acorde a las necesidades sociales y económicas argentinas; pero, si se admitía que los gobiernos fueran elegidos mediante el sufragio universal y libre, las fuerzas políticas que podían representar los intereses de la oligarquía resultaban inevitablemente minoritarias, sobre todo por la citada ausencia de un partido conservador que pudiera representar a nivel político sus intereses de clase. El resultado de permanente inestabilidad política e institucional está a la vista: la alternancia en el poder

se produjo entonces entre períodos en los que funcionó el sistema democrático y otros en que las elecciones se limitaban o los gobiernos eran impuestos mediante golpes militares.

El tercer aspecto de esta explicación es aquel que destaca la importancia del papel del Estado Nacional en este proceso. Luego de la crisis de 1930 los grupos dominantes comprobaron que controlando el aparato del Estado podían fijarse las condiciones de funcionamiento de la economía, como los tipos de cambio, precios, etc., las cuales modificaban la distribución del ingreso entre los distintos sectores productivos y, correlativamente, entre las clases sociales. Durante el peronismo, estos grupos también comprendieron que ese mismo Estado podía ser utilizado en contra de sus intereses, por lo cual la captura del gobierno pasó a constituirse en una cuestión fundamental en la política.

El último aspecto a destacar en esta explicación del funcionamiento del sistema político y sus clases dominantes, es la tendencia de estas a destruir las distintas formas de organización social. Al ser este no sólo el único grupo que no resulta perjudicado por las sucesivas crisis sino que incluso resulta muchas veces beneficiado por las mismas, no necesita modificar su comportamiento durante estos cimbronazos, lo cual le otorga un margen de maniobra muy amplio y le permite acumular poder, a partir de lo cual consigue eludir cualquier tipo de control social que se intente ejercer sobre el. Esta tendencia se hace mucho más evidente luego de 1976, cuando se comprobó hasta que punto la situación de crisis permanente favorecía a un determinado grupo, que podía actuar sin ningún tipo de trabas y poner en juego de manera completa toda su batería de recursos y acciones. Por supuesto, no estamos hablando de un beneficiario pasivo de dicho proceso, dado que este grupo colaboró intensamente a fogonear esa situación de desorganización social, exacerbando los conflictos y ahondando las rupturas dentro de la sociedad, como, por ejemplo, cuando manifestó su abierto apoyo a la represión desencadenada por el gobierno militar y colaboró en la tarea de desmantelar el Estado benefactor y sus instituciones, además de haberse puesto a la vanguardia de una furibunda ofensiva ideológica en esa dirección.

Ahora bien, a fin de ilustrar empíricamente este modo de actuar de la clase dominante, así como también la manera en que ejerce la defensa de sus intereses específicos, analizaremos el período previo al derrocamiento del gobierno justicialista en 1976 y la posterior instauración del Proceso de Reorganización Nacional. Las idas y

venidas de estos grupos concentrados de poder durante este período deberían ilustrarnos un poco más acerca del diagnóstico que pudieron realizar estos actores luego de esta experiencia, para así comprender cuál iba a ser y por qué, además de cómo lo iban a interpretar, el papel que asumieron luego de consumado un nuevo golpe militar el 24 de marzo de 1976.

1.4 El círculo vicioso del crecimiento inestable y la lucha por la hegemonía social

Durante el período histórico previo al golpe militar de marzo de 1976, es decir, el que va desde el derrocamiento del general Perón en 1955 hasta dicha fecha, el modelo de funcionamiento de la economía, con su correspondiente correlato en la vida política, estuvo signado por lo que se dio en llamar, en términos de Pucciarelli, "un círculo vicioso de crecimiento inestable", o una dinámica de "stop & go".[11]

Este proceso tiene su origen en el momento en que comienzan a vislumbrarse los primeros signos de agotamiento en el funcionamiento de la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones, a la cual se debe agregar también la crisis agónica del régimen político que se venía gestando desde la caída de Perón en 1955. En efecto, la estructura interna del sector industrial se hallaba escindida y desarticulada y, por supuesto, no pudo resolver en forma satisfactoria una de las cuestiones fundamentales de su desarrollo: el crecimiento y consolidación del sector proveedor de productos de consumo final y materias primas industriales estratégicas, tecnológicas y de bienes de capital que su desarrollo requería.

A diferencia de lo ocurrido en las economías industriales centrales, nuestro proceso de crecimiento fue unilateral y unidireccional, es decir, sólo se abocó a la producción de bienes finales o intermedios, desplazándose desde la sustitución de manufacturas simples hacia el centro de esa estructura, buscando mayores niveles de complejidad, pero sin llegar nunca a la constitución de núcleos dinámicos en los cuales deberían desarrollarse las industrias estratégicas con grandes inversiones de capital y tecnología, por lo cual el crecimiento del sector estuvo siempre supeditado a la

[11] Pucciarelli, Alfredo. "Los dilemas irresueltos en la historia reciente de la sociedad argentina". En Pucciarelli, A. (comp.): **Lanusse, Perón y la Nueva Izquierda Nacional en tiempos del GAN**. pág. 23.

importación del exterior de los productos elaborados en dichos sectores ausentes en la economía nacional.

A esto se suma que la estructura intersectorial del conjunto de la economía se halla pobremente integrada, dada su composición caracterizada por la yuxtaposición de grandes sectores mal relacionados y orientados por metas y estrategias frecuentemente contrapuestas entre si. La producción urbano industrial, a medida que se expande, genera una demanda mayor de alimentos y materias primas agrarias, existiendo además, en el caso particular de nuestro país, la necesidad de incentivar el crecimiento de la producción de materias primas exportables destinadas a sustentar con divisas la expansión de la demanda externa generada por el sector industrial importador.

Sin embargo, y a diferencia de la estrategia aplicada en los países centrales, el sector agropecuario-exportador se condujo con total independencia y continuó desarrollando sus tradicionales mecanismos de producción, resultando prácticamente impermeable a los requerimientos de transformación estructural y de aumento de la producción y productividad necesarios para el sector industrial. El estancamiento tecnológico y el mal aprovechamiento de los recursos naturales de la pampa húmeda generó un cuello de botella insuperable en el conjunto de la economía, dado que la convivencia de un sector agroexportador que, pese a sus limitaciones, continuó manteniendo altos índices de productividad, compatibles con las exigencias del mercado internacional, y un sector industrial sustitutivo mucho más retrasado, ligado al mercado interno y que, privado de grandes inversiones y trabajando con bajos niveles de productividad, sólo podía subsistir en un ámbito cerrado, altamente protegido y escasamente competitivo, solamente podía generar un inestable y potencialmente peligroso desnivel en lo que se refiere al funcionamiento de la economía en su conjunto.

Ante la imposibilidad de ser superada, esta asincronía en la composición intersectorial de la estructura productiva se convirtió en un rasgo esencial del funcionamiento de la economía argentina, la cual se presenta como un condicionante absoluto y permanente, no sólo para el modelo de funcionamiento del sector productivo, sino también como origen de gran parte de los enfrentamientos que nacen y se desarrollan en el seno de la sociedad.

Al mismo tiempo, se puede establecer una relación entre esta fuerte discrepancia intersectorial y la debilidad que ha mostrado el proceso de acumulación de capital en la

Argentina durante esos años, lo cual explicaría, como se mencionara anteriormente, el predominio de "cierto tipo de modalidades tecnológicas adaptativas, no innovativas, y (…) la suplantación de inversiones de riesgo por estrategias de acumulación basadas en la explotación de rentas del suelo, o de cuasi-rentas sustentadas principalmente en ventajas monopólicas, derivadas en general del alto nivel de protección creado por la intervención del Estado".[12]

Teniendo en cuenta este detalle, se explica claramente por qué en la Argentina no han existido períodos significativos de desarrollo, sino fases acotadas de expansión, de tipo "burbuja", las cuales surgieron como inteligentes estrategias de adaptación a estímulos externos de desarrollo, ligados, en general, a ciertas modificaciones favorables ocurridas en el modo de funcionamiento del mercado internacional.

Este tipo de empresariado industrial sólo pudo sobrevivir en el mercado y compensar su falta de inversiones de riesgo y su debilidad, disimulando su falta de dinamismo y utilizando permanentemente un recurso de excepción: el subsidio del Estado. El mismo se abocó a la tarea de construir una red reglamentaria destinada a impedir ciertas importaciones, proteger el funcionamiento del mercado interno y encausar la actividad nacional dentro de un vasto y complejo marco regulatorio, deformando de esta manera las reglas de competencia en el mercado interno.

Este modelo de funcionamiento del sistema económico permitió a los empresarios usufructuar en su beneficio los diferentes mecanismos de transferencias de ingresos originadas en ciertas políticas estatales, incrementando así su cuota de ganancias, acelerando el proceso de acumulación de capital y, sobre todo, postergando indefinidamente las exigencias de autotransformación impuestas por la evolución propia y del medio exterior, a lo cual no hay que dejar de agregar la entrada de una importante masa adicional de excedentes económicos desde el mercado internacional, producto de la diferencia entre costos internos y externos de los productos agropecuarios, conocida habitualmente como renta diferencial de la tierra.

Producto de esto, la economía mostraba una evolución que se daba a través de una serie ininterrumpida de movimientos cíclicos cortos y abruptos, donde se sucedían sin solución de continuidad tendencias extremas de crecimiento y regresión. Al ampliarse el mercado interno crece la demanda de productos manufacturados y se

[12] Ibidem. pág. 26.

profundiza el proceso de sustitución de importaciones, por lo que la economía entra en una etapa de prosperidad cuya extensión depende en forma casi exclusiva de un solo factor: la capacidad para ampliar la dotación de bienes de capital y la provisión de materias primas estratégicas necesarias para profundizar la capacidad productiva existente, lo cual depende en forma directa de la existencia de excedentes agropecuarios de exportación y de una balanza de pagos favorable.

Es por esta razón que el estancamiento crónico del sector agropecuario se convierte en un obstáculo insuperable en la restricción del crecimiento de la producción, lo cual trastornó el modo de funcionamiento de la economía en forma general y permanente. Superado cierto límite, el incremento de la producción interna, con su consecuente aumento de importaciones, genera una demanda insatisfecha de divisas que no puede proveer el rígido sector exportador. De esta manera, se consumen las reservas del Banco Central, provocando un fuerte déficit en la Balanza de Pagos externa. Esta fase expansiva del ciclo económico genera un desequilibrio en las cuentas externas cuyo signo más visible es la pérdida de divisas, lo cual afecta directamente la capacidad de cumplir con algunas obligaciones contraídas, pudiendo llegar a caer incluso en la cesación de pagos.

Con el fin de paliar la crisis del sector externo y amortiguar los efectos sobre el equilibrio interno, el Estado interviene implantando un esquema de estabilización, el cual utiliza un instrumento principal: la devaluación monetaria. Dicha estrategia está orientada a "enfriar" la actividad económica haciendo caer, a través de la aceleración del proceso inflacionario y la modificación de los precios relativos, el salario real, el consumo de los sectores urbanos, la producción destinada al mercado interno y, en ocasiones, el nivel de beneficios del empresariado industrial. Esto provoca un nuevo tipo de combinación entre estancamiento e inflación, denominado "estanflación".

Así, el Estado aprende a conjurar temporalmente la crisis de la Balanza de Pagos y a recomponer el volumen de la reserva nacional de moneda extranjera. De esta manera, se reestablece el equilibrio de las cuentas externas, se atienden las obligaciones de pagos con el exterior y recomienza el ciclo mediante el relanzamiento de la etapa extensiva, luego del aumento de la exportación de bienes agropecuarios, incentivado por la devaluación de la moneda.

Es así cómo esta vertiginosa sucesión de ciclos económicos cortos y abruptos se convierte en un modo de funcionamiento permanente que logra un precario equilibrio: evitar grandes crisis y crecer en forma moderada, dinámica que se extendió, por lo menos, hasta mediados de los setenta.

Sin embargo, fueron estos mismos factores utilizados para prolongar el equilibrio inestable los que mantuvieron sumergida a la economía en un círculo vicioso que la sujetaba a sus propias debilidades y la obligaba a vivir en un perpetuo languidecer, sin poder resolver la cuestión crucial: la escasa envergadura del proceso de acumulación de capital. Este modelo de crecimiento de la economía nacional se relaciona directamente con la persistente tendencia del empresariado a desplazarse hacia el atesoramiento o hacia el consumo ostentoso, empleando una cuota desproporcionada de su masa de beneficios, la cual, era esperable que volviera al circuito económico. Al no lograr la economía acumular, bajo la forma de capital, una gran parte de los excedentes producidos, el bajo crecimiento causado por la ausencia de inversiones la obligó a reproducirse dificultosamente, dentro de un costoso sistema de equilibrio inestable.

La percepción por parte de los empresarios de este aumento en los niveles de inestabilidad generó una incertidumbre creciente que impuso cautela y dificultó las inversiones de largo plazo requeridas por el sector de bienes de capital y las inversiones de riesgo que demanda el conjunto de la economía. Además, provocó un refuerzo de las conductas individualistas y perversas ligadas al atesoramiento, al consumo ostentoso y a la consolidación de prácticas monopólicas apoyadas en el accionar del Estado.

Por esto, y al igual que en anteriores períodos, esos grupos económicos que no tomaban como una posibilidad su propia autotransformación, procuraron utilizar el aparato del Estado para solucionar el problema, forzando la transformación de los restantes grupos involucrados. De esta manera, la pugna económica se trasladó desde su habitual espacio del mercado, convirtiendo la disputa interempresaria en confrontación intercorporativa y en lucha política, lo cual no hizo más que agravar con nuevos problemas y nuevas demandas los conflictos sociales y políticos preexistentes.

Mediante la creación de esa especie de "última instancia" estatal se pone a prueba el poder y la autonomía que en ese contexto tiene el Estado como "tercer actor", es decir, para colocarse por encima de las determinaciones inmediatas de la pugna política y generar nuevas alternativas de crecimiento, imponiendo límites y cambios de orientación

a las conductas individuales contrapuestas en el conjunto de la economía. A su vez, se testea su capacidad para definir las reglas de confrontación entre los grupos, las formas institucionales en que las demandas sociales se transforman en políticas de estado y los criterios de legitimación que permiten ponerlas en práctica.

Como consecuencia de esto, y con el fin de adecuarse a su nueva función, el Estado crece en forma desmesurada, multiplicando sus formas de intervención económica, a la vez que pierde eficiencia, capacidad de gestión y voluntad para diseñar e imponer políticas de orden general destinadas a modificar la rígida de reproducción del círculo vicioso del crecimiento inestable. A medida que es colonizado por los grandes grupos de interés, el Estado va siendo privado de poder y autonomía, no pudiendo evitar convertirse en parte del problema.

Dada esta situación, las posibles opciones superadoras no son las que parecen orientar las conductas de los grupos privados, así como tampoco parecen convertirse en proyectos políticos propugnados por los partidos políticos e implementados por el Estado, generando cursos de acción reales. Explicitado esto, encuentra su explicación el por qué las clases dominantes priorizan la organización corporativa para encarar la lucha distributiva, procurando imponerse en la lucha intercorporativa por el control del aparato del Estado, cuyo manejo les permite obtener niveles extraordinarios de beneficios.

Dentro de este esquema, en el cual el Estado se convierte en el árbitro de la pugna distributiva, el mismo cuenta con un enorme instrumento de poder, con el cual procuran hacerse los grupos de interés: la capacidad de modificar el esquema de precios relativos, pudiendo fijar en cada momento el nivel de los tributos y el precio de los bienes económicos fundamentales, como las divisas, el salario mínimo, las retenciones a la exportación, los impuestos a la importación y los servicios públicos.

Planteado este escenario de profundos conflictos económicos y de intentos por parte de los grupos dominantes de hacerse con el control del aparato del estado, la lucha social se exacerba y se orienta en forma ineludible a modificar los criterios del esquema de precios relativos. Esta agudización de la pugna distributiva, con la consecuente politización de la lucha económica, en un contexto de tipo inestable y de bajo crecimiento asigna un rol estratégico y protagónico a las fuerzas sociales que mejor ejercen la representación ideológica de los distintos sectores de interés en que se divide la sociedad.

Son las diferentes cámaras, sindicatos y corporaciones especializadas en procesar dichas demandas, canalizar los reclamos y encabezar la lucha reivindicativa, los actores que van a asumir esa función social, política e ideológica, la cual se torna cada vez más compleja a medida que se multiplican los conflictos y los partidos políticos se retiran de dicho campo. En este sentido, ese espacio conquistado no es propio de dichas organizaciones, sino que es una concesión de los propios partidos políticos y de otras instituciones similares, los cuales, dado su diseño original destinado a ejercer la representación político-electoral tradicional y, dentro de ella, limitar los reclamos sectoriales hasta donde puedan ser contenidos dentro de una propuesta más general signada por la defensa de ciertos "intereses generales" de la nación, se muestran poco aptos para encabezar la lucha reivindicativa y política.

Tanto por su historia como por su adhesión a los principios de la ideología democrático-liberal, diseñada para mediar en forma lo más pacífica posible y conciliar intereses contrapuestos a través de negociaciones, se autoexcluyen por su falta de sensibilidad, objetivos y formas de organización adecuadas para enfrentar, con ciertas probabilidades de éxito, la feroz lucha intercorporativa, contexto al cual no hay que dejar de agregar la desmovilización y desmoralización provocadas por las recurrentes intervenciones de tipo militar.

Como consecuencia, los sectores populares, los más especialmente afectados por la distorsión del esquema de precios relativos, se ven obligados a elaborar nuevas conductas y estrategias adaptativas que les permitan encarar de la mejor forma posible la nueva pugna distributiva. La necesidad de defender el valor del trabajo y las conquistas sociales en este contexto, otorga preponderancia a ciertos valores y conductas ya adquiridas previamente por los trabajadores en otras circunstancias. La lectura de esta situación les dicta que la lucha por el salario sólo puede ser exitosa en la medida que sea progresivamente más colectiva, logrando aumentar entre sus miembros la percepción de intereses compartidos y de estrategias comunes que refuercen sentimientos y relaciones de solidaridad en el desarrollo de la lucha corporativa.

Es en este sentido entonces que, en oposición al accionar y a los mecanismos puestos en juego por los representantes de la oligarquía diversificada argentina, que surge y se consolida en el país, recuperando un término utilizado por Guillermo O' Donnell, una "alianza defensiva", y que diferencia al caso argentino de las experiencias

por las que atravesaron otros países latinoamericanos en desarrollo.[13] Dicha alianza se compone de la confluencia de intereses entre los sectores populares y los sectores menores y subordinados de la burguesía nacional, surgidos durante el peronismo y al calor de la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones.

Como se mencionó, los sectores populares son los habitualmente castigados por las recesiones que siguen a las devaluaciones y a los esquemas de estabilización y, luego de un alivio en la Balanza de Pagos, su interés apunta a conseguir un nuevo impulso de reactivación económica, reflejado en políticas que aumenten la ocupación, la liquidez y la disponibilidad de crédito, a la vez que devuelvan al Estado un papel expansivo, todo lo cual deriva en gran parte de los aumentos de salarios. En sintonía con esto, no sorprende entonces que dicha fracción trabajo-intensiva de la burguesía industrial apoye esos aumentos cuando los compara con los costos aún mayores de una situación recesiva, a lo cual se suma que la caída de los precios de los alimentos durante la reactivación contribuye a abaratar el costo de la mano de obra. Además, la participación de los sindicatos en el reclamo de aumento de salarios es una muestra contundente de la fuerza que entrega esta fracción de la burguesía al sector popular para conformar la alianza.

Los principales representantes de dicha alianza son la CGE, la CGT y la conducción nacional de los principales sindicatos, los cuales se consolidaron con el surgimiento y afianzamiento del peronismo como movimiento político de masas, aunque también durante los períodos de proscripción del mismo se manifestó en corrientes de pensamiento dentro de otros partidos, en el interior del aparato del Estado, e incluso entre grupos militares y civiles de corte "nacionalista", siendo su principal bandera la defensa del mercado interno, en el doble sentido de impulsar el nivel de actividad y acotar la participación del capital internacional.

Repasemos, no obstante, las características de dicha alianza. La misma tuvo un carácter esporádico pero recurrente, en tanto sólo se mostró con nitidez y con un alto grado de coordinación táctica en las fases descendentes del ciclo económico, y cuando el reclamo de aumentos salariales y de medidas para aliviar el estado de asfixia en que se encontraba el mediano y pequeño empresariado industrial nacional concurrían a la reactivación del mercado interno.

[13] O´Donnell, Guillermo. "Estado y alianzas en Argentina". En: **Desarrollo Económico.** N° 64. pág. 27.

El calificativo de defensiva, por su parte, surgió como consecuencia de su posición frente a la ofensiva de la oligarquía diversificada, defendiendo una postura nacionalista y socialmente justa de desarrollo; a su vez, su carácter defensivo quedaba en evidencia por el hecho de que una vez obtenido su objetivo, dicha alianza se agotaba sin conseguir consolidar un nuevo modelo de acumulación, logrando solamente sacar al ciclo de su fase descendente, reiterando las típicas características del mismo. A esto habría que agregar su conformación de tipo policlasista, en tanto encierra dentro de si a los sectores populares y un componente burgués. Dicha conjunción fue la base de muchos de sus éxitos y dio base popular a los reclamos de las capas subordinadas de la burguesía industrial nacional y les imprimió un carácter progresista, en contra de las orientaciones eficientistas y anticuadas de la fracción más concentrada de la clase dominante argentina.

Sin embargo, y a pesar de su carácter defensivo, la alianza fue exitosa. Su historia es la de repetidas victorias de anulación de los programas de estabilización, de acotamiento de la expansión interna del capital internacional, de lanzamiento de nuevas fases de reactivación económica y de nuevos 'desalientos' de la oligarquía diversificada ante la caída de los precios. Por supuesto, y de acuerdo a lo mencionado, dichos momentos de victoria eran aquellos en que los "ganadores" asaltaban el Estado, buscando consolidar allí sus posiciones institucionales, desde las cuales librar las futuras luchas. Los sindicatos no fueron la excepción, y dicha historia de la alianza defensiva es también la de la extracción al Estado de importantes ventajas por parte de estos, los cuales reforzaban la posibilidad de volver a movilizar a los sectores populares en pos de la pendiente esperanza del capitalismo de la tercera vía, ligado en forma indefectiblemente al peronismo.

La fortaleza de esta alianza defensiva y policlasista permite hablar de una situación de, y empleando el término acuñado por Juan Carlos Portantiero, "empate hegemónico" en el plano político, social y económico, la cual se caracteriza por el hecho de que "cada uno de los grupos tiene suficiente energía como para vetar los proyectos elaborados por los otros, pero ninguno logra reunir las fuerzas necesarias para dirigir el país como le agradaría".[14]

[14] Portantiero, Juan Carlos. "Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual". En Braun, Oscar (comp.): **El capitalismo argentino en crisis**. pág. 84.

En otras palabras, ninguna de las clases sociales o alianza de clases que representan los polos de la contradicción social principal ha logrado transformarse en hegemónica en un bloque de fuerzas sociales. Esta situación le permitirá a Rouquié hablar de, junto con los problemas que representa a la oligarquía diversificada el hecho de no contar con un partido "conservador", crisis de hegemonía[15], en tanto dichas fracciones de clase dominantes no tienen la capacidad de orientar a la sociedad.

En el caso particular argentino, su concentración y aislamiento social no permiten a estos grupos conformar un sistema de alianzas estables y duraderas con otros grupos en la sociedad, lo cual da pie para decir que existe en la Argentina una especie de dominación sin hegemonía, dada la incapacidad de estos grupos para conformar un partido policlasista. Como se mencionó, las crisis y discontinuidades políticas resultan favorables para su funcionamiento, lo cual no significa, sin embargo, que todas las rupturas del orden social correspondan a los intereses de estos grupos. No obstante, su estrategia política y económica se ve fuertemente fortalecida por la inestabilidad del sistema representativo, en tanto es conveniente para dicha clase el no dejar gobernar, subrayando al mismo tiempo la incapacidad de los gobernantes y la ineficacia de un sistema al cual ellos supieron llevar a su esplendor.

De la misma manera, las Fuerzas Armadas, frente a una sociedad fragmentada y enfrentada, constituyen un terreno y un objetivo de la lucha entre sectores sociales y fracciones de las capas propietarias, dado el carácter de "clase universal" de los militares y su supuesta capacidad de exitosa intervención en los conflictos internos ante la ausencia de un grupo dominante que pueda dirigir al conjunto de la sociedad. Es así como las Fuerzas Armadas se convierten en estos períodos de crisis en los adalides de una hegemonía burocrática de sustitución, organizando el consentimiento de las capas subalternas alrededor de algún tipo de proyecto nacional. En este sentido, estos períodos de hegemonía sustitutiva y autoritaria siempre mostraron como objetivo principal "armonizar por la fuerza, e imponiendo una solución, la legitimidad económica y la legitimidad política".[16]

En el caso particular que nos compete en este trabajo, el del Proceso de Reorganización Nacional de marzo de 1976, la coincidencia de diagnósticos con respecto a la situación existente y a qué hacer en todo lo referido a la mencionada crisis

[15] Rouquié, Alain. op. cit. pág. 43.
[16] Ibidem. pág. 46.

de hegemonía entre las Fuerzas Armadas y la fracción más concentrada de la clase dominante argentina, a la cual dimos en llamar oligarquía diversificada, dio lugar a un proceso de convergencia entre los proyectos hegemónicos de ambos grupos, la cual les permitió encabezar en forma indiscutible el nuevo proceso político y tomar a discreción cualquier tipo de decisión respecto a las direcciones que el mismo debía tomar.

De esta manera, al asumir la conducción del Estado, las Fuerzas Armadas declararon de inmediato el propósito de acabar con la guerrilla, para lo cual se predisponían a pasar por alto todas las restricciones constitucionales ligadas al estado de derecho, a fin de eliminar el desorden y la corrupción relacionados con el desborde de la actividad sindical, de la especulación improductiva y de las falencias a nivel moral del peronismo. No obstante, como bien nos advierte Canitrot, su objetivo de largo plazo era "producir una transformación completa en el funcionamiento de la sociedad argentina tal que fuera imposible la repetición del populismo y de las experiencias subversivas del primer quinquenio de la década del setenta".[17] Es en concordancia con esto que la cúpula de las Fuerzas Armadas declaró como meta final la restauración de la democracia en tanto y en cuanto el proceso de saneamiento se hubiere llevado a cabo y cumplido sus fines. En tal sentido, el gobierno autoritario se trazaba un período de conducción transitorio pero sin límites previsibles en el tiempo, privilegiando los objetivos por sobre los plazos.

Por su parte, la oligarquía diversificada, junto con un nuevo grupo de liberales de carácter tecno-burocrático, formados en los nuevos centros de estudios económicos de las academias norteamericanas, y que comenzaron a relacionarse profundamente con la fracción más concentrada del capital nacional, atribuyó en su diagnóstico las dificultades económicas de la Argentina a dos razones fundamentales: la distorsión del esquema de precios relativos y el sobredimensionamiento del Estado. La introducción de aranceles a las importaciones había creado una protección contra la competencia externa que promovió la creación de una industria artificial e ineficiente. A su vez, el sector agropecuario, a pesar de contar con las tradicionales "ventajas comparativas", fue discriminado a fin de dar lugar a políticas de carácter demagógico en la distribución del ingreso.

[17] Canitrot, A. "La disciplina como objetivo de la política económica". En **Desarrollo Económico**. Nº 76. pág. 6.

A todo esto hay que agregar la existencia de prácticas monopólicas por parte de un sindicalismo unitario y verticalista que ejerció una continua presión para elevar los salarios por encima de los niveles de productividad de la mano de obra, y un gobierno que dilapidó sus recursos en mantener una enorme burocracia, en sostener empresas ineficientes y deficitarias y en mantener en funcionamiento el costoso y deteriorado sistema de bienestar social.

Dicho diagnóstico no tenía nada de nuevo en 1976, pero la fuerza con que fue revivido y recuperado, junto con todo el aparato conceptual del liberalismo más acérrimo, estuvo ligada a la crisis política de la primera mitad de la década, la cual hizo eclosión en 1975, y que tanto las Fuerzas Armadas como los sectores más concentrados de la clase dominante percibieron como una crisis del sistema social vigente. Dentro de las Fuerzas Armadas, se consolidó la percepción de que la crisis no había representado sino la conclusión de un proceso caracterizado por la aplicación de un esquema institucional y político vulnerable a la influencia dominante del peronismo y sus intereses. En la misma sintonía, los representantes del liberalismo atribuyeron la crisis de esos años a la persistencia de un ordenamiento de la economía a cuya elaboración el peronismo había hecho un aporte significativo.

De acuerdo a lo anterior, el mérito de estos sectores y su planteo radicó en mostrar a las Fuerzas Armadas que el sistema político-institucional que procuraban reemplazar estaba ligado estrechamente al ordenamiento económico que lo sustentaba. En consecuencia, la reforma del modelo de acumulación era una condición indispensable de la reforma política. El plan económico se justificó en tanto de ese modo atendía, más que a los objetivos económicos, a los objetivos políticos del proyecto de transformación de las Fuerzas Armadas. La relación así establecida tuvo un carácter bilateral: el proyecto económico aparece como dependiendo del proyecto político pero a su vez como condicionante del mismo.

En los capítulos siguientes analizaremos cómo se dio ese proceso de convergencia entre diagnósticos y proyectos. No obstante, el próximo estará dedicado a dar cuenta del contexto, tanto a nivel nacional como internacional, en el que se produjo el golpe militar que inauguró el Proceso de Reorganización Nacional.

CAPITULO II: **EL GOLPE MILITAR DE 1976 EN SU CONTEXTO**

En este capítulo, nos proponemos contextualizar al Proceso de Reorganización Nacional en el marco espacio-temporal de su época. El mismo, mostraba, a nivel internacional los efectos provocados por la crisis producida como resultado de, por un lado, el agotamiento del modelo del "estado de bienestar" que surgiera luego de la Segunda Guerra Mundial y, por el otro, por los aumentos exponenciales que experimentó el precio del precio.

A su vez, la dictadura argentina se encontraba, a nivel regional, formando parte de un abanico de gobiernos autoritarios, al que habitualmente se conoce como las dictaduras del Cono Sur de América Latina, las cuales, a pesar de sus diferencias particulares, se encontraban atravesadas a nivel ideológico por la Doctrina de Seguridad Nacional y la lucha contra el comunismo.

Finalmente, a nivel local, el tercer gobierno de Perón, luego de la muerte de éste y de la asunción como presidente de su mujer, María Estela Martínez de Perón, se encontraba en un estado de descrédito y crisis irreversible, lo cual lo convertía en un gobierno moribundo que asumía la inevitabilidad del golpe de Estado que lo desplazaría, de un momento a otro, del poder del Estado.

2.1 Las dictaduras militares del Cono Sur de América Latina

Al producirse en Argentina el golpe militar que desplazó del poder al gobierno de María Estela Martínez de Perón, quien asumiera en su carácter de vicepresidente la primera magistratura de la nación luego de la muerte del general Perón en 1974, otros países se encontraban atravesando experiencias similares a la que se iniciaba en nuestro país en 1976, la cual, por cierto, no resultaba nueva en absoluto para los argentinos. Al momento de instaurarse el Proceso de Reorganización Nacional, tanto Brasil, como Chile y Uruguay eran gobernados por sus Fuerzas Armadas, luego de sendos golpes de Estado institucionales que las colocaron en al frente del gobierno de sus respectivos países.

Para delinear un adecuado perfil de las mismas, Waldo Ansaldi utiliza la metáfora de las "matriuskas", a fin de describirlas.[18] Como es sabido, las mismas son unas muñecas de origen ruso que se caracterizan por el hecho de ser, en realidad, no una sino varias, cada una contenida en una de mayor tamaño, es decir, dentro de cada muñeca se encuentra una más pequeña.

En este sentido, al igual que las "matriuskas", las dictaduras militares instauradas en los países de América del Sur durante las décadas de 1960 y 1970, y que se extendieron en algunos casos hasta finales de la de 1980, son similares en su aspecto pero diferentes en su tamaño, haciendo referencia en este caso a su dimensión temporal o duración, así como también a sus contenidos. A pesar del hecho de poder ser analizadas en forma independiente, la explicación de las mismas sólo puede abordarse adoptando una mirada de conjunto.

Es de acuerdo a esta mirada de conjunto que puede observarse que las mismas comparten un aspecto no menor, y que tiene que ver con la búsqueda de una legitimidad de ejercicio que les permitiera suplir su ilegitimidad de origen, tratando de esta manera de dotar de una importante fundamentación ideológica a sus distintos gobiernos. En el caso de estas dictaduras, dicho sustento estuvo ligado a los lineamientos de la Doctrina de Seguridad Nacional, a la cual todas recurrieron, a pesar de las diferencias verificadas entre las mismas.

Dicho sustento ideológico comenzó a elaborarse en base a teorías de corte geopolítico y antimarxistas, a la vez que presentaban una profunda relación con las principales tendencias conservadoras y de extrema derecha del pensamiento social católico de organizaciones tales como el Opus Dei, en España, y Action Française. Al iniciarse la Guerra Fría, elementos de la guerra total y de la confrontación inevitable en Estados Unidos y la URSS, junto con la OTAN y el Pacto de Varsovia, los cuales constituían sus respectivos bloques militares, se incorporaron a la ideología de la seguridad nacional en América Latina.

La forma específicamente asumida en la región enfatizaba la "seguridad interna" frente a la amenaza de "acción indirecta" del comunismo. De esta manera, mientras los teóricos norteamericanos de la seguridad nacional privilegiaban el concepto de guerra

[18] Ansaldi, Waldo. "*Matriuskas* de terror. Algunos elementos para analizar la dictadura argentina dentro de las dictaduras del Cono Sur". En Pucciarelli, Alfredo (comp.): **Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura militar**. pág. 27.

total y la guerra nuclear, y los franceses, envueltos en la guerra contra los comunistas indochinos primero, y luego en la guerra por la independencia de Argelia, concentraban su atención en la guerra limitada como respuesta a la amenaza comunista, los latinoamericanos, preocupados por el crecimiento de movimientos sociales de tipo obrero-popular, se ocupaban de la amenaza subversiva interna y de la guerra revolucionaria, la cual se enmarcaba dentro de la lucha entre el "mundo libre, occidental y cristiano" contra el "totalitarismo comunista y ateo".

En este sentido, las "técnicas" de desaparición de personas y el accionar de los "escuadrones de la muerte", usuales en América Latina durante aquellas décadas, fueron desarrolladas por los militares franceses que combatían al Frente de Liberación Nacional en Argelia. Desde mayo de 1958, los procedimientos aplicados por las tropas colonialistas francesas se convirtieron en materia de enseñanza y estudio en el Centro de Entrenamiento en Guerra Subversiva, creado por el ministro de Defensa francés Jacques Chaban-Delmas, que participaba de los cursos oficiales de su país, a los que luego se sumaron portugueses, israelíes, norteamericanos y latinoamericanos, cursos que incluían un mes de práctica en territorio argelino y acuerdos de cooperación militar que solían desembocar en la creación de una misión militar francesa en el país contraparte.

Luego de las derrotas francesas, tanto en Indochina como en Argelia, esta tarea formativa de los militares latinoamericanos fue transferida a los norteamericanos. Estos realizaron parte de su tarea en la Escuela de las Américas, establecida en 1946, en la zona estadounidense del Canal de Panamá, la cual se especializó, a partir de mediados de los sesenta, en la guerra antisubversiva. Se estima que alrededor de sesenta mil oficiales de ejércitos de países latinoamericanos recibieron entrenamiento ahí, lo cual le valió el mote de "Escuela para dictadores". Ahora bien, explicado el fundamento ideológico común que atravesó a las distintas dictaduras, analicemos a las mismas por separado, atendiendo a sus particularidades y diferencias.

En lo atinente a la organización del ejercicio del poder político, la dictadura chilena optó por un régimen militar tradicional, con una junta de gobierno como autoridad máxima, pero con un importante grado de concentración del poder en el general Pinochet, quien ejerció simultáneamente las funciones de Presidente de la República, presidente de la Junta de Gobierno hasta 1980 y comandante en jefe del Ejército. El Decreto-Ley nº 572, del 26 de junio de 1974, otorgó a Pinochet el título de

Jefe Supremo de la Nación, denominación que en diciembre fue suprimida, para retornar a la tradicional de Presidente de la República. Meses después, el cuatro de diciembre del mismo año, el Decreto-Ley nº 788 dispuso que la Junta de Gobierno tenía potestad de modificar, a su arbitrio y retroactivamente, la Constitución Nacional de 1925. La Junta, de esta manera, adquiría funciones de Poder Legislativo y Constituyente. No obstante la personalización en el ejercicio del poder, característica de la dictadura chilena, esta no pierde su carácter de institucional de las Fuerzas Armadas en su conjunto.

En cuanto a los objetivos de dicho gobierno, el mismo día del golpe, el 11 de septiembre de 1973, el Decreto-Ley nº 1 declaraba que el propósito de los militares era "restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantada". El general Pinochet prometía, días después, que "Chile volverá a su tradicional sistema democrático".[19] Sin embargo, el impactante número de víctimas iniciales en los primeros días del golpe de septiembre pareció echar por tierra esta promesa de restauración democrática: más de dos mil muertos, fuga, prisión o exilio de unos nueve mil dirigentes y simples partidarios de la Unidad Popular. A esto debe agregarse que, desde octubre de 1973, los militares golpistas consideraban al sistema democrático chileno como la causa misma de la crisis política del país.

El nuevo rumbo adoptado quedó fijado en dos documentos, la "Declaración de principios" y el "Objetivo Nacional", los cuales fueron dados a conocer por Pinochet el 11 de marzo de 1974. Los temas abordados en el primero de ellos eran: suspensión de la institucionalidad jurídica consagrada en la Constitución de 1925; intervención y control de la prensa y las universidades; estado de sitio; toque de queda; persecución de los funcionarios del régimen de la Unidad Popular; prohibición de cualquier manifestación social; prohibición de la actividad sindical; mantención del exilio. El segundo, en cambio, apuntaba al modelo económico: el neoliberal impulsado por los "Chicago Boys" chilenos, economistas que llegaron a cargos ministeriales en julio de 1974.

La nueva institucionalidad a la que aspiraban las Fuerzas Armadas era la de una "democracia protegida y autoritaria", la cual incluía componentes corporativistas tomados del franquismo español, y que fuera consagrada en la Constitución Nacional de 1980. El nuevo orden político tuvo la pretensión de ser una alternativa a la democracia occidental, descalificada por obsoleta debido a su incapacidad para ejercer su propia

[19] Ibidem. pág. 41.

defensa ante la amenaza comunista. La dictadura chilena prohibió la actividad de los partidos políticos pero no prescindió por completo de las elecciones, aun cuando las mismas fueron no competitivas.

Por su parte, las Fuerzas Armadas uruguayas se diferenciación de las otras en lo que se refiere al ejercicio del poder, en tanto no hicieron uso del poder formal de manera directa, al menos no durante los dos primeros tercios de duración de la dictadura. Recién en el tercio final sucedió que un oficial del Ejército accedió a la jefatura del Estado. El elegido fue un oficial retirado, el teniente general Gregorio Álvarez, quien fuera Comandante del Ejército en 1978-79, condecorado con la "Gran Cruz del Libertador Bernardo O' Higgins" y la "Orden Libertador General San Martín", por los dictadores Pinochet y Videla, respectivamente. Recién fue designado presidente por la Junta de Oficiales Generales en septiembre de 1981, con la misión de llevar adelante un proceso de transición a la democracia que debía culminar, como efectivamente ocurrió, en la realización de elecciones libres el 25 de noviembre de 1984 y la asunción del nuevo presidente el 1 de marzo de 1985.

Incluso el golpe de Estado, ejecutado en rigor en dos momentos, febrero y junio de 1973, no fue perpetrado por los militares en forma directa, sino por el propio presidente constitucional, José María Bordaberry. El 27 de junio de 1973, éste decretó la disolución del Congreso bicameral, el cual fue reemplazado por un novel Consejo de Estado, y permaneció en el ejercicio de la presidencia, a la cual había accedido luego de ganar las elecciones de 1971, con apenas 22.8% de los votos y en el contexto de una fuerte crisis partidaria. Tras el golpe de 1973, la base programática adoptada fue, también en este caso, la Doctrina de Seguridad Nacional.

La primera etapa de la dictadura uruguaya, conocida como la "dictadura comisarial", duró tres años. La segunda, o el "ensayo fundacional", se extendió entre 1976 y 1980, período durante el cual la presidencia fue ejercida por el doctor Alberto Demichelli, en forma muy breve y, desde el 1 de septiembre de 1976, por el doctor Aparicio Méndez, un viejo político de larga militancia en el Partido Nacional, circunstancia que no impidió que firmara, el mismo día, un decreto que prohibía durante quince años todas las actividades políticas autorizadas por la Constitución Nacional. Álvarez, finalmente, gobernó en la fase de la "dictadura transicional".

En 1976, los militares que desplazaron del poder a Bordaberry, justificaron su accionar arguementando que "el presidente de la República no acepta el futuro funcionamiento de los Partidos Políticos Tradicionales (…) El señor Presidente de la República no acepta el pronunciamiento popular a través del voto, porque considera que esa práctica de las democracias actuales es algo superado (…) El señor Presidente de la República intenta responsabilizar a los Partidos Políticos del menoscabo moral y material de la nación, y no a los hombres que fueron directamente responsables de ese menoscabo, para satisfacer sus apetitos de poder."[20] A esto hay que agregar la constante mención que hacían los golpistas militares uruguayos a la apertura democrática.

Sin embargo, esto no debe desviar la atención de una característica significativa que atravesó a todas estas dictaduras, incluyendo la argentina: la de proponerse como el momento fundacional de un nuevo régimen político. Las experiencias brasileña y peruana, iniciadas en 1964 y 1968, respectivamente, daban ya la pauta de que dichas intervenciones militares ya no se ejecutaban a fin de ejercer su papel habitual papel de custodios del sistema, sino para colocar a los golpistas en su nuevo rol de ser los "encargados de su transformación", lo cual se confirmaría con la sucesión de dictaduras instauradas durante la década del setenta.

En este sentido, los militares uruguayos se propusieron fundar una democracia limitada y tutelada, a la cual dieron forma constitucional sometiendo el proyecto, de igual manera que en el exitoso precedente de sus camaradas chilenos en 1977 y en el mismo 1980, a un plebiscito realizado el 30 de noviembre de 1980, que perdieron en una proporción de 3 a 2 (58% de los votantes en contra), derrota que terminó abriendo el camino de la transición democrática.

En el caso de la dictadura brasileña, una de las primeras medidas ejecutadas fue la promulgación del *Ato Institucional* nº 1, el 9 de abril de 1964. Mediante el mismo, se procuró dotar de bases legales a la nueva situación política e institucionalizar la "revolución": se mantenían la Constitución del mismo año 1964, salvo en materia de los poderes del Presidente de la Nación y el funcionamiento de los partidos y el Congreso Nacional, cuya legitimidad ahora emanaba del propio *Ato Institucional*, y era el resultado "del ejercicio del Poder Constituyente, inherente a todas las revoluciones".

[20] Ibidem. pág. 42.

El Congreso fue depurado en su composición y limitado drásticamente en el ejercicio de sus facultades. El Presidente asumía importantes facultades, arrebatadas al Legislativo. El instrumento legal apuntaba a una nueva centralización y concentración del poder en el Ejecutivo, medida estimada como necesaria para "la reconstrucción económica, financiera, política y moral de Brasil" y para alcanzar el objetivo de "la restauración del orden interno y del prestigio internacional de nuestro país", socavados por la acción del gobierno derrocado, el cual "estaba deliberadamente intentando bolchevizar el país".[21]

El 27 de octubre de 1965, se firmó el *Ato Institucional* nº 2, el cual era válido hasta el 15 de marzo de 1967, fecha de finalización del mandato de Eduardo Castelo Branco. Dicho instrumento produjo nuevas enmiendas constitucionales y profundizó el proyecto de gobierno e institucionalización del Estado. En su faceta resolutiva, legislaba sobre tres áreas, dos de las cuales estaban ligadas a las relaciones entre los tres poderes del Estado: 1) el control del Poder Legislativo por el Ejecutivo, que se reforzó aún más; 2) el incremento del número de miembros del Supremo Tribunal Federal, al cual se incorporaron ministros favorables al Ejecutivo, y la transferencia de los procesos judiciales por razones políticas a los Tribunales Militares; 3) el control de la representación política. En esta materia, el AI-2 eliminó la elección directa del presidente y el vicepresidente de la república, y la reemplazó por la indirecta, a través de un Colegio Electoral integrado por la mayoría absoluta de miembros del Congreso Nacional y reunido en sesión pública, en la cual los electores emitirían su voto nominal y en forma pública.

Finalmente, mediante su artículo nº 18, el AI-2 dispuso la extinción de los trece partidos políticos existentes y la observancia de rígidas exigencias para constituir nuevos partidos, las cuales eran fijadas por el Estatuto de los Partidos y Actos Complementarios. El 20 de noviembre del mismo año fue promulgado el *Ato Complementa* nº 4, el cual estableció las reglas o normas para la creación de nuevos partidos políticos, los cuales no podrían llevar la denominación de los antiguos. Los nuevos partidos se formaron de arriba hacia abajo, a partir de una situación dada (la representación parlamentaria previa), y no a la inversa, según movimientos en el interior de la sociedad civil: fueron Partidos del Estado.

[21] Ibidem. pág. 38.

Un tercer *Ato Institucional*, el AI-3 del 5 de febrero de 1966, dispuso que de ahí en más los gobernadores estaduales serían elegidos indirectamente por mayoría absoluta de votos de las respectivas asambleas legislativas, mediante votación pública y nominal. A su vez, la designación de los prefectos de todas las capitales estaduales sería privativa de cada gobernador, mientras que las de las restantes prefecturas podrían realizarse mediante el voto popular secreto.

De esta manera, la dictadura brasileña presentaba sus singularidades respecto de las otras. Una de ellas es su opción por un régimen político que incluyó, al menos como principio, el funcionamiento de partidos políticos y del Congreso, y la periódica convocatoria a elecciones. Dicho de otra manera, fue una dictadura que no negó totalmente la política y que, al dejar un pequeño espacio para la misma, no radicalizó la incompatibilidad entre dictadura y política. Es cierto que la actividad partidaria estuvo fuertemente condicionada, y que las reglas del juego electoral fueron modificadas toda vez que ellas mismas se volvían contra el propio partido oficial y, por ende, contra la dictadura. Con todo, se puede decir que se trató de una dictadura con "formato representativo".

Con respecto a la posición de la dictadura brasileña frente a la Doctrina de Seguridad Nacional, la variante adoptada por los militares de este país puso énfasis en la relación entre desarrollo económico y seguridad interna y externa, al punto de que fue conocida como *Doutrina de Segurança e Desenvolvimento.* Esto se comprueba en la disímil política económica aplicada por los militares brasileños, claramente contrastante con la adhesión a las posiciones del llamado más tarde Consenso de Washington, el cual promovía ajustes estructurales, de tipo neoliberal o neoconservador, tan característicos de las otras dictaduras del Cono Sur.

A pesar de que la dictadura brasileña se instauró antes de la aparición de dichas posiciones, la misma se extendió hasta 1985, momento en que ya se habían llevado a cabo las experiencias chilena, uruguaya y argentina, las cuales no influyeron en la orientación económica de los militares brasileños. Estos, no obstante haber optado, al igual que sus colegas, por una fuerte apertura a la inversión de capital extranjero, siempre procuraron no debilitar al Estado, lo cual pudo comprobarse con la creación del Ministerio de Planeamiento y Coordinación Económica, el cual se encargó de coordinar y aplicar el modelo económico.

El programa económico global de la dictadura brasileña se trazó como objetivo la racionalización de la economía por medio de la concentración del capital en las industrias más eficientes y del estímulo a la penetración del capital multinacional más moderno y productivo, en total correspondencia con una de las premisas de la Doctrina de Seguridad Nacional y Desarrollo, con respecto a los efectos considerados benéficos de la inversión multinacional: la mejor manera de ayudar a Brasil consistía en transformar la economía del país en un área prioritaria para la inversión extranjera.

Para los teóricos de la Doctrina, no podía existir seguridad nacional sin un alto grado de desarrollo económico, el cual debía incluir la industrialización, el efectivo aprovechamiento de los recursos naturales, la construcción de una extensa red de transportes y comunicaciones, el entrenamiento de una fuerza de trabajo altamente calificada y el desarrollo científico y tecnológico. Para el logro de dichos objetivos, los teóricos consideraban fundamental la participación del Estado en el planeamiento de la economía nacional y en la inversión en infraestructura, al mismo tiempo que no rechazaban la posibilidad de apropiarse directamente de los recursos naturales en favor del Estado.

Se trataba pues de un modelo de desarrollo capitalista basado en una alianza entre capitales estatales y privados multinacionales y brasileños. Dicha alianza entre la tecnoburocracia y el capital industrial no era sólo económica, sino también política. Los militares, bajo la influencia de la Unión Democrática Nacional, el partido de la derecha liberal creado en 1945, buscaron inicialmente, por un lado, aliarse a la tecnoburocracia civil estatal y, por el otro, encontrar apoyo en las clases medias pequeño-burguesas y en la burguesía agrario-mercantil. Poco después, comprobaran que la verdadera fuerza residía en el capital industrial y en el capital bancario, con los cuales confluyeron de forma decisiva.

Los rasgos principales de este modelo económico nacional-desarrollista fueron: 1) el Estado fue el principal sujeto del desarrollo, cumpliendo diferentes funciones; 2) el énfasis fue puesto en la industrialización del país, dando prioridad al mercado interno, al cual se blindó mediante barreras arancelarias y no arancelarias y un rígido control estatal del comercio exterior; 3) se apeló al endeudamiento externo en fuentes “multilaterales” para cubrir la aducida insuficiencia de recursos internos; 4) la política industrialista fue

sostenida por un trípode constituido por empresas estatales, multinacionales y privadas de capital brasileño.

2.2 El contexto internacional

La crisis económica y monetaria de fines de los años 60s y principios de los 70s, junto con la suba de los precios del petróleo repercutió en forma muy severa sobre el funcionamiento de la economía y el sistema financiero internacional. La multiplicación de reservas monetarias mundiales, resultado del aumento de la cantidad de dólares en circulación a principios de la década del '70, estuvo destinada a cubrir durante los años siguientes la mayor demanda internacional de liquidez producida por la inflación a nivel mundial y la crisis petrolera.

Esta situación derivó en un enorme crecimiento del mercado del "eurodinero", estimulando la movilidad especulativa del capital internacional e incrementando la inestabilidad de los tipos de cambio entre las principales monedas del mundo.[22] Dado que este tipo de transacciones no podían ser controladas por los gobiernos nacionales, terminaron afectando negativamente la política monetaria de los diferentes estados, aumentando así el riesgo de una crisis del sistema bancario internacional, al no existir normas de cobertura para los fondos interbancarios.

El rol protagónico que comenzaron a desempeñar la OPEP y los países del Tercer Mundo, junto con los desequilibrios del comercio exterior de los Estados Unidos, generaron una gran liquidez en los mercados mundiales, la cual no era absorbida productivamente como consecuencia de la reducción de las tasas de inversión y el bajo crecimiento del producto y la demanda a nivel mundial. Esto impulsó al sistema bancario internacional a ofrecer a los países en desarrollo, en especial de América Latina, cuantiosos préstamos con bajas tasas de interés. La deuda generada por las naciones latinoamericanas durante esos años se produjo debido a la competencia entre bancos de todo el mundo por participar en el suculento mercado financiero ofrecido por los países del Tercer Mundo, aprovechando también la flexibilización en el control de las operaciones financieras, tradicionalmente ejercido por el FMI.

[22] Rapoport, Mario. **Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000)**. pág. 728.

Dicho funcionamiento del sistema de cambios transformaba al mercado de divisas en un ámbito incierto e inseguro, al provocar una importante oscilación de los precios de los bienes transables, lo que hacía subir los costos de los intercambios y alimentaba las tendencias inflacionarias en los países más desarrollados. A este contexto debe sumarse la expansión, desde mediados de la década del ’70 de las políticas de corte proteccionista, sobre todo en los países industrializados, a través de la ampliación de las barreras paraarancelarias. Estas constaban de limitaciones cuantitativas para las importaciones, a la vez que de diferentes tipos de regulaciones e intervenciones estatales directas.

Al mismo tiempo, se establecieron acuerdos entre dichos países para limitar voluntariamente sus exportaciones, por ejemplo, de tipo textil, con el objetivo de eliminar la competencia desleal. Dichos acuerdos, llamados “multifibras”[23], se extendieron a otros países de Europa, Japón y del sudeste asiático, abarcando un gran número de productos industriales, y afectando los principales lineamientos de una economía abierta y de libre mercado.

Como complemento de este panorama, los últimos años de la década del ’70 observaron el recrudecimiento de la Guerra Fría, la cual se agravó aún más con la llegada a la presidencia de los Estados Unidos del republicano Ronald Reagan. Este abandonó la política de su predecesor, el demócrata Jimmy Carter, en defensa de los derechos humanos, reanudó la carrera armamentista, con un programa denominado de “iniciativa de defensa estratégica”, el cual se conoció como “Guerra de las Galaxias”, respaldó a diversos gobiernos dictatoriales y autoritarios, y desarrolló una posición mucho más dura con respecto a la Unión Soviética, sobre todo en cuestiones estratégicas y militares.

Por su parte, la crisis puso en evidencia una importante contradicción, inherente a ella: la fuerte relación entre los Estados y las empresas multinacionales, las cuales presionaban para el establecimiento de políticas nacionales defensivas. Los grandes consorcios desarrollaron nuevas estrategias adaptativas, entre las cuales se destacaba el reforzamiento de su internacionalización, que no respondía a la lógica de los sistemas productivos internos y contribuían a disolverlos.

La contraparte de esto, como se mencionó, fue el virulento proceso de endeudamiento de los países en desarrollo, facilitado por la disponibilidad de liquidez

[23] Ibidem. pág. 729.

internacional y la transnacionalización de las instituciones bancarias. Desde mediados de la década de 1970, el mercado de préstamos mundial se hizo cada vez más competitivo y la demanda de créditos por parte de aquellos países creció en forma exponencial. En este contexto, América Latina fue la región hacia donde se dirigió la mayor parte del crédito, dentro de la cual se destacaron Argentina, Brasil y México, los cuales recibieron, en su conjunto, el 80% del total de los préstamos emitidos.

De esta forma, la deuda latinoamericana se disparó rápidamente sobre finales de la década del ’70 y principios de los ochenta. En 1960, la deuda global de la región era de 7.200 millones de dólares, pasando en 1970 a 20.900 en la misma moneda, es decir, un incremento del 290%. Sin embargo, este aumento se presenta como ínfimo frente a los 243.000 millones de dólares que se debían en 1980, lo cual significaba un alza del 1.162% con respecto a 1970, y de 3.373% si se lo compara con 1960.[24]

Los efectos negativos del proceso de endeudamiento castigaron duramente a los países de la región. En la mayoría de ellos se detuvo por completo el crecimiento económico después de la crisis, dando como resultado la caracterización de la década del ’80 como la “década perdida”. Luego de la crisis, el manejo de la deuda en el corto plazo fue coordinado por el FMI, el cual asumió el papel de intermediario entre los países deudores y los bancos acreedores, organizó y coordinó complejos paquetes de recursos que debían cubrir los problemas de iliquidez y efectuó también desembolsos de sus propios fondos.

El mecanismo de negociación de deuda que se consagró como habitual fue el de entablar discusiones particulares para cada país, luego de las cuales la nación endeudada se comprometía a una serie de ajustes de tipo estructurales, a fin de cumplir con sus compromisos y obligaciones. Estos apuntaban a reducir la demanda interna para obtener el mayor superávit posible en la balanza comercial, con el objetivo de garantizar el pago de intereses por el servicio de deuda. Al incluirse la inflación como uno de los temas centrales de dichos paquetes de medidas, la aplicación de los mismos adquirió un carácter particularmente severo con respecto al manejo de las variables monetarias, fiscales y de ingresos, por lo cual, las primeras negociaciones se produjeron en términos muy desfavorables para los países endeudados, dado que, además, la única manera de

[24] Ibidem. pág. 734.

acceder a nuevos fondos era logrando un acuerdo con el FMI, lo cual añadía un elemento de aún mayor presión sobre estas naciones y sus economías.

2.3 Derrumbe y caída del tercer gobierno peronista

La muerte del general Perón, el primero de julio de 1974, luego de haber asumido la presidencia de la nación por tercera vez el año anterior, se produjo en un momento crítico para su proyecto político. A pesar de que los distintos sectores políticos y las Fuerzas Armadas respaldaron la continuidad institucional, representada en la figura de su vicepresidente y esposa, María Estela Martínez de Perón, esto no evitó que se produjera un enorme vacío de poder político que terminó llevando al país a una crisis profundísima. Con la muerte de Perón, único capaz de encauzar los enfrentamientos provenientes de los diversos antagonismos políticos y sociales, los conflictos se agudizaron y se disparó descontroladamente la violencia política, llegando a registrarse entre los meses de julio de 1974 y 1975, cerca de quinientos asesinatos de esta índole.[25]

Hacia mediados de 1975, el grupo más cercano a la presidente fue capturando en forma gradual posiciones de poder claves en el gobierno, configurando de esta manera una situación política de carácter novedoso. En mayo de ese año, obtuvo las renuncias del ministro de Economía, Alfredo Gómez Morales, y del comandante en jefe del Ejército, general Anaya. Estos puestos estratégicos fueron cubiertos de tal manera que quedaron en evidencia la fuerza y la influencia que había adquirido José López Rega dentro del entorno presidencial, al mismo tiempo que se manifestó su intención de rearticular al gobierno con la sociedad.

La política de neutralización e integración de las Fuerzas Armadas al régimen político mostraba sus límites, por lo que se hacía necesario, previo a la adopción de medidas ligadas al proyecto del grupo presidencial, la definición de su orientación. Es así como fue designado comandante en jefe del Ejército el general Numa Laplane, propulsor del llamado "profesionalismo integrado", es decir, poner a la Fuerza no ya a favor de la defensa del Estado y las instituciones, sino de la línea política del gobierno.

En consonancia con esto, y en el marco de ingobernabilidad que se disparó luego de la muerte de Perón, las autoridades lanzaron un operativo clandestino para eliminar a

[25] Ibidem. pág. 667.

la izquierda dentro y fuera del movimiento peronista, liderado por un grupo terrorista de ultraderecha, protegido y armado por López Rega, denominado "Triple A" (Alianza Anticomunista Argentina), el cual desplegó una represión política y cultural de vastos alcances. Ante esta ofensiva por parte del gobierno, y luego del interregno marcado por el duelo correspondiente al fallecimiento del líder del movimiento, la izquierda peronista decidió enfrentar directamente al gobierno.

En septiembre de 1974, Mario Firmenich, jefe de Montoneros, anunció el pasaje de la organización a la clandestinidad y la reasunción de la lucha armada y las actividades guerrilleras. Dicha opción militar era acompañada de una propuesta política orientada a dar al peronismo un perfil de tipo revolucionario, el cual surgía como contrapartida a los sucesores del general en el gobierno, los cuales trataban de redefinir la identidad política del peronismo hacia la derecha.

No obstante la crisis política, social y económica arriba mencionada, el 2 de junio de 1975 se produjo el hecho que terminó de sentenciar la suerte del tercer gobierno peronista. En dicha fecha, la presidente nombró Ministro de Economía al Ingeniero Celestino Rodrigo, miembro de la logia espiritista a la cual pertenecía López Rega, el cual, el día 4 del mismo mes, anunció "una devaluación de dimensiones insólitas para la economía argentina: 160% de incremento para el tipo de cambio utilizado en transacciones comerciales (de $10 a $26 por dólar), 100% para el tipo usado en transacciones financieras (de $15 a $30)."[26] A esto debía agregarse modificaciones profundas en los cuadros tarifarios, como la del 181% de incremento en el precio de la nafta común, 75% en los precios del transporte urbano y otros aumentos similares que tendrían un devastador efecto sobre la inflación en los meses siguientes.

Al mismo tiempo se decidió, a pesar de haber pasado desapercibido en aquel momento, un reajuste de las tasas de préstamos del Banco Nación y del Banco Nacional de Desarrollo, junto con la liberación de las tasas de interés de los certificados transferibles de depósitos a plazo fijo. Teniendo en cuenta los hechos que sobrevendrían posteriormente, puede interpretarse este como el primer intento, aunque tímido, de liberalización del mercado financiero.

Como agravante de esta situación, dichas medidas fueron lanzadas sin haberse firmado aún los acuerdos salariales en las Convenciones Colectivas de Trabajo, las

[26] Schvarzer, Jorge. **La lógica política de la política económica de Martínez de Hoz**. pág. 27.

cuales venían funcionando desde marzo, tal como estaba estipulado en el Pacto Social. Precisamente, su firma se venía demorando a la espera de la definición de los acontecimientos del gobierno. Por lo tanto, el shock se dio en plena negociación entre empresarios y trabajadores, determinando de esta manera, la cancelación de las Convenciones Colectivas, a la vez que una elevación uniforme de los salarios que no compensaba el aumento del costo de vida de los últimos meses.

Fue entonces que las medidas económicas quedaron prontamente sin efecto, producto de la última gran movilización obrera y popular del período. La inflexible posición de la presidente en apoyo de su nuevo ministro fue tensando y crispando todavía más la situación, lo cual dio lugar a cierta recuperación de espacios por parte de los sectores de izquierda, todo esto en medio de una ola de protestas generalizada que iba involucrando progresivamente a segmentos importantes del aparato sindical.

La situación devino en el llamado por parte de la cúpula de la CGT a un Paro General, el cual se hizo efectivo con prácticamente un nivel de acatamiento absoluto. Antes de la finalización del mismo, la presidente se retractó y avaló los acuerdos a los que se había llegado en las Convenciones, los cuales significaban incrementos salariales que, en algunos casos, llegaron al 200%.[27]

Dicha combinación entre las maniobras de la cúpula sindical y la movilización masiva, la cual los sindicatos procuraron a fin de recuperar su liderazgo y su legitmidad frente a las masas, además de asestar un durísimo golpe a su principal rival, el lopezrreguismo, selló en forma definitiva la suerte del gobierno de "Isabel" Perón. En un lapso de escasos días, y por distintas razones, presentaron sus respectivas renuncias López Rega, Celestino Rodrigo y Numa Laplane. Por su parte, la Cámara de Senadores eligió a su presidente, con lo cual se quebraba la línea de sucesión presidencial, la cual favorecía al Presidente de la Cámara de Diputados, quien, por otra parte, también terminó renunciando a su cargo.

De esta manera, el régimen político manifestaba signos de profundo agotamiento interno. La crisis institucional del gobierno y del Partido Justicialista, arrastró tras de sí al Partido Radical, el cual quedó en la difícil situación de no haber elaborado durante la administración peronista una alternativa en términos de proyectos globales para el país,

[27] Landi, Oscar. **La tercera presidencia de Perón: gobierno de emergencia y crisis política**. pág. 62.

como consecuencia de la actitud que adoptó con respecto a las críticas al gobierno de Isabel, las cuales economizó a fin de conservar el régimen institucional.

Dado el traslado por parte del peronismo de sus propias luchas internas al interior del gobierno, la defensa por parte del radicalismo del orden constitucional terminaba provocando la disolución de sus críticas en todo aquello referente a la forma en que se estaba administrando el aparato estatal. Esto, por supuesto, le impedía diferenciarse en forma clara de la escena política oficial; sin embargo, tampoco contaba con elementos de decisión propios a nivel estatal como para revertir la situación.

Para colmo de males, el "Rodrigazo" desbarató el intento por parte del gobierno de rearticularse con la sociedad civil, medida que debía producirse a través de la "conversión en el personal político de la racionalización del capitalismo argentino, de la alteración del pacto económico oficial mediante la inclusión del capital internacional".[28] A su vez, el inédito enfrentamiento que se produjo en ese momento entre un gobierno justicialista y la CGT dejó a esta última en una posición muy favorable. Sin embargo, tal victoria significó para la central sindical alejarse de su tradicional estrategia de control de los movimientos del Estado, sin nunca procurar hacerse cargo del mismo, para pasar a una situación en la que, en tanto organización reivindicativa, se condicionaba a si misma e incluso se vetaba como posible grupo principal dentro de la conducción del gobierno.

En efecto, desde el "Rodrigazo" las Fuerzas Armadas se habían convertido en el eje de un posible reordenamiento político. Es en este sentido que asumieron la llamada postura del "profesionalismo táctico", que combinaba su presencia en la sociedad civil con el combate contra la guerrilla subversiva, haciéndose cargo de territorios del país e interviniendo lo menos posible en la escena política.

Dicha conducta poseía múltiples efectos. Dentro de las Fuerzas Armadas, ubicaba la cuestión del reemplazo del actual régimen como un punto de confluencia de diferentes puntos de vista, sin que se perfilase lineamiento o figura política alguna que pudiera presentar una propuesta definida en lo referente al sistema político. En la sociedad, alimentaba progresivamente la legitimación de una posible intervención por parte de estos grupos, producto del acelerado proceso de deterioro del gobierno. Los partidos veían acaecer su fractura y neutralización, a la vez que se producía la salida y el alejamiento de figuras que pertenecían al régimen oficial.

[28] Ibidem. pág. 64.

En forma desesperada, el gobierno intentó una serie de medidas económicas y represivas que suponía serían implementadas por el futuro régimen militar. Las Fuerzas Armadas, sin embargo, rechazaron las ofertas del gobierno, dejando al descubierto cual era la verdadera relación de fuerzas. Y, a la vez que el gobierno abandonaba completamente el proyecto original, la clase obrera, la histórica columna vertebral del movimiento peronista, se encontraba en una posición singular: política, económica e ideológicamente se hallaba a la defensiva, pero no contra los grupos concentrados de poder, sino como resultado de las propias políticas del gobierno. Gracias a esto, llegado el final, esta ya se había retirado con anticipación de la escena política: el "Rodrigazo" significó su última expresión como movimiento de masas.

Planteado este contexto, el hecho de que las Fuerzas Armadas tomaran la decisión de hacerse con el poder del Estado se presentaba como una mera formalidad. Eso si, sin olvidar mencionar que la nueva administración militar iba a presentar características que, a pesar de presentar puntos en común con gobiernos militares previos, terminaran delineando el perfil de la misma en forma más que específica. A la descripción de su semblanza es que se abocarán los próximos capítulos.

***CAPITULO III*: LAS FUERZAS ARMADAS Y EL PROCESO DE REORGANIZACION NACIONAL**

En este capítulo se realiza el análisis de cómo se llevó a cabo el golpe militar de 1976, que características asumió y cual fue el proyecto de gobierno de las cúpulas militares.

Este proceso revestiría características muy particulares que lo diferenciarían de las experiencias autoritarias previas, en las cuales se basarían para no cometer los errores, los cuales, ellos creían podían evitarse ejecutando una transformación de la sociedad "desde arriba hacia abajo" y a través de un gobierno autoritario que eliminara cualquier posibilidad de disenso.

En este sentido, la feroz política represiva emprendida por el gobierno militar resultó algo sin precedentes en la historia política del país, siendo su costado más perverso el novedoso método de las "desapariciones" y los secuestros.

La intención del gobierno militar era legitimarse, a través de la victoria en la lucha "antisubversiva", en un participante más del juego político y eleccionario, una vez consumada la transición a un gobierno civil, la cual se pactaría en términos que resultaran favorables a las Fuerzas Armadas, dando lugar a la conformación de una nueva sociedad política.

3.1 Los militares golpistas de 1976: un enfoque desde las teorías de la soberanía y las dictaduras

En su libro "Autoritarismo y Reforma del Estado", Hugo Quiroga se pregunta acerca de la posibilidad de "estudiar el carácter y la naturaleza del gobierno militar de 1976 desde la teoría del Estado", a la vez que plantea la dificultad de insertar a dicho gobierno, dadas sus características, en las teorías más tradicionales que existen con respecto a las dictaduras.[29]

En este sentido, el "Proceso", no se presentaba como una dictadura personal al estilo clásico, es decir, una forma de dominación política asentada en un solo hombre que

[29] Quiroga, Hugo. **Autoritarismo y Reforma del Estado**. pág. 29.

detenta un poder absoluto, sino que se trataba de una "dictadura institucional", o sea, del cuerpo de las Fuerzas Armadas en su conjunto, derivada de una actividad extramilitar conferida por el carácter que le imprimía su fuerza política.

Se diferencia también de las dictaduras clásicas en lo que respecta a su duración y atribuciones, al observarse que las normas jurídicas sancionadas por el propio gobierno militar se colocaban por encima de la propia Constitución Nacional, priorizando la obtención de los objetivos por sobre el trazado de límites y períodos de ejercicio. De la misma manera, tampoco podía ser asimilada a las dictaduras cesaristas ni a las totalitarias, dada la carencia de un partido o movimiento totalitario, como pudo observarse en Italia o en Alemania, así como también por la ausencia en este gobierno de un líder carismático y de una "utopía" totalitaria de dominación mundial.

Queda entonces abierta la pregunta de cómo asimilar la actuación de estos militares argentinos a alguna teoría política de las dictaduras conocida. Es en este sentido que Quiroga recupera los trabajos de Carl Schmitt al respecto, quien señalara que el soberano es aquel que decide sobre el estado de excepción, es decir, es aquel que tiene la voluntad y la capacidad de decidir sobre la vigencia del estado de excepción.

Al hacer referencia al término "soberanía" de esta forma, el autor hace alusión a un concepto extremo, y no a aquellas situaciones contempladas en las constituciones modernas, a las que se conoce generalmente con los apelativos de "Estado de sitio" o "Estado de necesidad". Dicho concepto de soberanía, hace referencia a un cambio profundo y general en el Estado, y no a un fenómeno aislado.

De esta manera, quedan configuradas en la teoría schmittiana dos características principales del soberano: la excepcionalidad y la decisión. Con respecto a la excepcionalidad, la misma hace alusión al hecho de que se trata de una situación no prevista en el orden jurídico vigente, y sobre la que no pueden ejercerse límites en forma rigurosa. Al tratarse de una cuestión no ligada al orden jurídico, la pregunta que subyace es: ¿quién asume la competencia en una situación para lo cual no se previeron competencias algunas?

Dado esto, ante un caso de tipo extremo, se requiere la aplicación de una facultad ilimitada, un estado de excepción. Frente a la suspensión del orden jurídico, la preservación y protección del Estado se convierte en prioritaria por sobre la aplicación de las normas de tipo legal. No obstante, no debe confundirse esta situación con la anarquía

o el caos, dado que, aunque no se trate de uno de tipo jurídico, aún subsiste un orden, el cual descansa, a partir de ese momento, en una "decisión". Ante esta situación de excepcionalidad, el elemento decisional se convierte en autónomo, liberado de toda norma, con la pretensión, en última instancia, de crear un nuevo orden.

Es así como esta concepción teórica pone de relieve la primacía de lo político sobre lo jurídico, dejando al descubierto quién es el verdadero decisor. Es en base a esto que puede afirmarse que el soberano no sólo crea la situación excepcional y la garantiza, sino que además es quien decide sobre la vuelta a la normalidad. De esta manera, y a diferencia de la teoría weberiana del Estado, lo que caracterizaría a éste no es el monopolio legítimo de la coacción, sino de la decisión.

Trasladado al caso argentino, las Fuerzas Armadas se erigieron en tal soberano, en el elemento decisor en última instancia. Es a partir de esto que se puede afirmar que, con el golpe militar, las Fuerzas Armadas encararon una suerte de usurpación de hegemonía, al apropiarse, no sólo de la soberanía propiamente dicha, sino también de la política, la cual fue sustraída a los partidos, con la consecuente despolitización de la sociedad civil. Es en este aspecto de la "dictadura soberana" que observamos, en su forma más explícita, el carácter "constituyente" de la misma, en tanto no apunta a la protección de la Constitución existente contra un ataque, sino a crear una situación que haga posible una nueva Constitución, a la cual considerará verdadera.

No obstante lo señalado anteriormente, y que nos permite delinear el perfil de la dictadura militar implantada luego del golpe del 24 de marzo de 1976, Quiroga nos realiza otro aporte, también proveniente de la teoría schmittiana del poder del Estado. El mismo está relacionado con el hecho de que, a pesar del apelativo de dictadura a toda aquella situación en la cual se produce una abolición de la separación de poderes, dicha característica se presenta como insuficiente para definir conceptualmente dichas situaciones. Es necesario, entonces, definir el carácter de la acción dictatorial, lo cual se relaciona con, como se mencionó más arriba, una situación creada por la propia actividad del soberano. En este sentido, la noción de existencia de un adversario concreto provee a la acción del dictador de un contenido preciso y específico. La eliminación de ese "enemigo" debe ser el objetivo inmediato de la actividad del soberano.

En síntesis, se trata de una situación absolutamente fáctica, en la cual la dependencia con respecto al adversario y sus acciones sirve de fundamento a la propia

naturaleza de la acción dictatorial, la cual reconoce la existencia de una situación a eliminar, dado que, a la acción del soberano, corresponde una contra-acción por parte del enemigo, el cual no reconoce las normas jurídicas y constituyentes que el dictador impone para ejecutar y justificar las medidas de su acción.

Atentos a esto, veamos cual fue, en el caso del "soberano" Proceso de Reorganización Nacional de 1976, quien fue ese "enemigo", y cual fue la naturaleza de la "acción dictatorial" que se empleó contra el mismo.

3.2 El golpe militar del 24 de marzo de 1976: consenso y legitimación del Proceso de Reorganización Nacional.

Durante la madrugada del 24 de marzo de 1976, los edificios gubernamentales y el Congreso Nacional fueron ocupados por las Fuerzas Armadas. La misma suerte corrieron estaciones de radio y televisión de Buenos Aires y de las principales ciudades del interior del país. En las horas siguientes, a través de estos mismos medios de difusión masiva, se comunicó a la nación que una junta de comandantes de las tres armas había decidido dar por finalizado el agonizante gobierno de María Estela Martínez de Perón y asumir el poder político en nombre del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, el cual tendría por objetivos reestablecer el orden, reorganizar las instituciones y crear las condiciones para una "auténtica democracia".[30]

Desde el principio, los jefes militares harían un notable esfuerzo por mostrarse previsores, ordenados, incluso civilizados, pero inflexibles. De esta manera, se comprometían a velar por el respeto de la ley y la moralidad, cuidándose incluso de no ofender en gran medida los sentimientos de los peronistas, pero, al mismo tiempo, descartando cualquier posibilidad de claudicación con respecto a lo que consideraban sus "metas irrenunciables".

"Isabel" y sus ministros, junto a otras figuras del espectro del gobierno peronista fueron apresados en forma inmediata. Al transcurrir las horas, dichas detenciones se multiplicaron. Cientos de delegados sindicales, militantes peronistas y de izquierda, periodistas e intelectuales considerados "sospechosos" fueron sorprendidos por las patrullas militares y los "grupos de tareas" en sus lugares de trabajo o sus hogares.

[30] Palermo, Vicente y Novaro, Marcos. **La dictadura militar (1976/83)**. pág. 20.

Muchos de ellos pasaron a engrosar las perversas y macabras listas de desaparecidos, las cuales se poblaron masivamente con el paso de los días. Su presencia en las mismas se debía a la caracterización que los golpistas habían hecho de ellos como "enemigos activos". Distinta fue la suerte de aquellos que tuvieron la fortuna de ser "blanqueados" en cárceles y cuarteles, quedando detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

Pese a que estos políticos y sindicalistas no representaban en realidad ningún tipo de amenaza para el éxito del golpe, lo que la cúpula golpista buscaba con estos encarcelamientos y desapariciones masivas era mostrar en los hechos los alcances que, de acuerdo con las proclamas, tendría el nuevo régimen. De lo que se trataba, era de "dejar sentado desde un principio y de modo taxativo que las Fuerzas Armadas no se proponían tan sólo terminar con un gobierno (…) sino, en sus palabras, poner en vereda a una sociedad sumida en el caos".[31] La cura de sus males, los cuales la hacían vulnerable ante la amenaza de la subversión, implicaría una vigilancia escrupulosa y un disciplinamiento de todos los sectores sociales y políticos, en especial, aquellos que a sus ojos eran responsables por el caos y el desgobierno.

De esta forma, el golpe daba paso un proyecto refundacional que, en sus métodos y objetivos, era mucho más radical que todos los intentos previos por poner orden, incluso el de la Revolución Argentina, cuyo fracaso se achacaba a la moderación o tibieza de su doctrina y su método de implementación, por lo que el nuevo gobierno militar aspiraba a la instauración de un nuevo orden que pusiera "fin a la larga saga de frustraciones" de las décadas y administraciones militares anteriores.

La ruptura del orden acaecida como resultado del golpe, el cual venía siendo anunciado en forma reiterada por la prensa y por los propios políticos del gobierno y la oposición, y que fue serenamente planificado y ejecutado por la cúpula militar, contaba en esta oportunidad con un amplio consenso social y con un monolítico respaldo al interior de las Fuerzas Armadas. Este sólo hecho, amén de otros muchos, bastaría para diferenciarla de las anteriores dictaduras militares.

El consenso que recibió inicialmente el golpe militar y su resultante régimen reflejaba la convicción en la sociedad de que la coyuntura surgida desde 1974 era el resultado de un gobierno civil en ruinas, creencia que fue alimentada por los sectores empresarios y la jerarquía de la Iglesia Católica (la cual tuvo la "delicadeza" de reunirse

[31] Ibidem. pág. 22.

para expresarle su simpatía a la cúpula militar la noche del 23 de marzo), y que se había extendido a casi toda la población y a vastos sectores políticos.

En los días previos a la toma del poder, los militares encontraron en este difuso apoyo social la confirmación que necesitaban para concluir en la conveniencia de establecer claras distancias frente a la sociedad, a la cual percibían como carente de objetivos o aspiraciones de largo plazo, y enferma en un nivel general. De esta falta de objetivos ni siquiera estaban exceptuados aquellos que más entusiastas se mostraron con respecto al golpe. No obstante, los militares interpretaban esta carencia como una ventaja: de hecho, eran muy pocos los grupos políticos y los sectores sociales dispuestos a un acompañamiento activo del gobierno militar, aunque menor todavía era la necesidad que este tenía de tal acompañamiento, dada la fe mesiánica en sus planes refundacionales y regenerativos.

El vínculo que se generó entre este "extrañamiento" planteado por las cúpulas militares frente a la sociedad y el "consenso reactivo" hacia el golpe, predominante dentro de la misma, se explicaba en base al proceso que se venía gestando en ambas direcciones desde hacía años atrás. La ruptura con respecto a los consensos generados diez años antes durante la Revolución Argentina, o aquellos puestos en práctica con el triunfo electoral del peronismo en 1973, da la pauta de los sentimientos que se generaron con la nueva administración militar.

Al mismo tiempo, esta doble ruptura daba cuenta del enorme proceso de despolitización que experimentó la sociedad argentina a mediados de la década de los setenta, el cual la dictadura se propuso profundizar por todos los medios posibles, con el doble objetivo de utilizarlo en su beneficio, como garantía del dócil acatamiento de su accionar y, en el largo plazo, convertirlo en un rasgo estructural del nuevo orden social, el cual debería estar "inmunizado" contra la movilización de las masas a nivel político y liberado de las organizaciones sociales y los partidos que habían probado ser peligrosamente proclives a la subversión.

El fracaso de la Revolución Argentina convenció a los militares de 1976 acerca de la necesidad de que las Fuerzas Armadas, como institución, mediaran y regularan todo contacto del gobierno con la sociedad, al mismo tiempo que se reducían al mínimo las negociaciones con todos los sectores y grupos, incluidos los más adictos. De esta manera, el problema de la popularidad del golpe y su régimen político se planteó en términos

radicalmente distintos a los de diez años antes, dada no sólo la ausencia de disposición a implementar políticas de reparación social, sino que toda manifestación de apoyo fue considerada como algo secundario. Si el conjunto de la sociedad estaba enfermo, no podían provenir de ésta los necesarios mecanismos de recuperación, por lo cual era indispensable que las Fuerzas Armadas ejercieran su dominación "desde arriba", desoyendo todo tipo de reclamos u opiniones al respecto.

La solución radicaba entonces en un gobierno prolongado de las Fuerzas Armadas, que fuera capaz de completar sus metas programáticas, crear sus propias bases de legitimación social y, una vez logrado esto, dar lugar a una convergencia cívico-militar de la que debía resultar un nuevo sistema político. A pesar de las aspiraciones fundacionales que caracterizaron a ambos procesos, dos datos esenciales diferenciaron al de 1976 del de 1966: la radicalidad del diagnóstico y de la "terapia" regenerativa, por un lado, y la aspiración a conformar un poder autónomo, capaz de hacer oídos sordos a los múltiples reclamos que habrían de surgir de los intereses particulares afectados por su aplicación, por el otro.[32]

Entonces, y de acuerdo a esta premisa adoptada por los militares golpistas, las experiencias previas de profundo apasionamiento político fueron reelaboradas como el resultado de un delirio frenético alimentado por promesas que se habían vuelto inalcanzables o irrealizables. De esta manera, se fue gestando una sensación agobiante que combinaba el terror ante la represión, la repartición de culpas por las frustraciones y los "engaños" padecidos, y también la autoinculpación en forma indiscriminada de una sociedad en bancarrota.

Fue así como se instaló la creencia de que se había cedido frente a tentaciones peligrosas, que desembocaron en un perjuicio colectivo insoportable, lo cual provocó la necesidad de dejar la situación en manos de aquellos que supieran como resolverla, aún resignándose a los sacrificios y castigos por ellos merecidos, y que se consideraban indispensables.

A esto hay que sumar el no menos generalizado esfuerzo por distanciarse de aquellos a los cuales se consideraba como los "verdaderos" responsables de la debacle: los políticos en general y, de un modo particular, los activistas de izquierda, a los cuales parecía necesario castigar ejemplarmente por ser "agitadores animados por ideas

[32] Ibidem. pág. 27.

peligrosas", dentro de los cuales se incluía a militantes juveniles, delegados sindicales e intelectuales radicalizados, de los cuales se había alimentado la guerrilla. Fue así como el fantasma de la "disolución nacional" atravesó la sociedad argentina durante aquellos meses, y terminó otorgando a los militares la condición que históricamente se habían autoatribuido: la de ser la garantía última de la unidad y el orden de la nación.

Mientras, esa amenaza, fuera o no real, les alcanzó a los militares para reforzar las perspectivas más radicales con respecto a los problemas del país. En coincidencia con las doctrinas que animaban a los grupos guerrilleros, el auge de la organización y la movilización política de la sociedad fue percibido por los golpistas como la prueba irrefutable de la consolidación de un estado prerrevolucionario, el cual desembocaría necesariamente en el choque directo y en la guerra sin cuartel entre las fuerzas del orden y las de la revolución, lucha que tendría al seno de la sociedad como escenario de su desarrollo. Por lo tanto, esta debía ser desmovilizada, desactivada políticamente y reordenada de pies a cabeza, diagnóstico que no hizo más que confirmarse luego de los sucesos desencadenados tras la muerte de Perón.

Este diagnóstico con respecto a la situación político-social argentina no era más que el corolario de la influencia ideológica de la Doctrina de Seguridad Nacional en la región. La amenaza de la guerra revolucionaria, una guerra no abiertamente declarada y no convencional, que hacía de la educación, la cultura, la familia y las fábricas, otros campos de batalla en los que se enfrentaban los valores del ser nacional y un monstruo de mil cabezas, la subversión, devino en un programa institucional en el que convergían todas las facciones militares y sus tradicionalmente divergentes miradas con respecto a la realidad argentina. El hecho de enmarcar tales conflictos dentro de una "guerra global" dio pie a la convergencia, en la lucha contra la "subversión apátrida", entre el integrismo católico, el desarrollismo nacionalista y el tradicionalismo liberal.

Vale la pena recordar que el catolicismo fundamentalista y el anticomunismo habían sido, a lo largo de todo el siglo, los componentes más estables y permanentes de la cultura militar y de sus alianzas político-sociales. No sería esta la excepción: se conjugaban en forma perfecta con los males que, a ojos de los militares, aquejaban a la sociedad argentina. Dichos valores tradicionales, además, resultaban completamente funcionales a la cruzada restauradora que se encaró, y que apenas se disimuló, bajo los discursos de modernización reiterados por los golpistas. Al desdibujarse la relación entre

seguridad y desarrollo, propia de los años ‘60s, la cuestión era ahora recuperar el orden en todos los terrenos, el cual se había trastocado completamente por “décadas de decadencia, subversión y demagogia”.

¿En qué consistía el orden? Básicamente, en una articulación entre Estado y sociedad que diera estabilidad a las relaciones de autoridad, tanto en la economía como en la política, la educación y la religión. Planteado esto, fue fácil delinear la causa fundamental del desorden y la inestabilidad: el populismo.[33]En este sentido, una vez afianzado el programa antisubversivo, se impuso un nuevo consenso interno que repudiaba abiertamente al populismo político y las formas de organización económica que se entendían como su base de sustentación: el proteccionismo industrialista y el estatismo. Ambos conceptos, en previos períodos considerados positivamente por los militares, aparecían ahora asociados a la movilización y politización de las masas, a la proliferación de los conflictos sociales y, como consecuencia de todo ello, a la “penetración subversiva”.

Como resultado de esta reorientación ideológica, la cual, sin embargo, no se desarrolló exenta de conflictos entre los sectores castrenses y no llegó nunca a ser unánime, se difundió, si no una doctrina, por lo menos una nueva visión política y económica genéricamente denominada librecambista y antiestatista, y que estaba asociada fuertemente con el combate de la subversión y el disciplinamiento social, y que fue profundamente impulsada por los tradicionales (y también por los nuevos) miembros del establishment liberal.

De hecho, en la formación de dicho consenso, no fue menor la contribución de un sector del empresariado que, como se mencionó, poseía una orientación librecambista, y que selló una alianza con el general Videla a fines de 1975, sector que también había producido una reorientación de sus diagnósticos y propuestas de política económica por esos años. A esto hay que agregar el clima de ideas a nivel mundial con respecto a estas cuestiones, y que comenzaba a tomar fuerza en los centros de poder internacionales, en particular, foros militares, círculos de derecha y en los organismos multilaterales de crédito.

A ojos de estos sectores, el problema era que, desde el surgimiento del peronismo, se había producido una modificación intolerable de las expectativas y las conductas de

[33] Ibidem. pág. 35.

los sectores populares, la cual había sido alentada por la tutela del Estado proteccionista y omnipresente que se había instalado y que, en una economía cerrada, cedía a todas sus demandas, convirtiendo a las organizaciones sindicales en poderosas herramientas de presión y dando lugar a rebeldías que terminaron por quebrar las pautas culturales y sociales de subordinación o deferencia a las que habían estado sometidos dichos sectores hasta los años cuarenta.

Entonces, a fin de dar por tierra con aquella Argentina populista, debían suprimirse las bases sobre las cuales se había edificado, y que le permitieron sobreponerse a los intentos más o menos abarcativos, pero frustrados, de disciplinarla. En este diagnóstico venían trabajando los mencionados sectores empresarios desde las movilizaciones populares del período 1966-73, en el que rondaban las preguntas acerca de qué hacer con respecto a esos sectores y sus identidades políticas. Aceptando el hecho de que "ordenando" no se resolvía el problema, era preciso eliminar de raíz y para siempre la causa principal de la amenaza subversiva: la organización y la movilización política en clave populista.

En fin, de lo que se trataba era de "corregir" treinta años de historia, verdaderamente traumáticos para los sectores oligárquicos del país, terminar con la "negrada", los demagogos, los sindicatos poderosos, las industrias protegidas e ineficientes, sometiendo al país, aunque le crujieran los huesos, a las orientaciones neoconservadoras, a la lógica ordenadora del mercado, a fin de terminar con el mal populista. Es de acuerdo a esto que la política económica de la dictadura apuntará a destruir las premisas básicas que se mantenían desde el primer gobierno peronista: crecimiento industrial como eje dinámico de la economía y regulación estatal para proteger ese crecimiento frente a la amenaza que representaban los intereses de los exportadores agropecuarios de la pampa húmeda.

De esta manera, el diagnóstico militar que enfatizaba la necesidad de erradicar la subversión, y el diagnóstico oligárquico conservador que apuntaba a eliminar el protagonismo del sector industrial en el campo económico, tenderían a coincidir en medios y fines. La cuna de la subversión, la Argentina populista, tenía como principales actores a dos sectores que debían ser profundamente redefinidos: una clase obrera indisciplinada y un empresariado industrial ineficiente. A pesar de la apariencia de alianzas en anteriores ocasiones, esta fue en verdad la primera vez que militares y

conservadores liberales coincidían enteramente en el diagnóstico y la "terapia": debían destruirse las bases del desorden, había que liquidar la "Argentina maldita", terminando para siempre con la insolencia de las identidades políticas y sociales de los sectores populares, sus sindicatos, sus servicios sociales, y hasta buena parte de las fábricas en que ese "mal" tenía su fundamental punto de apoyo.

A dar cuenta de cómo se expresó en la realidad esa coincidencia de diagnósticos, se abocarán los próximos capítulos, en los cuales se analizará, por un lado la política económica de la dictadura y, por el otro, el proceso de convergencia entre los proyectos de la cúpula militar y esos sectores oligárquico-conservadores y de corte liberal-ortodoxo, a los cuales se iba a sumar un nuevo grupo de liberales, el cual iba a ser responsable de las ideas que iban a guiar la nueva política, así como también de su puesta en ejecución. No obstante, el próximo apartado del presente capítulo está dedicado a la forma en que, y recuperando la terminología empleada al principio del mismo, el nuevo "soberano" puso en práctica su particular "accionar" en forma concreta.

3.3 Identificación y caracterización del "enemigo": la "condición subversiva"

Como resultado de sus fracasos, tanto políticos como militares, hacia principios de 1976 la actividad guerrillera se había convertido en una amenaza limitada a efectos de la seguridad nacional, y poseía una capacidad más bien acotada para afectar al orden público, como reconocerían los propios militares en sus análisis de la situación, contradiciendo, en forma involuntaria, el diagnóstico de la "guerra revolucionaria", en la cual los golpistas buscaban sustento para sus planes antisubversivos. En otras palabras, habrían desaparecido las condiciones que, un año antes, habían justificado la intervención de los militares en el conflicto interno.

La mera comparación entre las cifras de bajas por las fuerzas militares o paramilitares y por la guerrilla es elocuente respecto del declive de esta última, y del avance desproporcionado y exponencial que tuvo la represión, tanto legal como ilegal. A lo largo de toda la década de 1970, la guerrilla provocó la muerte de 687 personas, el 70% de las cuales eran miembros de las fuerzas de seguridad. Pero la mayor parte de sus víctimas (576) es previa al golpe. Del otro bando, en el período 1973-76, hasta el golpe,

los muertos vinculados en forma directa a organizaciones guerrilleras sumaron 918, a los cuales hay que agregar una cantidad similar de militantes políticos y sindicales de izquierda asesinados por la Triple A, y varios miles de detenidos, entre los que figuraban militantes políticos o gremiales y guerrilleros, llegando a un total de 5.182 los detenidos "a disposición del Poder Ejecutivo Nacional", es decir, sin proceso penal alguno.[34]

Visto desde una óptica de progresión anual, el cuadro de las bajas guerrilleras se presenta aún más dramático: las mismas, acumularon 32 en 1973, 192 al año siguiente y 694 en 1975. Si se estima entre 2000 y 3000 los cuadros armados de los grupos guerrilleros, puede concluirse fácilmente que, para principios de 1976, la posibilidad de reemplazar a los caídos con nuevos cuadros con formación política y militar adecuada estaba seriamente afectada.[35] Los grupos armados, especialmente Montoneros, seguían contando con una periferia muy amplia de la cual nutrirse, si no de militantes capacitados para la lucha armada, al menos de jóvenes voluntariosos a tales efectos. Esto le permitió insistir en su militarización a medida que se aislaba y debilitaba políticamente y se comprometía cada vez su capacidad operativa, mientras la represión avanzaba sin pausa, aplastando las resistencias y todas las expresiones de la izquierda revolucionaria.

De esta manera, y como consecuencia de la notoriedad que alcanzaron las acciones llevadas a cabo por Montoneros y el ERP, estos grupos armados se desligaron de la posibilidad de encarar con cierto éxito la "guerra civil larvada" que se había desatado. Y, junto con ello, sus planes de encabezar una auténtica guerra revolucionaria que pudiera catalizar los conflictos políticos y sociales contenidos en dicha fórmula no sólo perdieron viabilidad a nivel político, sino que terminaron por ser el complemento necesario de una estrategia radicalmente distinta. Fue entonces que, una vez garantizada tanto la impotencia política y militar de la guerrilla, así como su omnipresencia justificatoria de la represión, que se desataron en su forma más violenta las matanzas.

La desproporción entre las bajas en ambos bandos se disparó durante 1976: en ese año, se produjeron 167 muertes en ataques guerrilleros, entre policías y militares (111 desde el golpe), y 1.187 muertos por las fuerzas de seguridad, de los cuales la mayor parte eran detenidos o secuestrados que luego aparecían muertos en enfrentamientos apócrifos.[36] A estos, debemos sumar las miles de personas que fueron secuestradas y

[34] Ibidem. págs. 73-74.
[35] Ibidem. pág. 74.
[36] Ibidem. pág. 75.

permanecen al día de hoy como “desaparecidas”: según informes de la CONADEP, sólo en 1976, las desapariciones sumaron más de 3.500 casos. Finalmente, completan el panorama los cientos de personas que formaban parte de las listas de detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, junto con la marcha al exilio de miles de activistas políticos de índole diversa, los cuales varían, según distintos cálculos, entres 20.000 y 40.000 personas.

Este exterminio desenfrenado se agudizaría durante el siguiente año: al cumplirse el primer año del golpe, el ERP virtualmente había desaparecido y las actividades armadas de Montoneros prácticamente habían cesado. A lo largo de 1977, sus células cometieron algunos atentados con bombas, algunos de ellos en “respaldo a las luchas de los trabajadores”, y en las cuales causaron alrededor de cuarenta bajas a las Fuerzas Armadas y del orden. Mientras, los enfrentamientos fraguados continuaban arrojando muertes, contándose por miles los secuestros, llegando, según la CONADEP, a una cifra de 3.000 desapariciones. En marzo de 1977, Montoneros reconoce un total de 2.000 bajas desde el golpe, mientras que para agosto de 1978 las mismas llegaban a 4.500, entre las cuales se incluía un número importante de personas vinculadas en forma periférica con la organización, o que directamente no tenía nada que ver con ella.

Dicho derrumbe de la guerrilla no sólo puso en evidencia la eficacia de la estrategia implementada por los militares en lo referente a la lucha contra la subversión, sino que desnudó la debilidad política de estas organizaciones, orientadas peligrosamente hacia el militarismo y el mesianismo. Al comenzar 1976, sus vínculos con las masas estaban profundamente debilitados y expuestos a la represión, al tiempo que sus cuadros se encontraban desorientados, producto del alejamiento de sus conducciones, a las cuales se sometían jerárquicamente, confiados en una estrategia que les impedía comprender lo que estaba sucediendo como para delinear un plan de acción alternativo frente a la ofensiva del gobierno militar.

Las experiencias provenientes de los años previos los alentaba a dar por segura la imbatibilidad de las organizaciones armadas, así como de la voluntad insurreccional de las masas, lo cual los imposibilitaba para siquiera considerar posible una reorientación de la estrategia. El ideario montonero contenía gran cantidad de componentes redencionistas, utopistas y extremistas, tanto de origen marxista como cristiano, con los cuales se pretendía justificar el autosacrificio por la causa. Algo similar puede decirse con

respecto al guevarismo del ERP, lo cual, no se adecuaba a orientar la acción de modo eficaz en el contexto de la masacre.

Vale la pena destacar, además, que desde un principio, ERP y Montoneros habían considerado el ejercicio de la represión y del gobierno por parte de los militares como una señal de la intensificación de la lucha revolucionaria, el comienzo de una "guerra civil abierta", y un cambio de escenario favorable con respecto a lo que venía sucediendo desde 1974-75. La explicación se encontraba en el hecho de que esta situación expondría al aparato represivo a actuar sin mediaciones políticas, lo que devolvería legitimidad a la lucha armada y forzaría a las masas a alinearse con la revolución frente a la ofensiva reaccionaria. Además, a diferencia de los grupos paramilitares, ahora el enemigo era notoriamente visible, usaba uniforme y podría ser obligado a respetar, sino la Constitución, por lo menos la ley de la guerra.

Por supuesto, dicho diagnóstico encerraba un grave error de cálculo respecto de la situación de derrota y desarticulación que el fin del gobierno peronista impuso al movimiento político de masas, y también con respecto a los objetivos y las "recetas" aplicadas por los militares. Atentos a las experiencias de represión llevadas a cabo por los militares de la Revolución Argentina, la guerrilla especulaba con una serie de detenciones masivas, la práctica de la tortura en el período previo al "blanqueo" de los prisioneros, y condiciones rigurosas de detención, las cuales podían incluir el aislamiento y la "ley de fugas", es decir, el asesinato de detenidos en simulados intentos de evasión.

Planteado a esto, se comprende cómo no pudieron prever la sistemática cacería humana que se iba a desencadenar con el advenimiento del golpe, encabezada por un ejército clandestino de represores, con respecto a la cual, no sólo no hizo nada para evitarla, sino que colaboró para crearle un marco favorable. Como agravante, en los momentos previos al golpe ya habían recibido evidencias de que un número creciente de militantes era sorprendido en las calles, en sus casas o en sus trabajos y devorado por la maquinaria represiva, sin dejar rastro alguno, situación que no escapaba al conocimiento de la cúpula de Montoneros, la cual impuso a sus militantes llevar pastillas de cianuro. La contundencia de estos hechos chocó de frente con la fe ciega en sus diagnósticos, objetivos y estrategias adoptados, así como también la convicción del vínculo inalienable que los unía con los movimientos políticos de masas.

3.4 La "receta" militar contra el enemigo del "soberano"

La Alianza Anticomunista Argentina, más comúnmente conocida como Triple A, había sido fundada a poco de iniciarse el tercer mandato del general Perón, a instancias de su ministro de Bienestar Social, José López Rega, así como de otros grupos de igual inspiración fascista, como el Comando Libertadores de América, el cual se formó y fue conducido desde el III Cuerpo de Ejército, con asiento en Córdoba, y que fuera el que creara en 1975 el primer centro clandestino de detención en dicha unidad.

En un lapso de tiempo de dos años y medio, estos grupos paramilitares cometieron no menos de 900 asesinatos, siempre ante la pasividad de las autoridades y de las fuerzas de seguridad. La Triple A periódicamente publicaba listas de las personas que, en caso de abandonar el país, serían asesinadas. La eficacia e impunidad de esta organización radicaba en que reunía dentro de sí a oficiales de policía y militares retirados y en actividad, junto a matones provenientes del sindicalismo y de la extrema derecha peronista y nacionalista, así como también en el apoyo financiero y logístico de importantes entes estatales.

Su desaparición se produciría en forma abrupta, recién con el golpe, cuando sus miembros fueron incorporados al aparato represivo clandestino del Estado que se empezaba a implementar. Su presencia, dada la toma del poder por parte de los militares, resultaba redundante, y su contribución a la "causa", ya había sido realizada.

En este sentido, tanto en términos estratégicos como ideológicos, existió una marcada continuidad entre la Triple A y el plan de la Junta de Gobierno: el mismo, consistió en involucrar al conjunto del sistema de defensa y seguridad estatal, de modo orgánico, en la formación de un ejército secreto para llevar a cabo un plan de operaciones que sistematizaba y perfeccionaba lo que las bandas paramilitares habían venido haciendo.[37] Dicho plan, que venía ejecutándose en forma celosa desde 1975 en todo el ámbito nacional, estaba inspirado en la doctrina contrainsurgente que se había convertido en el núcleo fuerte del imaginario castrense, y que identificaba a un enemigo mortal al que debía combatirse hasta las últimas consecuencias.

La percepción por parte de las Fuerzas Armadas de la "amenaza comunista" reviste sólo una parte de la explicación, y no precisamente la más significativa. Los

[37] Ibidem. pág. 82.

ataques por parte de los grupos guerrilleros apenas fueron la confirmación, requerida por un diagnóstico, un ideario y un proyecto político, económico y social, que se venía gestando desde mucho tiempo antes. Más precisamente, desde mediados de los cincuenta, cuando el país comenzó a atravesar el "círculo vicioso de la inestabilidad", del que diéramos cuenta en el primer capítulo, por el cual se responsabilizaba al peronismo y a la izquierda revolucionaria.

Desde entonces, y a nivel ideológico, fueron tomando forma los lineamientos de la Doctrina de la Seguridad Nacional, la cual permitió a las cúpulas castrenses identificar a un enemigo social, político e ideológico omnipresente y multiforme, y que poseía muchas formas de acción y organización: la subversión. Por otro parte, y a nivel del aprendizaje y aplicación práctica de dichas concepciones, dicho imaginario castrense se alimentó, como también mencionáramos, de las experiencias y enseñanzas de los militares y sacerdotes católicos franceses que participaron de la lucha contra los movimientos insurgentes en Indochina y Argelia. Por esos años, los cuadros jóvenes del Ejército eran entrenados por oficiales franceses de similar ideología en la lucha antisubversiva, los cuales los adoctrinaron con respecto a la conveniencia de montar una estructura clandestina paralela para enfrentar al comunismo, solapadamente articulada a la estructura oficial. Dicha organización debía consistir en un aparato de inteligencia y represión, dado que, según dichos expertos la lucha exigía la adopción de técnicas acordes a la naturaleza del enemigo.

En este sentido, y siguiendo la lógica del "paralelismo global", la subversión debía ser enfrentada "en su mismo terreno y con sus mismas armas: desconociendo toda legalidad y convención existente, realizando acciones encubiertas de terrorismo, secuestro y asesinato, practicando sistemáticamente la tortura y extendiendo el "teatro de operaciones" más allá del mero combate con los grupos armados dentro de los límites del país.

A su vez, y desde una perspectiva continental, estas enseñanzas serían ratificadas y sistematizadas desde las escuelas militares norteamericanas en la región, a las que asistieron más de tres mil oficiales argentinos entre 1960 y 1975. La confluencia con sus colegas norteamericanos les permitió poner en común su odio al comunismo, así como su común preocupación por el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Dicha comunión de pensamiento fue canalizada a través de las instituciones creadas bajo el influjo de este

panamericanismo militar (la Junta Interamericana de Defensa, su correspondiente Colegio, las Conferencias Anuales de Comandantes en Jefe y la Escuela de las Américas), las cuales sirvieron para homogeneizar las orientaciones de las Fuerzas Armadas de la región en la "defensa de los valores de Occidente y el rechazo mancomunado de toda ideología marxista-leninista".[38]

La acumulación de estas enseñanzas y experiencias terminó por convertirse en una verdadera "doctrina de guerra" en septiembre de 1975, cuando el generalato se reunió para dar aprobación a la "Estrategia Nacional Contrasubversiva", la cual proponía sistematizar y extender las acciones que desde principios de año se venían llevando a cabo en Tucumán. El plan estableció como método oficial y regular de la lucha del conjunto de las Fuerzas Armadas las "operaciones especiales de inteligencia", a la vez que se convertiría en el principal instrumento de orientación de las Fuerzas Armadas como institución en su conjunto.

En el diseño del mismo, se priorizó, antes que cualquier otra cosa, la eficacia de la ofensiva a llevar a cabo contra el enemigo, cuya naturaleza era política e ideológica, más que militar. "El comunista subversivo", o simplemente "el subversivo", actuaba dentro de las fronteras nacionales y de la sociedad, podía tener o no vinculaciones a nivel ideológico, político o financiero con los centros mundiales de la revolución, a la vez que atravesaba todos los planos de la vida social, tales como la educación, la cultura, las relaciones laborales y la religión. De esta manera, pudo identificarse una "condición subversiva" que había que eliminar, la cual no necesariamente estaba ligada a la lucha armada, o con alguna estrategia de toma revolucionaria del poder, ni tampoco con la pertenencia a un determinado tipo de organización, sino que revestía un carácter global.

Como requisito indispensable para reconocer dicha condición subversiva, era necesario identificar la afiliación ideológica al marxismo y al izquierdismo, por lo cual, se caracterizaba a este "virus ideológico" como la causa primera a ser atacada. No obstante, y dada su amenaza para el orden, deberían ser también oportunamente perseguidos los católicos tercermundistas, los freudianos, los ateos, los peronistas, los liberales y los judíos, así como todos aquellos que atentaran contra el orden nacional por detentar posiciones agnósticas, igualitarias o populistas.

[38] Ibidem. pág. 84.

No obstante, todos estos perfiles del enemigo no resultaban tan imprescindibles a fin de identificarlo, teniendo en cuenta que podía estar "camuflado" bajo otros disfraces y ejercer en forma inconsciente su papel en la guerra. En este sentido, el mero hecho de pronunciarse a favor de un cambio social, como las posiciones que detentaban los activistas no violentos, ajenos a las organizaciones guerrilleras, que desarrollaban actividades sindicales, políticas, religiosas e intelectuales, resultaban intolerables a ojos de los militares, al funcionar como transmisores del virus ideológico en el seno de la sociedad.

En definitiva, "subversivo" era todo aquel que fuera considerado enemigo de la Patria, Patria uniforme, integrada y consensuada, tal como la entendían los militares. En este sentido, la lucha era por la patria misma, puesto que no había diferencia entre esta y las Fuerzas Armadas, puesto que habían nacido juntas el 25 de mayo de 1810. En tanto esto, los subversivos no podían ser argentinos realmente, tal como lo aclarara el general Videla, quien sostuviera que los ciudadanos argentinos no eran las víctimas de la represión, sino una minoría que no consideraban argentina.

El Proceso establecía, de esta forma, que aquello que "daba derecho a tener derecho" no era la ciudadanía ni la propia humanidad, sino el ser "buenos argentinos", a lo cual se llegaba comulgando orgánico-ideológicamente con los postulados del régimen. Al carácter unánime del nacionalismo había que sumar una perspectiva de tipo mundial, que aludía al hecho de que esta "tercera guerra mundial" se filtraba en los conflictos sociales y sectoriales, convirtiéndolos en un frente más de batalla, en los cuales se oponía la civilización occidental y cristiana con el comunismo ateo.

En consonancia con esta particular visión geopolítica del conflicto, uno de los elementos de tipo ideológico más importantes fue el que aportó el integrismo católico, nacido en los años treinta, y que fue adquiriendo relevancia en los cuarteles con el transcurso de los años. De acuerdo con éste, la Argentina y su Ejército encarnaban de forma ejemplar la fusión de espíritu nacionalista y catolicismo militante que se requería para enfrentar los problemas del momento. Es en base a esto que puede caracterizarse al integrismo argentino como nacional-católico, dado que identificaba a esta fe como la "ideología nacional" y postulaba una "alianza permanente entre Patria y Religión".[39]

[39] Ibidem. pág. 93.

Por supuesto, esta orientación doctrinaria obligaba al Ejército a convertirse en una institución guía de la nación, destinada a cumplir un papel fundamental en el proceso de su regeneración moral, no sólo en contra del comunismo ateo, sino también de las posiciones agnósticas, liberales y democráticas. De esta manera, la "tercera guerra mundial" se libraba en estas latitudes, no sólo por el avance de la subversión, sino también por que se levantaba la imbatible alianza entre sable y cruz que los enfrentaría en una lucha integral, destinada a hacer posible una sociedad "sana" que devolvería a la sociedad occidental a su camino. Es en esta esperanza que se apoyaba, en última instancia, el espíritu mesiánico que justificaba el plan de exterminio.

En este sentido, no fue menor el apoyo recibido por parte de la jerarquía católica en la lucha contra la subversión y los métodos que se emplearon en dichas acciones. A estos fines, fue decisivo el papel desempeñando por las vicarías castrenses, las cuales, desde su formación en 1957, experimentaron un proceso de fortalecimiento que les permitió acompañar celosamente el avance de la Doctrina de la Seguridad Nacional y del integrismo en los cuarteles, dinámica que alcanzó su apogeo cuando el arzobispo de Paraná, monseñor Adolfo Tórtolo, confesor y amigo personal de la familia Videla, ocupó en forma simultánea la presidencia de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y el vicariato general de las Fuerzas Armadas.

Dichas vicarías no sólo encabezaron un proceso legitimador de los planes militares, sino que además se ocuparon afanosamente de reconfortar a los oficiales en operaciones, "limpiar" sus conciencias a alentarlos a formar parte de la acción. Atentos al carácter ideológico de la "guerra" en cuestión, así como al matiz de los métodos criminales empleados, el sostenimiento "moral de la tropa" se presentaba como un requisito indispensable a efectos de lograr el éxito.

3.5 La "receta" y su puesta en práctica: el método de las "desapariciones"

En el capítulo previo hacíamos referencia a las diferencias que existían entre las dictaduras del Cono Sur, así como en el presente, se hizo alusión a las rupturas que quiso generar esta nueva administración militar con respecto a sus predecesoras. Si hay un

aspecto en el que dichas diferencias son más marcadas, es en el de la implementación del método de las desapariciones.

Dicha metodología significó la puesta en práctica de una dinámica que implicó la ejecución de secuestros, detenciones clandestinas, torturas y desapariciones de personas. La misma, venía utilizándose con asiduidad desde comienzos de la década del setenta (registrándose unos cincuenta casos hasta 1973, 100 en 1974 y cerca de 500 en 1975), alcanzando su punto más álgido con el advenimiento del Proceso, cuando desarrolló un carácter sistemático y masivo.[40]

Los objetivos detrás de la aplicación de dicha metodología represiva son varios, y abarcan diversos planos. Por un lado, permitía que un muy amplio sector de la sociedad fuera pasible de sospecha, a partir de la cual se lo forzaba a la inacción como resultado del terror y, al mismo tiempo, se lo aislaba del resto del cuerpo social, generando confusión e incertidumbre entre las organizaciones guerrilleras y los grupos de izquierda afectados en forma directa, dificultando, de esta manera, las tareas de denuncia y la posibilidad de emprender acciones defensivas contra las delaciones obtenidas bajo tormento, lo cual permitió que la tortura se practicara sin ningún tipo de límite.

Por otro, perjudicaba notablemente la posibilidad de entablar relaciones de solidaridad entre las víctimas, así como también desalentaba los reclamos por parte de familiares y amigos, dado que ocultaba a los responsables ante quienes reclamar, evitando así toda posible comunicación con los detenidos, al tiempo que generaba un profundo temor a las posibles represalias sobre ellos u otros integrantes de sus círculos íntimos.

Podría interpretarse que el objetivo de estas desapariciones tuviera una intención intimidatoria. Sin embargo, ese propósito ya había sido alcanzado en forma más que amplia con otros recursos, como el de las masacres que se llevaban a cabo en forma diaria en la vía pública, y que luego se disfrazaban de enfrentamientos fraguados con los grupos armados. Tampoco su razón de ser estuvo ligada a las pautas dictadas por la lucha clandestina contra la subversión, la cual justificaría solamente las torturas y los secuestros, y no lo que venía posteriormente a estos.

En última instancia, la metodología de las desapariciones tiene su explicación en el hecho de que permitía resolver en forma exitosa un problema con características tanto

[40] Ibidem. pág. 107.

domésticas con internacionales: mantener fuera de la vista de la opinión, sobre todo externa, y de los alcances de la legalidad, la dimensión de la matanza que se estaba llevando a cabo, a fin de aniquilar definitiva y prontamente con un enemigo que, en el pasado, había demostrado su capacidad para resistir y recomponerse frente a los intentos represivos selectivos y medianamente acotados por la legalidad.[41]

En este sentido, de lo que se trataba era, no sólo de hacer desaparecer a las víctimas, sino también de ocultar el propio acto de represión. De esta manera, se pretendía alcanzar una solución definitiva del problema, evitando delaciones y, al mismo tiempo, evadir los probables juicios condenatorios, protegiendo a los represores contra las denuncias, y colocando a los posibles aliados, tanto externos como internos, en una mejor predisposición para colaborar. Básicamente, porque de esta forma se les evitaba a aquellos que brindaban un apoyo de tipo genérico al régimen el verse obligados a emitir un juicio público favorable al respecto: no necesitaban justificar aquello que podían decir no conocer.

A estos fines, la experiencia chilena sirvió a los militares argentinos como un precedente ineludible. La gran crueldad del régimen de Pinochet en sus primeros años, con la aplicación de los fusilamientos sumarios, había despertado el repudio de la opinión pública internacional, lo cual provocó que gobiernos, políticos y empresarios de todo el mundo evitasen el contacto con las autoridades del país trasandino, lo cual les ocasionó dificultades a nivel financiero y comercial. Basándose en las enseñanzas proporcionadas por la dictadura chilena, los militares golpistas argentinos procuraron, y tuvieron bastante éxito, diferenciarse de sus pares trasandinos.

En lo que se refiere a su aplicación práctica, el método de las desapariciones requería de la colaboración y coordinación del conjunto de las fuerzas represivas. Cuando una de ellas se disponía a "operar", solicitaba "zona liberada", a fin de evitar desencuentros o interferencias no deseadas. Producto de la puesta en funcionamiento de toda esta estrategia, los familiares y amigos de las víctimas se encontrarían con un infranqueable muro de silencio en las comisarías y regimientos, al momento de realizar sus denuncias o pedidos de auxilio. Acto seguido, se ponía en marcha el "grupo de tareas", que sorprendía a la víctima, por lo general, en su domicilio y durante la noche, sin posibilidad de defensa.

[41] Ibidem. pág. 109.

El secuestrado o "chupado" era encapuchado y trasladado a un centro clandestino de detención, o "chupadero", donde se lo sometía a torturas inconcebibles, desde un primer momento y hasta obtener la mayor cantidad de información posible, aunque, en algunos casos, las torturas se prolongaban más allá de estos fines, con la sola idea de deshumanizar totalmente al secuestrado. Luego, y por regla general, era "trasladado", lo que en la jerga significaba su asesinato y la desaparición del cuerpo, el cual, habitualmente, era arrojado al océano, a diques o ríos, quemado o enterrado en fosas comunes sin identificar. Muchos de los detenidos permanecieron durante varios meses en los campos, incluso años, prestando algún tipo de colaboración o servicio, o bien como potenciales rehenes aprovechables. No obstante, más tarde o más temprano, se terminaba consumando la desaparición y se borraba toda huella.

Otro aspecto de este proceso de desapariciones era el robo de las pertenencias de las víctimas. Sus casas eran saqueadas y sus automóviles y propiedades pasaban a manos de los miembros de la patota que ejecutó su desaparición y de sus jefes. Dichos saqueos presentaban una sistematicidad tan consolidada como la de los asesinatos y las torturas. Los objetos de valor del desaparecido eran cargados en camiones llevados a los operativos a tales efectos, y trasladados a depósitos anexos a los centros clandestinos, desde los cuales se vendía o bien se repartía el botín. Al mismo tiempo, se estableció un procedimiento para falsificar títulos de propiedad. El motivo de estas acciones no era sólo proporcionar un "estímulo" económico a los integrantes de los grupos de tareas, sino también financiar las actividades de las que estos participaban.

No obstante, no fue este el aspecto más perverso de los saqueos perpetrados por los militares. De la misma manera que sus pertenencias materiales, a menudo los hijos de los "subversivos" fueron considerados parte del botín de guerra, ya fueran secuestrados junto con sus padres o nacidos en cautiverio. En algunos casos, llegaron a sufrir la misma suerte que sus progenitores, pero el procedimiento regular era que los secuestradores se los apropiaran para darlos en adopción a familias de militares o a los mismos miembros de los grupos de tareas. De acuerdo con la CONADEP, existen investigaciones de alrededor de unos doscientos casos de este tipo.[42]

[42] Ibidem. pág. 113.

3.6 La agudización de la represión y la extensión de la amenaza subversiva

El plan represivo que se puso en funcionamiento con la llegada del Proceso abarcó una amplia gama de víctimas, pero lejos estuvo de presentar un carácter indiscriminado. En la selección de los objetivos y el método a emplear, se realizó un trabajo profundamente estudiado y se delineó al enemigo de una manera que, si bien tenía límites borrosos, no carecía de capacidad discriminante. En este sentido, los militares identificaron dos terrenos de especial relevancia, en los cuales reconocían el caldo de cultivo de la amenaza subversiva: el campo educativo y la actividad sindical.

Son varios los motivos por los cuales el sindicalismo representó una de las mayores preocupaciones a ojos de los militares. Por un lado, el poder acumulado por los sindicatos, desde 1955, había representado uno de los mayores obstáculos a las previas administraciones golpistas cuando quisieron implementar sus programas de reforma económica e institucional. No obstante el apoyo que habían prestado a diversas de las experiencias militares anteriores, más tarde o más temprano dichas relaciones y la fortaleza del "veto" gremial habían conspirado contra la cohesión y el sostenimiento de los planes castrenses.

Por otro lado, la radicalización de la lucha política a comienzos de la década del setenta, generó en los gremios expresiones bastante alarmantes para la concepción antisubversiva y los intereses de las clases dominantes. La proliferación de gremios combativos y de estrategias de acción directa en los tradicionales hizo pensar a los militares y sus aliados civiles que se estaba gestando un clima de rebelión industrial potencialmente muy explosivo, y que socavaba directamente la autoridad de las burocracias sindicales y de la patronal. A fin de desactivar dicha amenaza, y a sabiendas de la poca inserción que había tenido la guerrilla en las estructuras sindicales, los militares utilizaron una valiosa arma con la que contaban: la ofensiva lanzada por las organizaciones armadas en 1974 y 1975 para adentrarse en ese campo.

La eliminación o el despido de los activistas gremiales se escudaron entonces en la necesidad de frenar el avance de la "guerrilla industrial", contra la que venían alertando tanto empresarios como políticos de derecha. A las redadas habituales luego de consumado el golpe, les secundó la persecución sistemática de los delegados de base y de

las comisiones internas, objetivos prioritarios en la lucha antisubversiva. La colaboración entre empresarios y militares que surgió de estos hechos hizo que, llegado un determinado punto, fuera muy difícil distinguir entre unos y otros.

Dicho patrón de colaboración entre ambos grupos, para nada casual, se repitió en un gran número de casos. En 1976, el foro empresario IDEA (Instituto para el Desarrollo de Empresarios de la Argentina) editó en conjunto con el Ejército un folleto explicativo acerca de la amenaza subversiva en el ámbito sindical, en donde recomendaba la delación de los obreros y empleados sospechosos a los comandos respectivos. El folleto, junto con las recomendaciones, era acercado a las empresas en las visitas periódicas que realizaban los jefes militares de cada zona. En no pocas oportunidades, empresarios y directivos respondían positivamente, brindando información, a fin de que los grupos de tareas secuestrasen a sus empleados "subversivos". En caso de tener la fortuna de sobrevivir, dichos empleados eran despedidos por "ausencia injustificada".

Muchas empresas hallaron en esta modalidad una forma simple y expeditiva de resolver sus conflictos gremiales, sabiendo que no eran guerrilleros, en realidad, aquellos a quienes denunciaban. Fue este el caso de un delegado de sección del Banco de Boston, militante de izquierda pero sin ninguna relación con los grupos armados que, al negarse a aceptar las presiones por parte del banco para que renunciase, fue secuestrado junto a su mujer, delegada del Citibank. Los secuestradores les dijeron que el Boston los había denunciado por subversivos y, tras aplicárseles la metodología habitual de saqueo de la vivienda, confinación en un centro clandestino de detención y torturas sistemáticas, fueron liberados, desnudos, en los lagos de Palermo. Mientras tanto, habían debidamente recibido ya sus respectivos telegramas de despido.[43]

Al mismo tiempo, todo este proceso de disciplinamiento laboral, destinado a destruir las organizaciones de planta, estuvo acompañado de un drástico recorte de los derechos de los trabajadores, generando un cambio abrupto en el mundo del trabajo de los sectores populares y de la clase media-baja. La férrea disciplina orientada a mejorar la productividad sobre la premisa de más trabajo por menos salario y peores condiciones laborales proveyó la base de esta operación.

El profundo deterioro de los salarios en los primeros años se acompañó con el mantenimiento del nivel de empleo, pero con una alta rotación en los puestos de trabajo,

[43] Ibidem. pág. 116.

entre ramas y sectores, que desembocó en un marcado descenso de la calificación y de las condiciones laborales. Al ser visto con gran preocupación por parte de los militares, dado su potencial efecto catalítico en la agitación social y política, el desempleo fue siempre un tópico intocable para los éstos, los cuales procuraron en todo momento que no se incrementara.

El cuadro de situación permite relacionar al proceso con aquella concepción conservadora y oligárquica que identifica a los problemas sociales como problemas policiales. En este sentido, tres factores fueron los que se tuvieron en cuenta a fin de reorientar la vida laboral: un profundo retroceso de las formas de protección estatales, legales y corporativas; una no menos dramática irrupción de las formas, estatales y paraestatales, de represión; y, finalmente, la ofensiva de las patronales en las empresas que, libres de todo control, no solamente se dedicaron a recuperar las posiciones perdidas frente a los trabajadores, las comisiones internas y los sindicatos, sino que recorrieron este camino en forma acelerada y profunda.

Si bien la intención subyacente a estas acciones profundamente represivas era la eliminación de los sectores más combativos, en otra forma, más velada, se utilizó también para amedrentar a una burocracia sindical más moderada que se tentaba con la posibilidad de ponerse a la vanguardia en algunos conflictos. En este sentido, las Fuerzas Armadas nunca procuraron el desmantelamiento total de la estructura sindical, sino que el Proceso se abocó a destruir formas de organización específicas. El objetivo radicaba en generar organizaciones de trabajo que se dedicaran exclusivamente a sus actividades específicas, es decir, sindicatos que deberían operar como mediadores "únicos y naturales" entre el estado y los trabajadores, los cuales se ligarían voluntariamente con el estado, pero sólo en su condición de tales, o sea, bajo una relación específicamente laboral.

Las disposiciones del Ministerio de Trabajo apuntaban, de esta manera, a generar una dinámica en la cual las protestas se canalizaran únicamente hacia el tratamiento de los aspectos técnicos del plan económico. De esta forma, se procuró acotar el conflicto entre el capital y el trabajo, de manera tal que se conformara una conducción que no ofreciera resistencia alguna a la implementación del programa neoconservador. El fin que se perseguía con estas medidas era no sólo exterminar lo que genéricamente se dio en llamar la izquierda sindical, sino provocar un proceso de despolitización lisa y llana de

los trabajadores, lo cual implicó la prohibición de las 62 Organizaciones Peronistas y la detención de Lorenzo Miguel, así como un profundo cercenamiento del poder sindical, evidenciado en el desconocimiento de los convenios colectivos y las paritarias, así como también en el traspaso al estado de las obras sociales.

Como se mencionó, el segundo frente de importancia para la represión fue, sin duda, el campo educativo y, dentro de este, el ámbito universitario, puesto que desde allí el "virus subversivo" se diseminaba y penetraba en las mentes de los estudiantes, contribuyendo de esta manera a la formación de nuevos cuadros e influyendo en la conformación de la elite dirigente. Por lo tanto, dicha actividad debía ser eliminada a cualquier precio, dado que sino se interrumpía el "eslabonamiento ideológico entre las generaciones", no tardarían en reaparecer los grupos armados que venían siendo aniquilados hasta el momento. Teniendo en cuenta esto, no es difícil dilucidar que las agrupaciones estudiantiles fueron sindicadas como "enemigas activas" y perseguidas sistemáticamente desde el comienzo mismo del golpe.

A efectos de profundizar las acciones en este ámbito, el comando del Ejército lanzó en 1977 la denominada "Operación Claridad", que consistía en un gran plan contra docentes y alumnos que fueran identificados como "subversivos". La moderada oposición del ministro de esa cartera en ese momento, Ricardo Bruera, le valió su despido y su reemplazo por Juan José Catalán, un integrista sin matices que tomó en sus manos la tarea de redactar la "Directiva sobre infiltración subversiva en la enseñanza". Esta se convirtió en, básicamente, un manual de delación y control ideológico que debía ser puesto en práctica por los directores, autoridades y los propios docentes sobre sus pares, sobre la bibliografía y el material utilizados y, por supuesto, sobre los estudiantes.

A fin de instrumentar y controlar la aplicación de la Directiva, el 11 de octubre de 1977, el Ministerio de Educación dictó la resolución Nº 44, la cual disponía la creación de una dependencia de inteligencia en su estructura administrativa, con el objetivo de supervisar la realización del plan. Desde esa dependencia se coordinarían las actividades de la red de informantes que los servicios de inteligencia habían creado en los colegios y universidades. Su eficacia quedaría reflejada en el despido e inhabilitación de alrededor de 8.000 docentes en los años siguientes, así como en las cifras de desaparecidos: 21% de los casos documentados fueron estudiantes, 6% en el caso de los docentes, los cuales

siguen en importancia a los obreros y empleados, con el 30% y el 18%, respectivamente.[44]

Este proceso de disciplinamiento y cambios drásticos en la educación media y superior, principalmente, estuvo acompañado de despidos, así como de secuestros y detenciones. La educación fue sometida a un control rigurosísimo, lo cual se desprendía de la puesta en funcionamiento de diferentes acciones destinadas a vigilar y castigar, operando sobre las relaciones entre docentes y alumnos, y entre estos y sus familias. Un ejemplo grotesco de las mismas puede ser el del 29 de abril de 1976, cuando el teniente coronel Jorge Gorleri ordenó en Córdoba una espectacular quema de libros, por considerarlos "documentación perniciosa que afecta el intelecto y a nuestra manera de ser cristiana (…) para que con este material se evite continuar engañando a nuestra juventud sobre el verdadero bien que representan nuestros símbolos nacionales, nuestra familia, nuestra Iglesia, nuestro más tradicional acervo sintetizado en Dios, Patria, Hogar".

No faltaban en estos lineamientos las actividades meramente policíacas. Por ejemplo, la "Directiva…" proporcionaba descripciones a fin de identificar el aspecto, las actitudes y las ideas de los maestros subversivos. Dicho "currículum" se oficializó también en sendas reglamentaciones, como la Circular Nº 137 de la Dirección Nacional de Educación Media y superior, que marcaba la actividad cotidiana de los colegios secundarios. La misma indicaba que se "prescindirá del trato familiar o de excesiva confianza con los alumnos, y se evitará todo comentario que afecte el principio de autoridad", a la vez que estipulaba la correcta vestimenta, tanto para alumnos como para profesores.

La prensa, en este sentido, jugó un papel de importancia considerable en la represión de la educación y del sindicalismo. Algunas revistas, a través de la publicación de artículos de corte inquisitorio, lograron que el ministerio prohibiera ciertos libros escolares, y difundieron entre los padres una paranoia delirante y anticomunista, que incitaba a la delación de maestros y al embrutecimiento de los hijos. Para ser más gráficos, es por demás ilustrativo el artículo publicado por la revista "Para Ti" a comienzos de 1977, denominado "Cómo detectar el lenguaje marxista en la escuela".[45]

De forma inevitable, el régimen militar consideró a los medios de comunicación masiva como uno de los instrumentos y territorios preferidos para llevar a cabo la cruzada

[44] Ibidem. pág. 117.
[45] Ibidem. pág. 117.

reorganizadora. Al mismo tiempo, y por obvias razones, debía controlarse la difusión de información sobre la "guerra sucia". El espeso manto de silencio que cubría la información apócrifa brindada por el gobierno fue completamente funcional para aquellos que, a fin de eludir la incertidumbre o eventuales problemas de conciencia, preferían "no saber".

Con el objeto de que los medios cumplieran con el papel reordenador, culturalmente reaccionario, restaurador y uniformizador a nivel político que les asignaban los militares, estos últimos hicieron hincapié en los mecanismos de censura y autocensura, obteniendo un tosco pero efectivo resultado: tanto la prensa como las radios privadas, así como los canales de televisión y radiodifusión en manos estatales dejaron, en los hechos, de representar un ámbito propiamente público, para adaptarse en forma grosera a pautas de tipo antiintelectuales y anticulturales. En este sentido, sea tal vez la única excepción la de "La Opinión", periódico dirigido por Jacobo Timerman, que fuera acusado de "demoler los valores estéticos de la Nación", y que fue finalmente cerrado.

En lo que respecta a las emisiones televisivas, se profundizaron los lineamientos heredados del gobierno de Isabel, en cuanto a lo aburrido, gris y "pacato" de las mismas, lo cual produjo profundas caídas, tanto en los niveles de audiencia como en las ventas. Los productos periodísticos pasaron a hermanarse en la insipidez, ya fueran frívolos o culturales. El lenguaje de tipo prescriptivo, que ya se venía utilizando con asiduidad desde el gobierno peronista, se volvió habitual luego de consolidado el golpe. De manera inexplicable, algunos géneros gráficos y televisivos fueron considerados ámbitos de la mayor importancia formativa, lo cual los volvió objeto de un estricto control. He aquí el porqué del esfuerzo dedicado a "moralizar" las telenovelas, así como las revistas del corazón y familiares, transformadas en campos donde se libraba la batalla ideológica.

En síntesis, y amén del papel funcional que desempeñaron los medios en la configuración de la atmósfera represiva en la que estaban sumergidos los argentinos en aquel momento, además del miedo, lo que los medios de comunicación lograron, durante cuatro larguísimos años entre 1976 y 1980 fue tedio, un tedio que se tiñó de una profunda angustia cuando, la suposición inicial de que los militares se irían rápidamente, tras su cruzada "normalizadora", se convirtió en la aterradora certeza, que igual sería desmentida por los posteriores acontecimientos, de que "no se irían jamás".[46]

[46] Ibidem. pág. 147.

3.7 El rol funcional de los partidos políticos

Ya en los meses previos al golpe de marzo de 1976, los partidos políticos, en especial aquellos denominados "tradicionales" se vieron sumidos en lo que puede denominarse una profunda "crisis de representatividad". La misma, tenía como razón principal el enorme distanciamiento que se había producido entre estos y sus bases, dentro de un marco general de desmovilización de la sociedad en su conjunto. Es así como se encontró cuestionada la propia forma de participación política, lo cual dio lugar a una escisión entre esta y la sociedad civil. Es decir, se habían quebrado las bases mismas de legitimación del Estado.[47]

Consumado el derrumbe del tercer gobierno peronista, dicha desmovilización alcanzó también al resto de los partidos, los cuales se mostraron incapaces de ofrecer un discurso alternativo a fin de reelaborar las bases de legitimación del sistema, frente a lo inminente del golpe militar venidero. De esta manera, puede decirse que se habían roto las lealtades partidarias al régimen constitucional, lo cual no hizo más que profundizar el proceso de atomización dentro de la sociedad civil, y aceleró la crisis política.

El recurso del terrorismo de estado, aplicado por el gobierno de Isabel Perón, a través de la creación de la Triple A, no hizo más que agregar aún más leña al fuego de la que era la mayor crisis institucional que experimentara la nación, y fue un claro indicio de la incapacidad de las instituciones de gobierno para consolidarse dentro del marco del estado de derecho, así como de la imposibilidad del gobierno nacional para garantizar mínimamente la seguridad de los ciudadanos.

De esta manera, y como mencionáramos previamente, las Fuerzas Armadas volvieron a erigirse en el último reaseguro moral posible frente a la crisis, dada la legitimidad que habían adquirido como interlocutor político válido, así como también por la independencia de acción que detentaban frente al poder civil, y que las convertían en un actor político principal, dentro de un sistema signado por la permanente inestabilidad que provocaba la sucesión de gobiernos civiles y militares en forma continua. Dada esta característica del sistema de partidos políticos en la Argentina, es fácil entender cómo es que la estructura partidaria lleva en sí misma una instancia de claudicación política, la

[47] Yannuzzi, María de los Ángeles. **Política y dictadura. Los partidos políticos y el Proceso de Reorganización Nacional. 1976-1982**. pág. 15.

cual parece favorecer la tendencia al cierre de las libertades con un énfasis muy particular.

En este sentido, no resultan extrañas las palabras del Dr. Ricardo Balbín, máximo representante de la UCR, quien sostuviera que el "Proceso encontró una expectativa optimista", luego de consumada su llegada al poder. El mismo Balbín había reconocido en los días previos al golpe que no creía tener en sus manos solución alguna para la crisis política, por lo cual, y en carta a sus presidentes de distrito y dirigentes del partido, reconocía que "se abría un 'lapso prudencial' de suspensión de las actividades políticas", lo cual implicaba ceder la función específica de toda institución partidaria a las Fuerzas Armadas.[48] De esta manera, muchos dirigentes creyeron propicia la situación para "recomponer internamente las organizaciones partidarias", buscando superar de esta forma la escisión que se había producido entre estas y la sociedad civil.

Por lo tanto, cuando hablamos de crisis de representatividad, hacemos referencia al hecho de que los diversos discursos partidarios no lograron constituirse en elementos convocantes del consenso social. Planteada de esta manera, la situación ponía en evidencia una profunda fractura de las propias bases de legitimación del estado de derecho, lo cual se manifestaba en la ruptura entre las bases de militantes y simpatizantes y las estructuras partidarias y sus dirigentes. Como resultado, los partidos se veían imposibilitados de oficiar de mediadores entre el Estado y la sociedad.

Al caracterizar esta crisis de representatividad como un fenómeno de tipo generalizado, se pretende dar cuenta de que no fue algo privativo de algunos partidos en particular, sino que todos fueron implicados por igual. Lo cual, nos da la pauta para afirmar que todos fueron responsables, en diferente medida, de la falta de lealtad al régimen democrático. La misma era consecuencia de haber negado la politicidad de las relaciones sociales, resultado de haber privilegiado en sus discursos las cuestiones de tipo económico-eficientistas.

En este sentido, y pese al largo período de consolidación que habían tenido los partidos en la vida política argentina, uno de los principales signos de su debilidad radicaba, precisamente, en haber privilegiado este tipo de cuestiones sobre las netamente políticas. De esta manera, la política se veía diluida dentro de las discusiones de corte económico, lo cual dio pie a la proliferación de luchas por el poder de corte

[48] Ibidem. pág. 38.

individualista, atentando directamente contra la posibilidad de construcción de un espacio común a nivel político.

La lógica corporativa, que había obtenido preponderancia en el último tramo del gobierno peronista, contribuyó a afianzar esas tendencias de tipo economicista, promoviendo discursos altamente especializados, que no hacían otra cosa que dejar afuera de las discusiones importantes al conjunto de la sociedad. En base a estas concepciones, que privilegiaban la eficiencia económica por sobre el debate político, poco importaba que la reestructuración de la sociedad tuviera lugar a través de medios democráticos o autoritarios. Por lo tanto, la cuestión se convertía entonces en un problema de conocimiento, en donde la presencia de "expertos" podía, supuestamente, garantizar el buen desempeño y la obtención de resultados positivos.

En este sentido, es ilustrativa la actitud adoptada por el MID. El Movimiento de Integración y Desarrollo, que había formado parte del FREJULI durante el proceso eleccionario de 1973, como uno de los principales aliados del peronismo, rompió con este poco antes del golpe militar. A poco de producido el mismo, dio a conocer un documento en el que, sin ningún miramiento, reconocía a la nueva dictadura como una "manifestación de la revolución nacional", y mediante el cual manifestaba su abierto apoyo al régimen.

Resulta difícil entender como pueden conciliarse los hechos de que, por un lado, el MID se reconociera a si mismo como partido político y, por el otro, asumiera en forma acrítica la negación de toda política, comportamiento que por otra parte, no fue privativo de esta organización partidaria. No obstante, el caso del MID resulta paradigmático, en tanto este partido, que agrupaba a sectores ligados a concepciones de tipo desarrollista, abrigaba dentro de si también elementos que, desde una postura fuertemente economicista, entendían la política como un simple instrumento para acceder al poder y, desde ahí, proceder a la transformación económica de la sociedad.

Estos discursos, de tipo eficientistas, no hacen más que anular la política, en tanto esta queda ligada a cuestiones "avalorativas". Estas posturas, al arrogarse la posesión de la "Verdad", convierten en algo secundario las cuestiones con respecto a cual debería ser la metodología a aplicar a fin de instaurar su propuesta económica. La economía, de esta manera, se convierte en la única Verdad absoluta y objetiva, cuya puesta en práctica

requiere, cuando la situación lo demanda, la aplicación de soluciones "drásticas", ligadas, habitualmente, a gobiernos autoritarios y represivos.

Este reduccionismo, a través del cual los miembros del MID se presentan como los poseedores de ese "Saber Económico Verdadero", que compite, a su vez, con los "Saberes Económicos Verdaderos" de otros grupos que caen en el mismo tipo de reduccionismo, los conduce a ligar la solución de los problemas señalados como propios de la "moral social", dado que, en este caso, el crimen no sería atentar contra las libertades de los ciudadanos, sino el "lesionar el aparato productivo". Esta "vocación de servicio" por parte del MID, se complementó con, bajo la excusa de la inexperiencia de los militares en cuestiones económicas, la colaboración de algunos ex funcionarios pertenecientes al partido con el régimen, como fue el caso de Carballo, máximo representante del partido en Santa Fe y ex intendente de Rosario, que se desempeñara como asesor *ad honorem* del intendente Cristiani en esa misma ciudad.

3.8 La conformación de una "nueva sociedad política"

Una vez consumada la toma del poder por parte de los militares, el nuevo gobierno de facto adoptó, desde el punto de vista legal, una serie de medidas respecto del funcionamiento de los partidos políticos. La más trascendente de ellas consistió en la "suspensión" de las actividades de los mismos, medida cuyo objetivo era interpretado como una "contribución a la pacificación interior".[49] La misma tuvo alcance a nivel nacional, provincial y municipal. No obstante, y a pesar de ser establecida por la Junta Militar en marzo de 1976, recibió su estructuración legal recién en junio de ese mismo año, cuando las Fuerzas Armadas promulgaron las tres leyes en las que se definía el alcance de tales medidas.

Al analizarlas en profundidad puede observarse que, de las tres leyes en cuestión, sólo una de ellas, la 21.323, se refería específicamente a la suspensión de las actividades políticas. En su desarrollo figuraba un listado de las organizaciones a las que alcanzaba dicha medida. Dichos partidos podían mantener abiertos sus locales partidarios, pero sin realizar ninguna ostentación de sus símbolos y siglas, a la vez que podían mantener en funcionamiento sus actividades de tipo administrativo. Las otras dos leyes, la 21.322 y la

[49] Ibidem. pág. 65.

21.325, establecían, por el contrario, una nueva categoría. Las organizaciones que en ellas figuraban quedaban, a partir de ese momento, expresamente disueltas, es decir, prohibidas. En dicho grupo figuraban, además de la izquierda-marxista, con excepción del Partido Comunista, el cual se encontraba solamente suspendido, otras ligadas al peronismo. En este caso, quedaban proscriptos los que podrían denominarse "extremos", como ser, tanto las organizaciones de la derecha como de la izquierda peronista, entre ellas el FEN, la JP, la JSP, y demás.

De esta manera, y con la adopción de dichas medidas, los militares procesistas buscaban, una vez más, diferenciarse de sus predecesores de las revoluciones Libertadora y Argentina. La Revolución Libertadora había proscripto al peronismo, en un fallido intento por "desperonizar" a la sociedad, creyendo que con la prohibición, sobre todo los sectores trabajadores, se alinearían con los partidos legales. La Revolución Argentina, por su parte, atenta a los concepciones corporativas del general Onganía, que apuntaban a resolver los conflictos en el seno mismo de las organizaciones sectoriales aplicando las correspondientes medidas eficientistas, había prohibido a los partidos políticos en su conjunto.

Basándose en estas experiencias, el Proceso optó por la modalidad de la "suspensión". Los intentos previos de erradicar por completo toda actividad política habían fracasado producto de la imposibilidad que encontraron las diversas demandas de la sociedad para ser canalizadas. Como resultado, se generó un clima de inusitada violencia que condujo a la situación de crisis que desencadenó la caída del gobierno peronista. Por lo tanto, hablar de "suspensión", significaba entonces que se aceptaba, aunque fuera en forma limitada, que la actividad política no podía ser completamente erradicada.

Esto pudo comprobarse en el hecho de que, si bien la actividad partidaria tradicional, es decir, aquella cuya función era establecer a través del partido una relación entre Estado y sociedad, se convertía en una actividad subterránea, por otro lado, se reforzaba la relación dirigentes-estado como instancia limitada de resolución de conflictos.

De esta forma, se buscaba erradicar la base que constituye a todo partido, o sea, sus adherentes y simpatizantes. No obstante, esto no impidió que el gobierno militar recurriera a los partidos políticos con dos objetivos claros: por un lado, la imposibilidad

de garantizar la presencia de elementos propios en todos los recovecos del aparato del estado, los llevó a buscar la colaboración de políticos reconocidos que hubieran acordado en forma mínima con los objetivos del Proceso. Su presencia, era principalmente requerida a fin de cubrir los puestos de intendentes y presidentes de comunas en localidades menores. Por el otro, se los convocó como embajadores buscando, a través de esta acción, un proceso de legitimación a nivel internacional.

Al mismo tiempo, dicha medida de suspensión apuntaba a generar un espacio político específico, que pudiera ser manipulado autoritariamente, y a partir del cual se generaría una futura instancia de participación regulada y regimentada por las Fuerzas Armadas. La reestructuración conservadora del capitalismo, encabezada por el ministro Martínez de Hoz y su plan económico, de la cual nos ocuparemos en el capítulo siguiente, solía podía lograrse a través de la represión, la cual apuntaba a lograr la "unidad ideológica de la nación".

Una vez cumplido este objetivo, el gobierno militar podía dedicar sus esfuerzos al objetivo subsecuente, en el cual hacía hincapié el general Videla en muchos de sus discursos: una reorganización de la sociedad política que pudiera consolidar una democracia estable y duradera. La posibilidad de incorporar elementos civiles al espacio político estaba supeditada al hecho de que trascendiera la ideología de las Fuerzas Armadas a la sociedad en su conjunto. En este sentido, el gobierno militar anunciaba en forma explícita sus objetivos: participación de las Fuerzas Armadas en el proceso de elaboración y toma de decisiones, promoviendo el desarrollo de una convergencia cívico-militar; reorganización institucional y política del país, a fin de terminar con los ciclos pendulares de gobiernos civiles y militares; asegurar la inserción de las Fuerzas Armadas en el sistema político.

Por supuesto, de nada servirían estas directivas si las líneas de acción en ellas contenidas no lograban ser internalizadas y no se volvían parte de la cotidianeidad, lo que en este caso, significaba asegurar la sucesión del régimen militar en forma consensuada por la sociedad. En la propuesta militar, esto se traducía en que, además de desarrollar un pensamiento ideológico afín con el de las Fuerzas Armadas, debía quedar garantizado que estas se mantuvieran como el contralor último de la política, estrategia que apuntaba, no sólo a que estas se legitimaran como "árbitro" de la futura sociedad política, sino también a evitar una irrupción violenta de las fuerzas políticas y sociales. Una vez

alcanzados estos objetivos, el traspaso del poder a manos civiles debía producirse, inexorablemente, antes de que tuviera lugar un posible deterioro del régimen, a fin de asegurarse una transición pactada.

Estos planes de las Fuerzas Armadas encontraron una postura indulgente, sobre todo en la primera etapa del gobierno militar, de parte de los partidos políticos, cuyos dirigentes procuraban revitalizar las negociaciones con el régimen. Esta actitud se explica a partir del hecho de que, en base a las declaraciones oficiales, que prometían "la instauración de una auténtica democracia, republicana, representativa y federal", los dirigentes partidarios arribaron a la conclusión de que el gobierno militar convocaría en el corto plazo a las organizaciones políticas para instrumentar el traspaso del poder a los civiles.

El doble discurso por parte del gobierno, el cual combinaba la mención permanente de la democracia con la suspensión de las actividades de los partidos políticos, generó en estos últimos un grado de confusión tal que los llevó a pensar que el régimen instaurado tendría una corta duración, a punto de partida de una salida electoral negociada con las Fuerzas Armadas en un relativamente corto plazo de tiempo. La creencia de que la intervención militar se trataba en realidad de un proceso transicional breve entre dos gobiernos civiles se sostenía en gran medida en la combinación entre el hecho, por un lado, de que las siguientes elecciones para la renovación presidencial hubieran tenido lugar a fines de 1976 y, por el otro, los objetivos enunciados por el gobierno en lo referente a la conformación de la nueva sociedad política, ecuación que parecía resolverse en una caracterización del Proceso como un gobierno de transición de corta duración, que solamente venía a poner orden en una sociedad conflictuada.

Esta interpretación de los hechos fue la que impidió a los partidos recordar que, al producirse el golpe, los jefes militares se habían ocupado de aclarar que el Proceso no se fijaba tiempos, sino metas y objetivos. Teniendo en cuenta esto, encuentra explicación el hecho de que los partidos políticos no pudieran comprender que los objetivos planteados por el gobierno militar implicaban una reformulación del modelo global de desarrollo, que iba de la mano con una reorganización de la sociedad en su conjunto. A la vez, fueron incapaces de interpretar que la feroz represión desatada luego de instaurado el golpe de estado era la metodología necesaria para lograr una reestructuración

conservadora del capitalismo, la cual requería del disciplinamiento social a través de la eliminación de cualquier tipo de posible disenso.

3.9 El Proceso y su legitimidad dentro de la sociedad civil

Las demandas de orden y gobierno que se venían sucediendo desde 1975, luego de producido del golpe, dieron paso a una sensación de alivio que por mucho excedió la producida en aquellos grupos y sectores, a esa altura ya bastante numerosos, que apoyaban activamente al golpe. No obstante esta sensación generalizada, existían diferencias considerables de acuerdo a de que grupo se tratara.

La militarización de la política y la sucesión de hechos violentos acaecidos entre 1969 y 1975 habían calado hondo en la forma en que veían las cosas las clases altas argentinas. La importancia de este impacto se debía no sólo al hecho de que este tenía su origen en procesos de tipo económicos o políticos adversos, sino que también estaba ligado a circunstancias que habían afectado directamente su vida cotidiana, personal y familiar, de una forma que hubiera resultado inimaginable en años previos. A pesar de la desactivación de la amenaza subversiva, la sensación de temor persistió en estos grupos, sensación de la cual los militares se aprovecharon para sacar ventaja.

En este sentido, el intento de reconstruir los vínculos de autoridad por parte del gobierno militar tuvo un excelente acompañamiento, vasto e intenso a nivel "micro". La posibilidad de retomar el orden dentro de los hogares privilegiados de la sociedad argentina fue recibida con alivio, al dejar atrás la amenaza de una perdida definitiva. Se trato entonces de un acompañamiento social al Proceso auténtico por parte de los sectores que compartían sus mismos valores.

Es por eso que resultó tan funcional a estos fines el carácter conservador del régimen procesista, el cual, no sólo no socavo la autoridad paterna, sino que, por el contrario, se propuso la tarea de restaurarla. Así como el Proceso se mostró mortalmente amenazador para aquellas pautas de familia o autoridad que no se ajustaran a su conservador modelo de gobierno, resultó muy amable para con aquellos muchos grupos sociales y familiares que compartían su mismo modelo. A estos, el régimen les proporcionó seguridad. De esta manera, la restitución de la autoridad fue acompañada, no solamente por la retórica conservadora del régimen, sino también por muchas de sus

políticas activas, lo cual resultó especialmente reconfortante para las generaciones adultas, en especial, entre las clases altas.

La satisfacción de los sectores poderosos no se limitaba a la mera recuperación de la autoridad al interior de sus familias: la misma se extendía también a la reversión de los cambios producidos en las instituciones más directamente vinculadas a su reproducción, en especial, las educativas y religiosas. Y, por supuesto, aquellas pertenecientes al mundo del trabajo. En todos estos ámbitos acompañaron las ofensivas restauradoras, a las cuales vieron, no sólo como la solución contra los peligros recientemente vividos, sino, y sobre todo, como el medio para recuperar una posición durante demasiado tiempo contestada.

Un número interminable de siniestros episodios, producto del accionar de los grupos de tareas hicieron posible la ansiada reivindicación simbólica y, junto con ella, la reinstauración de prácticas que los sectores privilegiados habían debido abandonar y que ahora recuperaban legitimidad. De esta manera, entró en funcionamiento un tipo de odio social, disimulado de muchas formas, y siempre auspiciado por el gobierno, que contaba con el no tan disimulado apoyo de grupos que ahora volvían a sentirse seguros, y que veían en la dictadura la reimplantación de un orden perdido, la recuperación de la certidumbre en la vida cotidiana y la recomposición de la autoridad en las familias y otros pequeños contextos.

Por supuesto, la contracara de esta situación era la interpretación de gran parte de la sociedad de que el hecho de perder la democracia resultaba un precio muy bajo si esto significaba vivir más tranquilos. Algunos, a pesar de ser conscientes de los peligros que encerraban los abusos de poder, consideraban que estos eran un mal menor frente a la situación de crisis generalizada. Esta forma de pensamiento logró consolidarse producto de que muchos, quizás demasiados, veían en los militares sólo aquello que querían ver: virtudes como la moderación, la austeridad, la templanza y la prudencia, visión que no llegó a contaminarse a pesar de la contundencia de los hechos que la contradecían en forma diaria.

Algo similar puede afirmarse con respecto a la represión. El generalizado estado de anestesiamiento de las conciencias morales provocaba que muchos pidieran por el fin de la violencia, por el reestablecimiento de su monopolio público, para lo cual se mostraban dispuestos a aceptar un importante grado de violencia ilegal, a fin de que se lograra. Ciertamente, la convicción de que algunos derechos debían ser dejados de lado

por un tiempo en la lucha contra la subversión, así como el hecho complementario de que el poder de facto debía colocarse por encima de la ley para combatirla eficazmente, eran parte del imaginario social que acompañó la consolidación del golpe y del consenso que lo respaldó durante los primeros años, y que volvieron proclive a la sociedad a un tipo de fascismo de carácter difuso.

Esto pudo comprobarse en la existencia de un núcleo social procesista que, desde fuera del gobierno, pero ciertamente dentro del régimen, compuesto por civiles y militares, laicos y sacerdotes, hombres y mujeres de todas las condiciones y profesiones, otorgó su consentimiento a las operaciones de represión ilegal. A su vez, dicho núcleo consideraba a la represión como parte de un proyecto más amplio de reorganización de la sociedad "desde arriba hacia abajo", motivo por el cual acompañó, esgrimiendo una retórica exaltada, el espíritu cruzado que se gestaba en los cuarteles.

En este sentido, es ilustrativa la propuesta del Colegio de Abogados de la Capital Federal, el cual difundió, tanto en el país como en distintos foros latinoamericanos, un proyecto de ley que preveía el fusilamiento *in situ*, post aprehensión, de cualquier delincuente que, a consideración de su captor, estuviera involucrado en un acto terrorista.[50]

Teniendo en cuenta esto, y a pesar de que los momentos previos al golpe fueron considerados como particularmente caóticos, tanto el golpe como el gobierno surgido de este, fueron interpretados de acuerdo a experiencias del pasado, y no como un fenómeno distinto en lo que se refería a su naturaleza, alcance, contenido y tiempos previsibles. Dicha interpretación colectiva se convirtió en un elemento constitutivo de la situación, en tanto, en el contexto de realización del golpe, así como en los primeros años del Proceso, contribuyó a afirmar la sensación de alivio y certidumbre y a apuntalar el respaldo y la aprobación de los militares, los cuales, según su criterio, se vieron obligados a asumir el poder en vistas de la ausencia de alternativas.

Fue así que, producto del acostumbramiento que se había generado respecto de la sucesión de golpes y gobiernos militares que no resultó extraño el espíritu refundacional que caracterízó a la nueva administración castrense, y que lo distinguía de anteriores experiencias. Esto permitió el consentimiento por parte de vastos sectores de la mano dura y la represión ilegal, las cuales eran interpretadas como elementos típicos de las

[50] Palermo, Vicente y Novaro, Marcos. op. cit. pág. 129

dictaduras militares, las cuales requerían una no menos típica y pasajera restricción de las libertades individuales. De esta forma, podían pasar por "desapercibidas" las matanzas que venían siendo perpetradas por el terrorismo estatal, así como el alcance del intento reorganizador del gobierno.

Como no podía ser de otra manera, tanto el consentimiento como el desconocimiento tuvieron un inapreciable valor para el régimen, los cuales, combinados con la forma que adoptó el mecanismo del terror, hicieron que este resultara llevadero para grandes porciones de la sociedad argentina. No obstante, el régimen del Proceso presentó características que lo diferenciaron de los totalitarismos clásicos del siglo XX. Por un lado, no lo acompañó la movilización típica de los fenómenos totalitarios y, por ende, tampoco una violencia de tipo horizontal u omnipresente. Por otro lado, la represión fue a la vez ejemplificadora y vergonzante, visible e invisible, oficial y clandestina. La ambigüedad con que se condujo fue cultivada por la retórica oficial del régimen.[51]

Sin embargo, la caracterización del enemigo si presentaba rasgos netamente totalitarios, tanto en lo que se refería a su intensidad como a su imprecisión: dicho enemigo era monstruoso, radicalmente ajeno a la esencia del ser nacional y estaba presente en todos los ámbitos del espacio social. A esto debe agregarse que, en su intento por mantener separado pero comunicado al ámbito de la represión del de los "buenos argentinos", las declaraciones realizadas por el régimen presentaban un perfil rayano en el cinismo esquizofrénico, el cual se evidenciaba cuando miembros del régimen manifestaban su repudio a algún "episodio vandálico atribuible a la demencia de grupos irracionales".

Las consecuencias de esto no fueron menores. Una de ellas, es la vinculada con las dificultades con las cuales se encontraban los individuos para interpretar la situación. Dado que la represión les planteaba un dilema, la amenaza de convertirse en víctima, por un lado, y los cuestionamientos a nivel de conciencia, por el otro, la pregunta acerca de qué hacer era permanente. La falta de transparencia de los hechos represivos, lejos de ofrecer certezas que orientasen para escoger una determinada línea de acción, articulaba un confuso entramado de episodios que venían presentados de una forma filtrada. De esta

[51] Ibidem. pág. 132.

manera, las personas se encontraban libradas a su propia suerte en lo referente a elegir su propia interpretación de los hechos.

Por su parte, esta modalidad represiva facilitó la aparición de una interpretación de los hechos que no hacía sino acotar la condición subversiva, a fin de disipar la incertidumbre con respecto al hecho de si el castigo podía recaer sobre la cualquiera: la tristemente célebre expresión "por algo será". La misma permitía a los individuos llegar a la conclusión de que la selectividad en la represión obedecía a algún tipo de recorte, quedando ellos afuera del brazo del terrorismo estatal. Para aquellos con un grado mínimo de politización y perspicacia, funcionó algo así como una radical incongruencia: por un lado, la tranquilidad proveniente del hecho de que, al reconocerse como no subversivos, nada les iba a pasar; y, por el otro, la sospecha de que los militares utilizaban una interpretación de la "condición subversiva" que indicaba la posibilidad de que a cualquier potencial opositor podía ocurrirle algo. Sin embargo, el resto se vio privado de tal incoherencia, en tanto se consideraban a salvo de ser tomados como subversivos, pese al discurso del gobierno o, en su defecto, en virtud del mismo.

No obstante, estas medidas que apuntaban a la consolidación del dominio simbólico del régimen, se vieron complementadas por una serie de políticas públicas lanzadas por este, y que tenían por objetivo común el desmantelamiento de las estructuras formales e informales de protección estatal que se habían creado desde la década de 1930 y afianzado definitivamente con el primer peronismo. Estas medidas pueden ser calificadas de "desincorporadotas", y alteraron en forma radical el acceso al equipamiento colectivo y la infraestructura urbana, a los servicios de salud, a las condiciones materiales y simbólicas de reproducción colectiva.

Varias de ellas, como las relativas al sector salud, fueron de una implementación harto compleja, a fin de que fueran puestas en funcionamiento con lentitud y al cabo de varios años se convirtieran en perceptibles sus efectos. Sin embargo, otras de formulación más simple, fueron ejecutadas de un modo drástico y tuvieron consecuencias inmediatas en la cotidianeidad de la vida popular: la alteración de la ley de alquileres, en 1978, y la "erradicación" de las villas de emergencia en la Capital Federal, iniciada en 1977, son ejemplos ilustrativos.

La suma de todos estos hechos, daba como resultado que, "entre la vida cotidiana de los represores y sus víctimas existiera una ajenidad que sólo era interrumpida por la

prepotencia legalizada y los relámpagos de la violencia clandestina. Tal ajenidad era, sin embargo, atrozmente cancelada en el día a día de los casi 350 centros clandestinos de detención y exterminio en los que las víctimas de mentes más despiertas descubrían que, a todo el horror previsible, se agregaba el de la necesidad de mantenerse diferentes a sus verdugos".[52]

Ahora bien, no obstante la crudeza y la violencia que caracterizaron al terrorismo estatal desatado por el Proceso, no podemos dejar de señalar cual fue el complemento, la otra cara del plan de gobierno que, no por menos visible y explícita, resulta menos siniestra y perversa y, cuyas consecuencias, llegan incluso hasta nuestros días: el plan económico de la dictadura militar.

[52] Ibidem. pág. 148.

CAPITULO IV: **EL PLAN ECONOMICO DEL PROCESO DE REORGANIZACION NACIONAL**

El presente capítulo está abocado a describir y el analizar el plan económico del gobierno militar, el cual desplazaría el eje de la actividad económica y la lógica del modelo de acumulación de capital de la actividad industrial, la cual predominó durante las dos etapas del proceso de sustitución de importaciones, a la valorización financiera.

Dicha medida implicaría otorgar una situación de privilegio para aquellas actividades de carácter especulativo en detrimento de las productivas, lo cual permitió a los grupos más concentrados de la clase dominante nacional no sólo realizar negocios fabulosos, sino también realizar un proceso de licuación de sus pasivos.

Este último elemento se convertiría, a posteriori, en una de las más funestas y pesadas cargas heredadas de la dictadura militar: el proceso de estatización de la deuda privada.

4.1 La coincidencia de proyectos entre el régimen militar y la oligarquía diversificada argentina

En el capítulo anterior dimos cuenta de la profundidad y la crudeza del proceso refundacional encarado por el gobierno militar de 1976. Al mismo tiempo, mencionamos el apoyo con que contó, producto de la coincidencia existente entre sus "diagnósticos", por parte del empresariado y de la fracción más concentrada de la clase dominante nacional.

De esta manera, y pese a que el golpe se había producido a raíz de una voluntad militar que aspiraba a actuar sobre el conjunto de la sociedad, independiente de cualquier presión que pudieran ejercer los intereses organizados, a fin de operar sobre ella una transformación radical "desde arriba", esto no impidió que recibiera la estrecha colaboración, desde antes del golpe, del sector empresario encabezado por el abogado José Alfredo Martínez de Hoz.

Este pertenecía a una de las familias más tradicionales de la Argentina, y había sido presidente del muy exclusivo y ortodoxo Consejo Empresario Argentino, a la que

vez que había desempeñado cargos ejecutivos en grandes e importantes empresas. Martínez de Hoz era un emblemático representante de aquella fracción de la clase dominante argentina que puede denominarse el establishment librecambista y liberal o, de acuerdo a la terminología empleada en el presente trabajo, la oligarquía diversificada.

Dicho grupo, notablemente reducido y minoritario a nivel político, social e intelectual, se había caracterizado por la tenacidad con la que había sostenido, contra toda amenaza y durante varias décadas, un diagnóstico que condenaba el modelo de desarrollo vigente desde los años treinta, a la vez que permanecía siempre a la expectativa de una oportunidad para poner en práctica su ideario económico. Oportunidad que interpretaban, en forma para nada errónea, que debía provenir de un régimen autoritario.

Esto fue así incluso cuando, en reiteradas ocasiones, diversos gobiernos civiles los habían colocado al frente del manejo de la política económica, desde la cual, al dogmatismo ideológico agregaban una dosis no menor de versatilidad y oportunismo político, como fue el caso de la gestión de Álvaro Alsogaray durante la presidencia de Frondizi. No obstante, en uno u otro caso, se había tratado de ensayos parciales y acotados, producto de circunstancias en exceso coyunturales y de un ambiente que no dejaba de ser hostil a la mayoría de sus ideas y de su diagnóstico.

De hecho, el propio Martínez de Hoz había pasado por esa experiencia, primero como secretario de Agricultura, y luego como fugaz ministro de Economía durante el gobierno semilegal de José María Guido. De estas experiencias extrajo sus conclusiones, no sólo en lo referente al hecho de que ni siquiera los militares le otorgaron vía libre para desarrollar sus planes, sino también con respecto a las enormes posibilidades que brinda el ejercicio de la función pública para un uso oportunista y depredador del Estado.

Esta, junto con otras experiencias similares en las que participó el sector más concentrado de la derecha liberal, representó, a pesar de los beneficios de corto plazo y reversibles que pudo obtener para sus grupos y sectores afines, un nuevo registro dentro del cúmulo de frustraciones que dicho grupo venía acumulando durante aquellos años, las cuales, en su opinión, se habían generado en el hecho de que las políticas económicas seguidas por los distintos regímenes no se apartaban de los presupuestos básicos del modelo de desarrollo de posguerra.

La atracción que ejerció su pensamiento económico, no sólo entre los sectores económicos más importantes, sino también entre las clases dominantes en general y los

militares, se fortaleció, por un lado, debido al rotundo fracaso del tercer gobierno peronista y, por el otro, como resultado de la lectura que realizaron del "simultáneo éxito económico y fracaso político del ensayo de política económica modernizadora más consistente que tuvo lugar en el marco de regímenes autoritarios desde 1955: la gestión de Adalbert Krieger Vasena de 1967 a 1969".[53]

En este sentido, la combinación entre éxito en la gestión económica y una violenta movilización, que tuvo su expresión más explosiva en el "Cordobazo", otorgaron al diagnóstico neoconservador, frente a las clases dominantes y a los grupos de intereses a ellas ligados, una fuerte legitimidad. El crecimiento económico e industrial de la década de los sesenta era visto desde una óptica diferente por parte de estos sectores: para ellos, las características de ese desarrollo lo volvían un terreno propicio al avance del populismo y el conflicto social incontrolable, como lo evidenciaban las experiencias acaecidas entre 1969 y 1973.

Producto de los mismos, la fracción más concentrada de la elite argentina fue desligando sus actividades económicas de la esfera de la producción, a la que interpretaba como un territorio politizado y socialmente peligroso, a la vez que poco redituable a nivel económico. A la vez, fue desarrollando contradicciones en lo referido a sus orientaciones, que combinaban un librecambismo proclive a utilizar el aparato del Estado como medio para captar recursos y una actitud modernizadora y favorable a la apertura al mundo, pero mezclada con un escepticismo respecto al hecho de que el progreso económico por sí solo pudiera disminuir los conflictos entre clases, lo cual los conducía a refugiarse en los mitos nacionales del esplendor del tradicionalismo preindustrial.

Por supuesto, el propio Martínez de Hoz no estuvo exento de estas contradicciones. Su pasado de corte desarrollista, producto de su militancia en la democracia cristiana, impregnó sus convicciones de un carácter heterodoxo y pragmático en lo referente a la visión de la gestión política, las cuales no tendría problema en combinar con las recetas liberales tradicionales y con aquellas de moda en los círculos académicos norteamericanos. A esto, debe agregarse la posibilidad de utilizar al sector público para fortalecer la acumulación financiera, e incluso, para dirigir un proceso de sustitución selectiva de importaciones, posibilidad que se conjugaba también con estrategias de tipo gradualistas y políticas disciplinadoras de "shock".

[53] Palermo, Vicente y Novaro, Marcos. op. cit. pág. 39.

Basado en dichas convicciones, y teniendo en cuenta la irrupción del predominio de la obtención de renta financiera en el marco de la economía mundial, asumió que el fracaso de los regímenes autoritarios previos tenía su explicación en el hecho de que habían intentado generar el disciplinamiento de los sectores populares y trabajadores impulsando la actividad industrial, por lo cual, la estrategia a seguir en esta ocasión marcaba que se debía reestablecer el orden capitalista modificando en forma drástica la estructura económica y social, a fin de aniquilar las bases materiales de la alianza defensiva entre la clase trabajadora y esa fracción de la burguesía nacional surgida al calor del peronismo, y compuesta de pequeñas y medianas empresas, para de esa manera redefinir las relaciones de dominación de forma permanente en el tiempo.[54]

Fue entonces que, en base a esta concepción, el terrorismo de Estado ejercido por la dictadura militar, tuvo, además de los propósitos mencionados en el capítulo anterior, en el plano económico el objetivo de imponer a la sociedad argentina un nuevo patrón de acumulación, cuyo núcleo principal iban a ser las políticas económicas y un nuevo comportamiento por parte del Estado.

Este, por su parte, iba a convalidar la "valorización financiera" de una parte del excedente apropiado por el capital oligopólico, mediante la adquisición de diversos activos financieros, tales como títulos, bonos, depósitos, etc. Los mismos habían sido obtenidos tanto en el mercado local como en el internacional, y en un momento en el que las tasas de interés superaban la rentabilidad de las actividades económicas productivas, y en el que el acelerado ritmo de crecimiento del endeudamiento externo posibilitaba la remisión de capital local al exterior al operar como una masa de excedente valorizable, a la vez que como recursos propios destinados a tales fines. Al mismo tiempo, se produjeron otras modificaciones, como la redefinición de la protección arancelaria de las importaciones y el desplazamiento del mercado interno como el ámbito privilegiado del proceso de acumulación del capital.

La transición desde una estructura basada en la industrialización a otra asentada en la valorización financiera provocó profundas transformaciones a todo nivel social. Fue así como cambió drásticamente la relación entre el capital y el trabajo y, como consecuencia de esto, el papel desempeñado por el Estado, el cual adoptó un inédito rol en favor del capital oligopólico. A su vez, e influenciadas por todas estas vicisitudes, se

[54] Basualdo, Eduardo. op. cit. pág. 116.

produjeron grandes transformaciones al interior de la clase dominante y sus fracciones, en especial, el redimensionamiento de la burguesía nacional, sobre todo la fracción industrial, más que el núcleo más concentrado de la misma.

La feroz redefinición sufrida por la ya de por sí desigual relación entre el capital y el trabajo sólo puede entenderse en el marco de la "revancha oligárquica" sin precedentes emprendida por la "oligarquía diversificada", la cual alojaba un profundo resentimiento para con las clases populares y trabajadoras del país. Amén de las penurias que tuvieron que atravesar estos grupos, y que mencionáramos en el capítulo previo, la valorización financiera implicaba un desplazamiento de la producción de bienes industriales como eje del proceso económico, la expansión del capital más concentrado y el desmoronamiento del nivel del salario, el cual perdió la atribución de ser un factor indispensable en el reaseguro del nivel de demanda y de realización del excedente. A partir de allí, se convirtió meramente en un costo de producción que debía ser reducido a su expresión mínima para incrementar la ganancia empresarial.[55]

Este cuadro de situación termina de definirse con la desestructuración definitiva e irreversible de la "alianza defensiva", la cual recibió su golpe de muerte con la creciente marginación experimentada por la burguesía nacional, tanto a nivel político como económico. Esta vez, no se trató meramente de un proceso de subordinación al capital extranjero, con su consiguiente desplazamiento hacia empresas con menor valor de producción y ocupación, sino de la lisa y llana expulsión de este tipo de capitales a medida que se consolidaba la lógica desindustrializadora. Teniendo en cuenta la forma en que se produjo el desplazamiento de la burguesía nacional, resulta sorprendente que, por lo menos en una primera instancia y en términos generales, se trató de una fracción que se mostró adherente al golpe de Estado.

No estaría completo el panorama de este contexto sin mencionar la parte que le tocó al capital extranjero industrial, cuyas empresas habían sido el núcleo dinámico de la segunda etapa de sustitución de importaciones. En este sentido, y al contrario de lo que podía esperarse, no fue el capital extranjero el que lideró la dominación imperialista durante el Proceso. La prueba más concreta de esto la ofrece el hecho de que la industria perdió la centralidad económica que ostentaba desde los primeros gobiernos peronistas, para caer en un proceso de profundo retroceso, el cual se caracterizó por: una pérdida de

[55] Ibidem. pág. 117.

incidencia en el valor agregado total; una marcada reducción del espectro productivo y del grado de integración local de la producción; la repatriación del capital extranjero industrial; un incremento exponencial del grado de concentración de la producción sectorial en un pequeño número de empresas y firmas. De esta manera, mientras que algunos conglomerados extranjeros optaron por la repatriación de su capital, otros privilegiaron la posibilidad de confluir con la oligarquía diversificada, incorporándose así al bloque de poder.

Como no podía ser de otra manera, esta reorientación en la política económica tuvo su correspondiente contrapartida, que, en este caso, asumió la forma de un descomunal proceso de redistribución del ingreso, el cual castigaba despiadadamente a las clases populares y trabajadoras. Esta nueva dirección se emprendió de acuerdo a las tradicionales políticas de estabilización aplicadas durante la segunda etapa de sustitución de importaciones. La profunda crisis del sector externo, producto entre otras razones, de la negativa del FMI a negociar un acuerdo con el gobierno peronista y de las tendencias inflacionarias, provocó que se optara por una fuerte devaluación del peso, la cual devino en una abrupta modificación del esquema de precios relativos.

La característica más visible de esta particular reorientación de la política económica fue, precisamente, la profundidad que presentó dicha alteración de los precios relativos en favor de la oligarquía diversificada y en detrimento de los sectores asalariados. Los exportadores de bienes-salario y los productores agropecuarios se beneficiaron no sólo por la violenta devaluación del peso, la cual superó el 80%, sino también por la reducción de las retenciones agropecuarias, al 50% del valor vigente hasta ese momento.

Producto de estas nuevas disposiciones, los asalariados vieron disminuida su participación en el PBI de una manera sin precedentes desde el surgimiento del peronismo. Estos sectores perdieron el equivalente a 13 puntos porcentuales del PBI, en un contexto en el cual este permaneció prácticamente sin modificaciones sustanciales. Como agravante, en 1977, se profundizó la distribución regresiva del ingreso, alcanzando el 25% el retroceso de la participación de los trabajadores en el producto, esto a pesar de que el PBI se había incrementado.[56]

[56] Ibidem. pág. 121.

Hacia el último año de la dictadura, la presencia de los asalariados en el PBI sería la mitad de la que registraban en 1975. En esta misma sintonía, durante todo el período de gobierno del régimen, y más allá de los altibajos, la misma se ubicaría siempre muy por debajo de la registrada durante el que fue el peor año de la segunda etapa de sustitución de importaciones, es decir, 1969.

A esto debe agregarse que, pese al hincapié que mostraban los militares en evitar la implementación de políticas que implicaran la expulsión de mano de obra, observada desde el punto de vista de la tasa de actividad vigente en mayo de 1975, la desocupación se incrementó durante el gobierno militar, presentando alteraciones en su comportamiento durante los primeros años del mismo. El evidente crecimiento de la misma se volvió ininterrumpido durante 1976 llegando, en octubre de dicho año, prácticamente a duplicar la registrada en ese mismo mes del año anterior (7.5% contra 3.8% el año anterior). Posteriormente, los valores se estabilizarían alrededor del 6.2%.[57]

La evolución de la desocupación estableció un manto de oscuridad sobre la verdadera magnitud que revistió el proceso de expulsión de mano de obra, dado que, en la medición de la misma, no se incluyó a aquellos trabajadores que, pese a estar desocupados, abandonaron la búsqueda de empleo, lo que repercutió sobre el registro de la Población Económicamente Activa, la cual se vio disminuida.

El motivo principal para explicar dicho comportamiento radica en la reducción acentuada que experimentaron los salarios, así como también en las escasas oportunidades de trabajo y el elevado costo relativo que implicaba la búsqueda del mismo. Este fenómeno, denominado efecto desaliento, resulta una de las principales evidencias de la "revancha clasista" encarada por la clase dominante argentina, situación que dio pie a un aumento de la modalidad de autoempleo, la cual resultaría un factor impulsor del aumento relativo en la ocupación registrada en el sector Servicios.

No obstante, el carácter oligárquico de la dictadura militar no solamente puede observarse en el crecimiento del desempleo, sino también en la expulsión de mano de obra industrial. En este sentido, y luego de una década de crecimiento ininterrumpido de la actividad industrial, el golpe militar representó el punto de partida de una nueva etapa caracterizada por un profundo retroceso sectorial: a pesar de los altibajos generados producto de los diferentes ensayos de política monetaria realizados, hacia el último año

[57] Ibidem. pág. 123.

del gobierno militar el volumen de producción resultaba un 17% más reducido que el registrado en 1974, a la vez que la ocupación obrera resultaba un 36.4% menor comparada con ese mismo año base, alcanzando de esta manera 27 trimestres consecutivos de caída de la ocupación.[58]

Esta situación provocó un sensible incremento en los niveles de productividad del trabajo, lo cual, a diferencia de la década anterior, no estuvo ligado a la expansión de la capacidad productiva, sino a un mayor nivel de explotación de los trabajadores, tanto por la extensión de la jornada de trabajo, así como también por una mayor intensidad del mismo, en especial, en las grandes firmas oligopólicas de capital extranjero y local.

Ahora bien, como dijimos previamente, dichas reformas obedecieron a una reorientación de la política económica, la cual, excluía ahora a la producción industrial como eje del desarrollo, dando lugar a la gestación de un nuevo patrón de acumulación alternativo a la sustitución de importaciones. Atento a esto, el próximo apartado estará dedicado a explicitar en que consistía ese nuevo patrón de acumulación: la "valorización financiera".

4.2 El nuevo patrón de acumulación: la valorización financiera

El terrorismo de Estado encarado por el régimen militar de 1976 tuvo, entre otros fines, el objetivo de dirimir el conflicto establecido entre el capital y el trabajo, el cual, desde los últimos meses del gobierno constitucional, había provocado un recrudecimiento del proceso inflacionario, conflicto que resolvió generando un marcado predomino del capital en la distribución del ingreso.

Las diversas medidas de política económica implementadas, destinadas a controlar posibles brotes inflacionarios, los cuales eran producto de la pugna corporativa entre fracciones de la clase dominante, territorio al cual se había trasladado el conflicto distributivo, se diferenciarían radicalmente de aquellas tradicionalmente aplicadas durante la segunda etapa de sustitución de importaciones. Las mismas, que presentarían ahora un carácter monetarista, "hicieron posible la contrarrevolución impulsada por un

[58] Ibidem. pág. 124.

nuevo bloque de poder conducido por la fracción diversificada de la oligarquía pampeana y el capital financiero internacional".[59]

La Reforma Financiera fue instaurada legalmente a comienzos de 1977, y corporizada en la sanción de las leyes Nº 21.495, la cual hacía referencia a la descentralización de los depósitos, y la 21.526, que establecía un nuevo régimen para las entidades financieras, disposiciones que finalmente fueron puestas en vigencia en junio de 1977. Dicha reforma resultaba el primer paso de cara a la reestructuración del sistema económico, en tanto ponía fin a tres rasgos principales del sistema financiero hasta ese momento: la nacionalización de los depósitos por parte del Banco Central, la existencia de una tasa de interés controlada por la autoridad monetaria y las escasas posibilidades de contraer obligaciones financieras con el exterior por parte de agentes pertenecientes al sector privado. De esta manera, el Estado relegaba el manejo de los principales instrumentos a través de los cuales ejercía el control de las transferencias intersectoriales durante el período previo.

No obstante, sería erróneo interpretar, a partir de estos hechos, que lo que se instalaba a partir de ese momento era un nuevo tipo de contradicción, esta vez, entre el sector financiero y la economía real. De hecho, con el nuevo patrón de acumulación, existieron fracciones empresarias, como veremos en detalle más adelante, que estando asentadas en la esfera de la producción industrial, resultaron beneficiarias directas, junto con el sector financiero local e internacional, de la valorización financiera, desplazando así a otras fracciones del capital industrial.

Al mismo tiempo, se cometería un error al creer que la Reforma Financiera implicó el inició de un juego de libre mercado despegado de la perniciosa influencia del Estado. A diferencia del modelo anterior, en el cual los mecanismos de determinación del esquema de precios relativos se utilizaban en función del proceso industrializador, con el nuevo patrón de acumulación se utilizaron para concretar la implementación de la valorización financiera. Esta vez, de lo que se trataba era de determinar la tasa de interés interna, el costo del endeudamiento del sector privado y, de esta manera, la diferencial entre las tasas de interés locales e internacionales. En este sentido, el propio endeudamiento externo del Estado, junto con la cantidad de reservas disponibles, resultaron vitales para el proceso de expansión de las fracciones dominantes.

[59] Ibidem. pág. 128.

En base a esto, resulta pertinente analizar cuales fueron las políticas de corte monetarista que se implementaron luego de la Reforma Financiera, las cuales podrían dividirse en tres etapas diferentes: la ortodoxa, que tuvo lugar entre junio de 1977 y abril de 1978, y que se sostuvo en la contracción de la base monetaria; aquella que se basó en la eliminación de las expectativas inflacionarias, y que predominó entre mayo y diciembre de 1978; y, finalmente, la que tuvo su origen en el enfoque monetario de la Balanza de Pagos, aplicada entre enero de 1979 y febrero de 1981, y en la cual convergieron la Reforma Financiera y la apertura externa en el mercado de bienes y en el de capitales. De las tres, la segunda sólo resultó un elemento transicional entre la primera y la segunda, y no un intento orgánico de establecer una política económica concreta.

La Reforma Financiera tuvo su impulso inicial durante la "tregua de precios", lo cual se evidenció en la liberación de las tasas de interés, así como también en la implementación de una política monetaria de tipo restrictivo, todo lo cual fue acompañado por una tasa de efectivo mínimo del 45% sobre los depósitos en las entidades bancarias.[60] Esto no hizo más que poner en marcha otra serie de procesos de verdadera relevancia: el incremento sistemático de la tasa de interés, la alteración de la base monetaria, el aceleramiento de la inflación y, una vez finalizada la tregua de precios, la caída del nivel de actividad.

El crecimiento disparado de la tasa de interés fue impulsado tanto por el proceso de endeudamiento encarado por las empresas industriales como por aquel llevado a cabo por el sector público. En este sentido, cabe destacar que dichas empresas experimentaron un aumento de sus niveles de actividad, el cual estuvo ligado al incremento en el stock de bienes terminados, mientras que, por su parte, el sector público, a partir de la Reforma, comenzó a operar como uno de los mayores demandantes de crédito en el sistema financiero interno.

Al mismo tiempo, el mencionado incremento de las tasas de interés provocó una reformulación en la composición de la base monetaria, dado que, por el volumen que alcanzó la diferencia entre las tasas en el mercado interno y aquellas vigentes en el mercado financiero internacional, la entrada de capitales vinculada al endeudamiento externo del sector privado creció sostenidamente.

[60] Ibidem. pág. 131.

El proceso inflacionario, por su parte, experimentó un fuerte recrudecimiento luego de finalizada la tregua de precios, el cual estaba relacionado con el comportamiento de las empresas industriales, las cuales buscaban, a través de ese mecanismo, generar una recomposición de sus precios relativos, neutralizando el impacto de las altas tasas de interés sobre sus costos operativos. Al terminar la tregua, se detuvo la expansión coyuntural del nivel de actividad económica de los meses anteriores, para dar comienzo a una prolongada etapa recesiva.

Ahora bien, el aspecto más relevante de este ensayo de política económica no tiene que ver con sus contenidos o características, sino con su abrupta y temprana finalización, sobre todo cuando se observa que las experiencias a nivel internacional sugerían que los resultados buscados en términos estructurales, como la expulsión de empresas y el control de los niveles inflacionarios, sólo podían observarse en el mediano plazo.

Dicha decisión resulta más sorprendente todavían cuando se pasa revista de los argumentos ofrecidos por el gobierno militar con respecto al abandono de dicha política, los cuales tenían que ver con la imposibilidad de controlar el crecimiento de la oferta monetaria generado por la gran entrada de capitales, más aún si se tiene en consideración que algunas de las posibles medidas para evitar este tipo de supuestas distorsiones se aplicaron en forma posterior, una vez abandonada la política inicial.

En este sentido, se han ensayado múltiples hipótesis orientadas a dar una explicación de este temprano abandono de la política monetaria. Aquellas que resultan más pasibles de brindar una explicación son las que relacionan dicho cambio de dirección con el hecho de que las subas en la tasa de interés resultaron indiscriminadas y, por lo tanto, eran pasibles de ser neutralizadas por las distintas fracciones de la clase dominante. En efecto, en tanto esta política se desarrollaba dentro de una economía cerrada, el conjunto de las firmas industriales realizó ajustes de precios, neutralizando de esta manera el incremento de la tasa de interés, o bien incursionó en el autofinanciamiento, produciendo un reajuste en los niveles de producción y de ocupación.

De esta manera, la política monetaria se mostraba incapaz de introducir modificaciones de peso que pusieran a resguardo a la más concentrada fracción de la clase dominante argentina y expulsaran a la burguesía nacional. Por el contrario, todos los grupos contaban con la misma batería de elementos, ligados a los mecanismos de

determinación del nivel de precios, situación que se presentaba propicia al advenimiento de una prolongada recesión, la cual resultaría un interrogante en todo lo referente a la reestructuración productiva que implicaría.

No obstante, las razones por las cuales se abandonó la política monetaria ortodoxa previa no resultan adecuadas para explicar porqué, más adelante, se optaría por otra política de corte similar, como lo fue la de erradicar las expectativas inflacionarias mediante la indexación, la cual pretendió lograr tal objetivo generando una progresiva reactivación, devaluando el signo monetario e incrementando el costo del endeudamiento externo del sector privado. Al poner en consideración estas medidas, se ve a las claras que la explicación no radica exclusivamente en los intereses de la fracción más concentrada de la clase dominante.

Por lo tanto, la explicación del interregno entre los dos ensayos de política económica más importantes realizados durante el Proceso reviste también razones de tipo políticas. Las mismas, están relacionadas con la presión que ejercían las cúpulas militares para abandonar dicha política, no por los efectos que generaba sobre el desempleo o la desindustrialización, sino por el posible conflicto bélico con Chile, el cual alcanzó su mayor punto de hostilidad en el último trimestre de 1978. Dado que el país no podía entrar en guerra en un clima de recesión, la misma debía ser superada tan rápido como fuese posible, razón por la cual se demoró la puesta en funcionamiento de la política económica sustentada en el Enfoque Monetario de la Balanza de Pagos hasta el primer trimestre de 1979, una vez que fue desestimado el posible conflicto bélico.

Superada esta circunstancia, en enero de 1979 se puso en marcha otra política, la cual contenía los elementos necesarios para que el equipo económico introdujera modificaciones que beneficiarían a ciertas fracciones del capital en detrimento de otras. De esta manera, dio comienzo entonces la política que tenía su fundamento en el enfoque monetario de la Balanza de Pagos, la cual "conjugaba una tasa de cambio pautada sobre la devaluación decreciente en el tiempo, con la apertura importadora (disminución de la protección arancelaria y paraarancelaria) y el libre flujo de capitales al exterior".[61]

Luego de un frustrado primer intento de reforma arancelaria realizado en 1976, que no produjo grandes modificaciones, la nueva política antiinflacionaria acarreó una nueva reforma arancelaria, que comprendía tanto una disminución de la protección como

[61] Ibidem. pág. 136.

una reducción de la dispersión entre los aranceles más bajos y los más altos. Hacia mediados de 1980, se implementó la derogación de los gravámenes paraarancelarios, los cuales, fueron asimilados, no sin reducciones, a la nueva estructura arancelaria. La desigual reestructuración que surgió de estas medidas puede explicarse también por el hecho de que, además, estuvo acompañada por una tasa de devaluación decreciente y por una política de flexibilización salarial, las cuales provocaron un pequeño aumento en la participación de los asalariados.

La particularidad de esta reforma radica en el hecho de que no estaba orientada a desarrollar una nueva política comercial, sino que formaba parte de la política de estabilización y reestructuración económica pretendida desde las clases dominantes. En este sentido, presentó un carácter profundamente desigual, tanto por sus características y sus excepciones, como por el hecho de que los miembros del equipo económico adelantaban a estos grupos la aplicación de las medidas previstas.

En relación con este tema, el adelantamiento de las modificaciones arancelarias fue un recurso aplicado en forma reiterada y bajo diversos argumentos. Por ejemplo, las reducciones arancelarias anticipadas, las cuales se respaldaban aduciendo aumentos no justificados de precios en los costos, se pusieron en funcionamiento en enero de 1979, afectando especialmente a los bienes de consumo, así como también la eliminación de aranceles para la importación de bienes de capital, fundamentada en la necesidad de incrementar la productividad del sector.

A estos fines, la libre movilidad del capital resultó un factor clave de cara a consolidar la reestructuración económica y social que venía aparejada a la nueva política económica. La existencia de una tasa de interés interna que permanentemente superaba el costo de endeudarse con el exterior, lo cual, entre otras razones, era resultado de la reevaluación del peso originada en la aplicación de la "tablita" cambiaria, dio pie a un profundo proceso de endeudamiento externo de las fracciones dominantes, que tenía como propósito la valorización de esa masa de recursos en el mercado financiero interno para, posteriormente, remitirla al exterior. De esta manera, nacían dos fenómenos inéditos en el país hasta el momento, y que se consolidarían con el correr de los años: el endeudamiento externo del sector privado y la "fuga" de capitales al exterior.[62]

[62] Ibidem. pág. 137.

No obstante haber sido liderado por la fracción más concentrada del capital en la Argentina, dicho proceso de endeudamiento externo recibió un inestimable apoyo de parte del sector público, en tanto éste aportó las divisas necesarias para garantizar la transferencia de recursos al exterior, posibilitando el equilibrio en la Balanza de Pagos. La situación inicial de este proceso, la cual registraba un balance favorable de la Balanza Comercial, junto con un nivel de reservas netas sin precedentes, se vio rápidamente modificada, producto del exponencial crecimiento de las importaciones, de la masiva fuga de capitales y de la consolidación de las posibilidades existentes de contraer deuda con el exterior. Por supuesto, la acelerada modificación del saldo comercial y del signo del nivel de reservas tuvieron una relación directa con la recesión en la actividad económica y las transformaciones productivas, modificaciones que daban lugar a un tipo de política propiciadora de la apertura a la importación de bienes y del mantenimiento de las tasas de interés elevadas en términos reales.

Fue así que amplios sectores del empresariado contrajeron compromisos a altas tasas de interés real, a la vez que perdieron la capacidad de fijar sus precios frente a la competencia de los productos importados, dado que la conjunción de la reforma arancelaria con la reevaluación del peso, junto con el leve incremento salarial, dio como resultado una pronunciada reducción de sus rentabilidades y la imposibilidad de enfrentar sus obligaciones de tipo financieras.

Al mismo tiempo, los efectos de dichas transformaciones en la economía real no se hicieron esperar en el sistema financiero. Si bien desde la instauración de la Reforma Financiera el Banco Central había liquidado más de 35 bancos, la crisis alcanzó su pico a finales de marzo de 1980, cuando se produjo el cierre del Banco de Intercambio Regional, el que fuera la entidad financiera más importante de acuerdo a su nivel de depósitos. A esto le sucedió la intervención por parte del Central a otras tres entidades bancarias de peso, como lo eran el Banco Internacional, el Banco Oddone y el Banco de los Andes.

4.3 Dinámica y funcionamiento de la valorización financiera

En 1979, el equipo económico del régimen militar parecía haber resuelto con éxito su objetivo de generar una reestructuración económica que incluyera la expulsión

de amplias franjas de la burguesía nacional, así como un número no menor de empresas de capital extranjero, junto con la expansión económica de la fracción más concentrada del capital en la Argentina, la oligarquía diversificada, de acuerdo a como dimos en llamarla, y que representaba su base social y económica, objetivo para cuya consecución fue muy importante el papel cumplido por el sector público.

La importancia adquirida en ese momento por el mecanismo de la renta financiera resultó vital para la consolidación de dicho proceso, la cual se generaba como resultado de la diferencia existente entre la tasa de interés nominal que regía en el sistema financiero local, la cual era percibida por el inversor privado, y el costo en pesos de endeudarse en el exterior, o sea, el que paga ese mismo inversor por los fondos que invierte en el sistema financiero local.[63] Por su parte, el costo de contraer deuda con el extranjero fue el resultado de la sumatoria de la tasa de interés internacional, la variación del tipo de cambio y otros costos como comisiones, impuestos, y demás.

Consolidada la nueva política, junto con la reestructuración económica que trajo aparejada, se desataron dos procesos que golpearon fuertemente dentro de la economía interna del país. El primero de ellos fue la emergencia de una fabulosa renta financiera para las fracciones más concentradas del capital nacional, las cuales se endeudaban en el exterior y valorizaban dichos recursos en el sistema financiero local. El otro proceso relevante fue la consolidación de una elevada tasa de interés interna, a la cual se debieron enfrentar las fracciones más débiles del empresariado argentino, y que, casi en forma inevitable, las colocó en una situación de insolvencia y crisis.[64]

La visible asincronía que experimentaron dichas fracciones de clase se explica a partir del hecho de que los grupos más concentrados colocaron a esas tasas los recursos obtenidos en el mercado internacional a un costo notablemente menor, mientras que el resto del empresariado tuvo que endeudarse a una tasa interna cuya incidencia no podía ser trasladada a los precios, y cuyo nivel de precios máximos estaba regulado en relación a los de los productos importados.

Como mencionáramos, no fue menor el papel del Estado en todo este proceso, involucrado en la evolución del endeudamiento externo del sector privado. De hecho, desde junio de 1977 hasta el mismo mes de 1979, la tasa de interés internacional no

[63] Ibidem. pág. 140.
[64] Ibidem. pág. 142.

superó nunca el máximo del 18% del costo total en pesos del endeudamiento externo del sector privado, por lo cual, el restante 82% correspondía a las restantes variables determinadas por la política económica. En este sentido, la política económica resultó fundamental para, en una primera instancia, garantizar una elevada renta financiera, pero conservando una situación equilibrada en las cuentas internas, y posteriormente restringirla ante el potencial conflicto bélico con Chile.

Ya a partir de junio de 1979, la influencia estatal resultó vital para la formación del costo en pesos del endeudamiento externo, al producirse el aumento sistemático de la participación de la tasa de interés internacional en los costos totales del endeudamiento producido por el incremento de las tasas, pero también por la constante reevaluación del peso. Con la aplicación de la política económica basada en el enfoque monetario de la Balanza de Pagos, la renta financiera experimentó un crecimiento exponencial, como resultado de que la tasa de interés nominal presentaba una rigidez mayor que el costo del endeudamiento externo. Durante este período, el Estado operó sobre la tasa nominal a través de tres diferentes formas.

La primera de ellas fue la tendencia a elevarla como resultado de su endeudamiento en el mercado financiero interno, el cual, a pesar de que el sector público lo sustituyó en gran medida por el endeudamiento en el mercado internacional, seguía siendo considerable, ubicándose alrededor del 22 y el 24% del crédito interno total en 1979 y 1980, respectivamente.[65] La segunda vía fue la influencia que ejerció la garantía oficial sobre los depósitos, con el propósito de mantener un elevado nivel relativo de la tasa de interés interna. Finalmente, la tercera vía fue la manera en que operaron de forma indirecta en ese mismo sentido el déficit en la Balanza Comercial y el recambio de autoridades del gobierno militar, el cual se produciría en el primer trimestre de 1981, dado que la disminución de las reservas provocaba una creciente incertidumbre con respecto al futuro de la política económica.

[65] Ibidem. pág. 144.

4.4 Preeminencia de la oligarquía diversificada durante la valorización financiera

Al echar un vistazo a la composición de las ventas de las 100 empresas industriales de mayor nivel de facturación, de acuerdo al tipo de capital de sus propietarios, podemos observar cambios que resultan significativos, no sólo por la magnitud y las características que asumieron, sino también porque guardan una notable coherencia con las diferentes políticas económicas puestas en funcionamiento por la dictadura militar en su papel de "cruzada restauradora".

En este sentido, y considerando el período en su conjunto, puede apreciarse la importancia que fue adquiriendo la oligarquía diversificada en el total de ventas de dichas cien empresas industriales con mayor nivel de facturación. Las modificaciones en la composición de esa estructura terminarían por redituarle a dicho grupo un aumento de su participación de casi siete puntos, los cuales representan un incremento del 38.2% con respecto a los niveles de 1976.

Por su parte, las empresas estatales ven disminuida su participación en un total de 8.5 puntos, equivalentes a una reducción del 55.6% en relación al año base, siendo la razón de este proceso los cambios experimentados en los precios relativos derivados de las transferencias de recursos a las fracciones más concentradas del capital, a través del mecanismo de compra-venta de las empresas estatales y, en menor medida, de la puesta en práctica del mecanismo de atraso tarifario como instrumento en la lucha contra la inflación e, inclusive, de la política de privatización periférica llevada a cabo por el equipo económico. Por último, el capital extranjero vio incrementada en forma muy leve su participación, la cual revistió un 2% con respecto al año inicial, mientras que la de la burguesía nacional también se reduce en forma moderada, en un 1.6%.

El astuto accionar de los "intelectuales orgánicos" de la clase dominante, que operaban dentro del equipo económico, les permitió corregir los errores que se habían cometido durante los dos primeros ensayos de política económica aplicados entre 1977 y 1978, y que habían encontrado el efecto contrario al buscado, es decir, habían disminuido la participación de la oligarquía diversificada y habían incrementado la del capital extranjero y la de la burguesía nacional.

Ahora bien, no obstante estos hechos resultan a todas luces ilustrativos a fin de delinear cuales fueron las direcciones asumidas por el gobierno militar en materia de política económica, resultan insuficientes, en tanto no solamente se circunscriben a la actividad económica alrededor de la cual giraba el modelo de acumulación previo, sino que además conservan inalteradas las fracciones empresarias correspondientes a dicho modelo, es decir, el de sustitución de importaciones, cuando, como vimos, la reestructuración económica del país a través de la valorización financiera había provocado serios y profundos cambios.

Indudablemente, la modificación del modelo de acumulación acarreó grandes transformaciones en el perfil de la clase dominante, las cuales incluyeron, no sólo la desaparición de firmas, a través de la transferencia, la fusión o la absorción de las mismas en beneficio de la fracción más concentrada, sino también el realineamiento de las unidades económicas, ya no sólo como mecanismo de acumulación a largo plazo, sino también en el corto y mediano plazo, provocando una marcada alteración en el comportamiento de las empresas.

Los profundos cambios acaecidos desde consumado el golpe de marzo de 1976 provocaron modificaciones estructurales que implicaban que la economía ya no sólo se orientaba en forma prioritaria hacia la concentración del capital en las firmas oligopólicas de tipo industrial, sino también hacia su centralización, lo cual agrega al análisis de la situación un nuevo factor, además del típico de la concentración. La preeminencia de la centralización del capital con la valorización financiera dio la pauta para las considerables modificaciones producidas a nivel macroeconómico, como lo fue el proceso de consolidación de los grupos económicos locales como la nueva unidad económica predominante, los cuales tenían bajo su órbita múltiples empresas, tanto oligopólicas como otras que no lo eran.

Dichas firmas se ubicaban en diferentes actividades económicas, respondiendo el conjunto de las mismas a estrategias complementarias de integración horizontal entre sí, ya fueran de carácter vertical o de diversificación de actividades. Dicha nueva unidad económica involucraba, por supuesto, a los capitales locales de la oligarquía diversificada, pero también a capitales extranjeros.

En este sentido, resulta pertinente redefinir el perfil de estas empresas. En lo que respecta al capital extranjero, encontramos, por un lado, a aquellas empresas

transnacionales diversificadas internamente y, por el otro, a aquellas que controlaban apenas unas pocas firmas subsidiarias en el país. De esta forma, podemos definir a los conglomerados extranjeros como aquellas firmas transnacionales que controlaban el capital de seis o más subsidiarias locales, y a las empresas extranjeras como aquellas que controlaban menos de seis subsidiarias en el país.[66]

Con respecto al capital local, las empresas estatales conservaron su status como categoría de análisis, al igual que la burguesía nacional. No obstante, estas últimas pasaron, desde el punto de vista de la centralización del capital, a denominarse "empresas locales independientes", dado que se trataba de firmas de importancia que actuaban por cuenta propia, sin tener vinculación a nivel de la propiedad con otras empresas de la misma u otra rama económica. Dentro de esta categoría permanecieron los integrantes de la burguesía nacional que conservaron tal perfil durante la valorización financiera, dado que los que se reestructuraron de acuerdo con los patrones del nuevo modelo de acumulación pasaron a las filas de los grupos económicos locales, donde terminaron convergiendo con la oligarquía diversificada, o con otros capitales de origen extranjero.

La caracterización de grupos económicos locales hace referencia a aquellos que detentaban la propiedad de seis o más firmas en diferentes actividades económicas. Por último, puede definirse a las asociaciones como un sexto tipo de empresa, en este caso, aquellos consorcios cuyo capital accionario era compartido por inversores que poseían el mismo o distinto origen.

Ahora bien, el hecho de que el grupo económico pasara a convertirse en la unidad económica principal no implica afirmar que los mismos se hubieren consolidado como tales en esta etapa, dado que muchos ya existían con anterioridad y, en algunos casos, con un alto grado de diversificación. Con la llegada del gobierno militar, el capital local más concentrado fue el que más incrementó su participación en detrimento del conjunto del capital extranjero. Lo que es más, la expansión de su incidencia relativa se apoyó en el comportamiento de dichos grupos económicos locales, los cuales concentraron alrededor del 70% de los 11.3 puntos de las ventas que se transfirieron del capital extranjero a las empresas locales, proceso que fue liderado por los intelectuales orgánicos de la fracción más concentrado de la clase dominante argentina.[67]

[66] Ibidem. pág. 152.
[67] Ibidem. pág. 155.

La relevancia del proceso de centralización del capital experimentado ya en el primer año de la dictadura, nos da la pauta de que la oligarquía diversificada nunca compartió durante todo el gobierno militar el control de la política económica oficial, el cual administró de forma irrestricta, determinando, de esta manera, la dirección de las transferencias directas e indirectas, vinculadas no sólo a la valorización financiera, sino también a la inversión (los regímenes de promoción industrial), las compras de bienes y servicios (sobreprecios o, como veremos más adelante, "cuasi rentas de privilegio") y el financiamiento interno (avales, garantías y crédito de los bancos oficiales), etc.

Dicho de otra manera, el mercado no resultó el instrumento central, sino el control sobre el Estado, lo cual les permitió asegurarse, en una primera instancia, una acelerada expansión en detrimento de las otras fracciones del capital y, sobre todo, de los sectores populares, dinámica que se consolidó con la instauración de la valorización financiera.

Como dijimos, con la consolidación de la valorización financiera, la industria perdió su carácter de eje del modelo de acumulación, a la vez que mostraba su incompatibilidad con la valorización financiera, dado que su tasa de rentabilidad resultaba menor que la de interés, como resultado del límite que le había impuesto la apertura comercial a los precios, y al incremento de la tasa de interés. Por lo tanto, la necesidad para el análisis de esta situación de posar la atención sobre otros sectores de actividad, no se debe solamente al desplazamiento de la industria del lugar de privilegio, sino también porque resulta la mejor forma de captar el proceso expansivo de las fracciones de clase dominantes o, en otros términos, su proceso de diversificación hacia diferentes ramas de actividad.

Producto de esta situación, la cúpula empresarial pasaba ahora a estar constituida por las 200 empresas de mayores ventas, tomando en consideración la totalidad de los sectores de actividad. En este sentido, resultaba fácilmente comprobable que aquellos capitales que más incrementaron su incidencia fueron los que presentaban un perfil diversificado dentro de la estructura económica, mientras que los otros tipos de capitales vieron considerablemente disminuida su participación, no sólo en la cantidad de empresas, sino también en el total de ventas de las 200 firmas de mayor facturación.

Fue así como los conglomerados locales y de origen extranjero fueron los únicos que experimentaron un crecimiento en su participación en la cúpula empresaria, siendo los grupos económicos locales los que recibieron la mayor parte de los incrementos en la

cantidad de firmas y en la participación de las ventas. En efecto, los mismos concentraron una cifra mayor al 80% de las empresas, un total de 25 sobre 30 firmas, y casi el 60% de las ventas, un 7.4 del 12.9%, que fueron reasignadas entre los diferentes capitales que formaban parte de la cúpula empresaria entre 1975 y 1983, mientras que los conglomerados extranjeros, por su parte, absorbieron el resto de cada uno de esas variables. El año 1981, en el cual se consolidó la valorización financiera y comenzó la parte más activa del proceso de desindustrialización, fue aquel en que se asentó definitivamente el predominio de los grupos locales sobre los conglomerados extranjeros.

Como contrapartida, las formas de propiedad que vieron disminuir su participación en la cúpula empresaria fueron las empresas de capital nacional independientes, es decir, aquellas pertenecientes a la burguesía nacional que no lograron diversificar sus actividades. Las mismas quedaron fuera de la valorización financiera, a la vez que sometidas a la competencia con los productos importados, luego de la implementación de la política basada en el enfoque monetario de la Balanza de Pagos. Dicha reducción en su participación se hizo por demás notoria en lo que se refiere a la cantidad de empresas, al representar más del 55% de las empresas que fueron reasignadas al interior de la cúpula, 17 de 30, y un número menor, aunque considerable, en las ventas, absorbiendo el 27 % luego de su reasignación, o sea, un total de 3.4 sobre un 12.8%.

Dicha diferencia en las cifras del retroceso de las empresas locales independientes fue producto de la profunda reducción de la participación de las empresas transnacionales en la facturación de las 200 empresas más grandes. Al igual que las primeras, estas empresas redujeron su participación no sólo por el menor dinamismo de sus ventas, sino también por la expulsión de firmas de este tipo de diferentes actividades económicas, descendiendo de 52 a 42 el total de empresas de esta forma de propiedad durante este período, muchas de las cuales optaron por el camino de la repatriación. Por último, las empresas estatales ven disminuida su incidencia en ambas variables, pero con una intensidad menor a la de los otros tipos de capitales, lo cual se explicaría por el atraso en el cuadro tarifario de las mismas, herramienta utilizada por el gobierno militar en el marco de la política antiinflacionaria.

El hecho de que todas estas transformaciones hayan tenido lugar en el contexto de un período de estancamiento económico da la pauta, de nuevo, de la profundidad del proceso de concentración económica y de centralización del capital que se vivió durante

la dictadura militar. Es por esto que resulta imprescindible estudiar el perfil estructural de los grupos económicos locales, no sólo en tanto estos resultaron la forma de propiedad predominante, sino también porque permite captar el proceso de ampliación de la fracción de clase dominante por excelencia, la oligarquía diversificada.

El predominio de ésta dentro de los grupos económicos locales resulta indiscutible al echar una mirada sobre sus ventas, las cuales concentraron alrededor del 60% al comenzar y al finalizar el período. Dicha participación predominante se logró sobre la base del conjunto de capitales que constituían el núcleo fuerte de esta forma de propiedad, dado que 16 de los 17 grupos económicos de este tipo se encuentran presentes durante todo el período, es decir, desde 1976 hasta 1983.

Como no podía ser de otra manera, el reverso de la moneda está representado por los grupos económicos pertenecientes a la burguesía nacional, los cuales, no sólo generaron cerca del 20% del total de las ventas en 1983, sino que además vieron reducido su número de 16 a 12 al finalizar dicho período. Fue así entonces que, durante este espacio de tiempo, un conjunto de grupos económicos locales debieron atravesar el camino de la desaparición, sobre todo, durante la crisis financiera de 1980, cuando cuatro de ellos experimentaron procesos de quiebra y disolución, como fueron los casos del Banco de Intercambio Regional, el Banco Oddone y el Banco de los Andes, los cuales, pese a estar liderados por bancos, tenían bajo su control empresas productivas de relevancia, sobre todo a nivel regional. Ejemplos estos casi tan importantes como el de Sasetru, el cual, hasta ese momento, se presentaba como el mayor grupo económico local.

Como se mencionó previamente, los grupos económicos locales no sólo no constituían una categoría de análisis que ensombreciera la presencia de la oligarquía diversificada dentro de ellos, sino que, por el contrario, estos grupos eran en realidad la oligarquía diversificada, no sólo porque ésta conformaba su núcleo fuerte y su elenco estable, sino porque también junto a esta se encontraban ahora otras fracciones del capital, como la burguesía nacional y los conglomerados extranjeros, los cuales, durante el Proceso, fueron asimilados por la fracción más concentrada del capital nacional.

Desde los puestos que ocupaban como miembros del equipo económico, los intelectuales orgánicos del bloque dominante lograron doblegar a las demás fracciones propietarias, las cuales se vieron obligadas a integrarse orgánicamente o a acatar su expulsión. Este proceso de consolidación del poder de la clase dominante durante la

valorización financiera se puso en marcha desde el comienzo mismo del gobierno militar, en una primera instancia, a través de un manejo discrecional del aparato del Estado, y luego, con la puesta en funcionamiento de la profunda reestructuración económica y social que trajo aparejada la valorización financiera.

No obstante, no todos los nuevos integrantes de la oligarquía diversificada atravesaron exitosamente el camino de la valorización financiera, dado que, mientras algunos consolidaron sus respectivas posiciones de una forma sin precedentes, otros no tuvieron más remedio que participar de nuevas incorporaciones, sustentadas en el mecanismo de transferencia y fusión de empresas.

De esta forma, la oligarquía diversificada realizó un salto cualitativo al consagrar a los grupos económicos como la nueva unidad económica predominante, la cual, prolonga su extensión hasta la actualidad, en un proceso de constante redefinición de sí misma.

A partir de la dictadura militar, ya no se encuentra constituida en forma exclusiva por la conducción terrateniente y del bloque rural en su conjunto, sino que se ve reforzada y ampliada por la inclusión de capitales que provenían de otras fracciones propietarias, sobre todo, de la actividad industrial, los cuales culminaron por asimilar la nueva forma de acumulación de excedente establecida. En este sentido, esta nueva dirección asumida por la cúpula empresarial fue liderada, junto con la colaboración del capital financiero internacional, por la oligarquía diversificada argentina.

El incremento de la incidencia de los grupos económicos locales, como no podía ser de otra manera, trajo aparejado el retraimiento de las otras formas de propiedad, las cuales vieron disminuida su participación en el total de ventas como resultado del proceso de restructuración económica, a la vez que se vieron obligadas a recorrer el camino de la transferencia de capitales a las empresas más concentradas, del cierre de sus establecimientos, o bien, de la repatriación de sus capitales al exterior.

En el caso del capital extranjero, pese a haber perdido su lugar de privilegio como la fracción más dinámica de la economía, conservó su inserción dentro de las empresas de mayor facturación. No obstante, experimentó un fenómeno similar al que vivieron las firmas de capital local, en tanto fueron los conglomerados extranjeros más diversificados los que lograron expandirse, mientras que aquellos que presentaban un perfil más especializado y específico, como las empresas transnacionales, vieron reducida su

incidencia en forma importante. De esta manera, se produjo la mayor retracción de capitales extranjeros en la producción industrial nacional desde el comienzo de la sustitución de importaciones, los cuales se vieron forzados a transferir sus activos o a repatriarlos.

Este proceso se caracterizó por evidenciar una reversión de aquellos rasgos principales que habían caracterizado a la segunda etapa de la sustitución de importaciones, en tanto el núcleo fuerte de la misma estuvo compuesto por el complejo metalmecánico, con especial énfasis en la producción automotriz. La transferencia o cierre de empresas extranjeras acaecidos entre 1973 y 1983 alcanzó el 15.6% del valor agregado de éstas en el año inicial, siendo, como mencionáramos, las empresas transnacionales menos diversificadas las que acusaron mayor impacto.[68]

Por último, las empresas locales independientes fueron aquella forma de propiedad que revistió la más pronunciada de las reducciones en la participación dentro de la cúpula empresaria. La misma, se encontró directamente ligada al fuerte proceso de expulsión que vivieron estas firmas, el cual se prolongó incluso más allá del período en cuestión.

En este sentido, cobra relevancia un aspecto que no se manifestó en el proceso de reestructuración de las empresas transnacionales, el cual consistió en la inclusión de los capitales más diversificados dentro de la categoría de grupo económico, o sea, los capitales más dinámicos pertenecientes a la burguesía nacional lograron formar parte de la oligarquía diversificada. De las 37 empresas que fueron expulsadas de la cúpula durante el período, 13 consiguieron integrar la oligarquía diversificada e insertarse como parte de los grupos económicos. Lo que es más, sus niveles de facturación representaron alrededor del 30% de las ventas de este tipo de firmas en 1975, cifra equivalente a la disminución experimentada por estas empresas en su participación en las ventas de las 200 firmas de mayor facturación en la economía argentina entre 1975 y 1983.[69]

[68] Ibidem. pág. 164.
[69] Ibidem. pág. 165.

4.5 La eterna herencia: la deuda externa privada y la incidencia de la oligarquía diversificada en el proceso de gestación de la misma

Atentos al elevado grado de concentración existente en el período analizado con respecto a todo lo referido a las operaciones financieras, podemos observar que el endeudamiento de las diez empresas con mayor monto, las cuales realizaron el 2.3% de todas las operaciones superiores a los nueve o más millones de dólares, representa alrededor del 35% del monto total considerado, registrando un nivel de deuda promedio de casi 580 millones de dólares, cifra catorce veces mayor que el monto total promedio.[70]

Si bien a partir de este punto los montos correspondientes a cada estrato empresario comienzan a disminuir en forma acelerada, se puede comprobar que las treinta empresas con mayor nivel de endeudamiento con el exterior, el cual equivalía al 6.9% del total de operaciones realizadas por las firmas integrantes de la cúpula empresaria, concentraron el 53.1% del total, llegando a una cifra de 8.828 millones de dólares, con un promedio de endeudamiento externo de 295 millones de dólares.

Ahora bien, a pesar de la importancia que reviste la elevada concentración del endeudamiento externo en el análisis, resulta insuficiente en tanto no aporta información con respecto a la participación de las distintas fracciones del capital en los compromisos de deuda asumidos. Abordando el tema desde esta perspectiva, es notablemente visible la preeminencia que detentaron 38 grupos económicos locales en la dinámica de endeudamiento del sector privado, concentrando cerca del 49% del monto total, algo más de ocho mil millones de dólares, a través de las operaciones que realizaron 180 de las empresas que controlaban. Aún más ejemplificador resulta comprobar que el endeudamiento promedio de los grupos económicos locales, algo así como 208.9 millones de dólares, equivalía a tres veces el endeudamiento promedio del total, unos 69.9 millones de dólares, y a casi cuatro veces el de los conglomerados extranjeros, el cual llegaba a unos 56.6 millones de dólares, y que constituían la forma de propiedad que les seguía en importancia, y en la cual las entidades bancarias y financieras representaban la mayoría.[71]

[70] Ibidem. pág. 168.
[71] Ibidem. pág. 169.

La coherencia existente entre el proceso de restructuración económica y el crecimiento del endeudamiento externo se vuelve fácilmente visible cuando se comprueba que las empresas locales independientes no sólo experimentaron una profunda reducción en su participación en las ventas de la cúpula empresaria, sino que además representaron apenas una muy pequeña parte del endeudamiento externo y el promedio más reducido de todos los tipos de capital y propiedad analizados.

Como complemento del análisis, es posible mencionar que la numerosa presencia de entidades financieras extranjeras en el endeudamiento privado externo argentino, así como de empresas productivas no pertenecientes a la cúpula, podría inducir a pensar que no fueron los capitales que eran líderes dentro de la economía real los que concentraron el mayor nivel de endeudamiento externo privado.

Sin embargo, observando la distribución de la deuda externa privada de acuerdo al tipo de inserción económica de los deudores externos privados, puede comprobarse que, en realidad, los capitales miembros de la cúpula empresaria acumularon cerca del 50% del total de la deuda externa privada, superando de manera amplia cualquier tipo de participación de las otras formas de capital, y registrando el mayor promedio de endeudamiento externo.

A su vez, es pertinente señalar que dicha parte mayoritaria del endeudamiento externo de los integrantes de la cúpula no estaba tampoco repartida en forma proporcionada, dado que el 80% de la deuda privada externa fue generado por los grupos económicos locales, y por su principal componente, la oligarquía diversificada. Al puntualizarse que los grupos económicos locales resultaron preeminentes, tanto en la economía real como en el endeudamiento externo privado, la marcada dispersión de la deuda contraída por las otras fracciones empresarias funcionó como un mecanismo de validación para ese endeudamiento externo centralizado en la fracción más concentrada.

4.6 El lado perverso de la eterna herencia: la estatización de la deuda privada

Si acaso le faltaba un elemento a este proceso por el cual la oligarquía diversificada argentina consolidó en forma tan contundente su influencia y su poder, a

través de la reestructuración económica y de la valorización financiera, ese fue el proceso de estatización de la deuda externa privada.

El mismo, fue producto de la conjunción de diversos instrumentos y acciones llevadas a cabo por el Banco Central, en el transcurso de varios años. La posibilidad de llevar a cabo un proceso de estatización de deuda privada comenzó a tomar forma en el marco del agotamiento de la política económica basada en el enfoque monetario de la Balanza de Pagos, y de la salida de Martínez de Hoz del Ministerio de Economía en el año 1981.

En este contexto, y previo al recambio de autoridades en la Junta Militar y la Presidencia de la Nación, donde Viola reemplazó a Videla, y en el puesto de Ministro de Economía, el cual fuera ocupado por Lorenzo Sigaut, el tipo cambio experimentó un incremento del 10%, el cual fue sucedido por otros del 30%, en abril y junio de ese mismo año, respectivamente. Fue así que, bajo esas circunstancias, y con la excusa de la escasez de reservas, que entró en funcionamiento el primer régimen de seguros de cambio, corporizado en la Comunicación "A" 31 del Banco Central (BCRA) del 5/6/81, a la cual podían acogerse todos los préstamos contraídos por el sector privado cuyos vencimientos acaecieran en julio de 1981, así como también aquellos nuevos compromisos externos contraídos a partir de ese momento. A su vez, el BCRA dispuso que los vencimientos de renovaciones y nuevos préstamos no podían ser menores a un plazo de un año y medio (540 días) y debían ser debidamente registrados en dicha entidad monetaria.[72]

A través de esta disposición, el BCRA garantizaba al deudor privado el tipo de cambio vigente al momento de establecer el respectivo compromiso, a la vez que le cobraba una "prima de garantía" que durante los seis primeros meses se estableció en el 40% del tipo de cambio fijado por la autoridad monetaria. A posteriori, se determinó en base a la evolución de los precios mayoristas deducida la inflación registrada a nivel internacional, es decir, de acuerdo a la variación de los precios mayoristas en los Estados Unidos. Dado que en la práctica la "prima de garantía" tuvo una evolución muy por debajo del tipo de cambio, el cual se incrementó de manera exponencial, superando al resto de los precios debido al atraso acumulado hasta el momento, el resultado de estas medidas se tradujo en un enorme subsidio estatal para los deudores privados externos.

[72] Ibidem. pág. 177.

No obstante el grueso de todos los compromisos contraídos correspondía a la fracción más concentrada del capital, la deuda resultante era notablemente inferior al total de recursos fugados al exterior por este grupo. En efecto, la cantidad de recursos transferida al exterior por parte de residentes locales fue equivalente al total de la deuda externa del país, lo cual resulta de sumar la deuda externa pública y la del sector privado. No se trataba de capitales endeudados con el exterior que se encontraran en dificultades financieras como resultado de la modificación del contexto macroeconómico, sino que, por el contrario, evidenciaban una situación superavitaria, la cual pretendían incrementar transfiriendo sus pasivos al Estado Nacional.

A los pocos días, el BCRA emitió otra comunicación, la "A" 33 del 10/6/81, por la cual se establecía un nuevo subsidio para los deudores externos con cargo sobre las finanzas públicas. En esta ocasión, se trato de un subsidio directo que resultaba de la diferencia entre el tipo de cambio vigente al 29 de mayo de 1981, de 3.284 pesos por dólar, y el vigente al 2 de junio del mismo año, de 4.269 pesos por dólar, que resultaba equivalente a 0.23 dólares por cada dólar de deuda externa contraída, cuyo pago se efectuaba al finalizar la renovación, y cuyo plazo no podía ser inferior al año, de acuerdo al tipo de cambio vigente.[73] De esta manera, los intelectuales orgánicos de la oligarquía diversificada lograron establecer la retroactividad del mecanismo del seguro de cambio, al cual pudieron incorporar el último registro devaluatorio, del 30%.

Durante todo el año 1981 el equipo económico fue introduciendo una serie de medidas complementarias de las anteriores, las cuales, devinieron en nuevos beneficios para los deudores privados, en detrimento del sector público. Las mismas, ampliaban los préstamos susceptibles de acogerse al régimen de seguro de cambio, al mismo tiempo que introducían modificaciones en la manera de determinar y disminuir la "prima de garantía", ajustándose a los cambios en el esquema de precios relativos.

Fue así como se desdobló el mercado cambiario, permitiéndose que el pago de los préstamos se realizara utilizando el dólar comercial y no el financiero, el cual resultaba más elevado. A posteriori, se permitió que la "prima de garantía" fuera determinada en base a la tasa de interés regulada, descontando la tasa "libor" a treinta días. De la misma manera, entre agosto y septiembre, se consolidó la posibilidad de concretar el seguro de

[73] Ibidem. pág. 178.

cambio de forma anticipada, por lo cual se abría la alternativa de que se incorporaran al régimen aquellos préstamos que se encontraban excluidos hasta el momento.

Más tarde, en noviembre y diciembre, se modificó el régimen de seguros de cambio para los préstamos a corto plazo, denominados "swaps", que contrajeran los agentes del sector privado, y que se plasmó en la Comunicación "A" 75 del 30/11/81. A través de esta medida, se garantizaba a dichas operaciones la tasa de cambio inicial, y se definía una "prima de garantía" del 5% mensual del monto considerando el tipo de cambio inicial. No obstante, este régimen nuevo fue suspendido a fines de diciembre, al producirse un nuevo de autoridades, tanto en la Presidencia, la cual fue asumida por Galtieri, como en el Ministerio de Economía, el cual pasaba a ser comandado por Roberto Alemann.

Mientras tuvo lugar el conflicto bélico con Gran Bretaña por las Islas Malvinas, y debido a los vencimientos de los préstamos contraídos el año previo, se reinstaló el régimen de seguros de cambio para ese tipo de deudas del sector privado, el cual tomó forma a través de otra comunicación del BCRA, la "A" 129 del 28/5/82. La misma consistió en un intento por alcanzar su renovación, fijándose la prima en un nivel más reducido aún que el del año anterior, el 3% del monto considerando el tipo de cambio inicial.

Luego de la guerra, y producido ya el último recambio de autoridades del gobierno militar, el nuevo Ministro de Economía, José Dagnino Pastore, y el presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, pusieron en marcha un nuevo tipo de régimen de seguros cambio, por intermedio de la Comunicación "A" 137 del BCRA, el cual, pese a no anular el anterior, representaba una alternativa para los deudores privados externos.

La nueva disposición permitía incorporar los préstamos externos contraídos por el sector privado previos al 6 de julio de 1982, incluyendo aquellos que se encontraban impagos con o sin seguro de cambio, siempre y cuando su renegociación fuese por un plazo no menor a un año y no mayor a cinco. De esta manera, se garantizaba el tipo de cambio, a la vez que la "prima de garantía" se establecía sobre la base de la inflación interna, a la cual se restaba la internacional, y se debía abonar en forma semestral. Luego, sucesivas comunicaciones del BCRA introdujeron cambios a las normativas originales, tales como la modificación de la tasa de cambio y la "prima de garantía" provenientes del régimen de seguros previo.

En agosto, y tras la asunción de Whebe como nuevo ministro de Economía, frente a la situación de crisis en la Balanza de Pagos y los inminentes vencimientos de los compromisos de deuda externa privada con seguros de cambio, se procuró poner en funcionamiento el tercer régimen de esta naturaleza, a través de una aparente modificación del régimen anterior que se plasmó en la Comunicación "A" 229 de septiembre de 1982, cuyo objetivo fue lograr una nueva postergación de este tipo de endeudamiento. Sin embargo, el nuevo régimen no resultó demasiado exitoso, dado que, para ese momento, más del 70% del total de la deuda privada externa estaba asegurada de acuerdo a alguno de los regímenes previos.

Concretado el fracaso de dicho intento, al siguiente mes se instrumentó la estatización de la deuda externa privada por intermedio de la Comunicación "A" 251 del BCRA, mediante la cual se la transformaba en deuda pública, al mismo tiempo que se reformulaba el cronograma de vencimientos de las obligaciones asumidas, sin afectar en absoluto los subsidios al sector privado. En una primera instancia, el proceso de estatización se limitó a la deuda externa privada que se había acogido a algún tipo de seguro de cambio y cuya renovación venciera el 22/10/82, mientras que las que lo hacían en fechas posteriores conservaban su carácter privado hasta finalizar los plazos estipulados.

En lo que respecta a las deudas estatizadas, los deudores privados debían cancelar sus compromisos en pesos y la "prima de garantía" en los términos estipulados, de forma que se concretara el subsidio, y el BCRA las tomaba a su cargo, abonándole al acreedor a través de un nuevo cronograma de pago mediante dos tipos de bonos: obligaciones en dólares, o "Promissory Notes", y Bonos en dólares, o BONOD. En ambos casos, la amortización se concretaba en 42 meses, mientras que su negociación estaba prohibida en el país. No obstante la estatización se llevó a cabo de acuerdo a las normas establecidas, el BCRA se mostró también dispuesto a escuchar propuestas alternativas que dieran cuenta del acuerdo entre el deudor y el acreedor, siempre que se respetara el cronograma de pagos establecido en la operatoria general.

En el caso de aquellas deudas privadas que no resultaron estatizadas, el BCRA también dispuso una nueva operatoria. Las renovaciones de los seguros de cambio se concretaron en base al tipo de cambio vigente, el cual resultaba, por supuesto, muy superior a aquel establecido en el contrato original. El Banco Central, otra vez, reconocía

que el deudor debía percibir la diferencia resultante entre ambos tipos de cambio, aunque no en efectivo, sino a través de un "bono de absorción monetaria", el cual, en realidad, resultaba un depósito indisponible a nombre del deudor que devengaba un interés del 8% anual, y tenía un período de dos años de gracia, pudiendo además ser amortizado en siete cuotas semestrales una vez emitido.

Fue así como la estatización de la deuda externa privada "perfeccionó la irreversibilidad de la licuación del endeudamiento externo de las fracciones dominantes locales, articulándose con los regímenes de seguros de cambio y convalidando los subsidios implícitos que dichas fracciones percibían con cargo a las finanzas públicas".[74]

[74] Ibidem. pág. 180-1.

CAPITULO V: **LA CONVERGENCIA ENTRE LOS MILITARES Y LA FRACCIÓN MÁS CONCENTRADA DEL CAPITAL**

Este capítulo está abocado a contestar aquella pregunta que nos plateáramos al comienzo del trabajo: si acaso existía un proceso de convergencia entre los proyectos de las Fuerzas Armadas y la oligarquía diversificada.

La argumentación contenida en su desarrollo pretende resolver tal interrogante haciendo referencia a aquellos elementos que nos permiten argumentar a favor de la existencia del mismo, y que consisten en: el perfil y el comportamiento del equipo económico del gobierno militar, la consolidación del complejo económico estatal-privado y la obtención de cuasi rentas de privilegio que la existencia del mismo les representaba a sus beneficiarios y la aparición en los circuitos de poder de un nuevo tipo de profesionales tecnocráticos, los cuales lograron, con su propia lógica, participar de las discusiones de política y de economía más relevantes del momento a partir del surgimiento y el prestigio de los centros de estudios fundados durante este período.

5.1 El equipo económico del Proceso: viejos y nuevos liberales frente a una novedosa gestión corporativa

En el capítulo anterior pudimos observar como el equipo económico del gobierno militar utilizó la política económica como aquel instrumento orientado a implementar un nuevo modelo de acumulación. La intención sobre la que descansaban las reformas llevadas a cabo por el grupo de trabajo encabezado por Martínez de Hoz era no sólo desplazar a la industria como aquella actividad alrededor de la cual giraba el proceso de acumulación de excedente, sino promover una enorme transferencia de recursos sin precedentes desde las clases populares y trabajadoras hacia la clase dominante, más específicamente, hacia la oligarquía diversificada, la que constituyó el núcleo más concentrado de la misma y el grupo que presentó el mayor nivel de dinamismo durante este proceso.

Al describir esta dinámica tuvimos la posibilidad de apreciar como la valorización financiera se convertía en la nueva esencia del proceso de acumulación de

capital, provocando el desplazamiento de la industria de su posición de privilegio. Esta ofensiva de los sectores más poderosos del capital nacional representaba, como mencionamos, la revancha oligárquica de aquel grupo de liberales cuyos proyectos e ideas venían siendo pospuestos desde tanto tiempo atrás y que ahora, en el marco de un gobierno autoritario como nunca antes había habido, veían una franca posibilidad de instrumentar dichas concepciones de política económica.

No obstante, la gestión del equipo económico no puede ser interpretada como una de tipo liberal ortodoxa en el sentido estricto del término, en tanto existieron, tanto dentro de la cúpula militar como del propio equipo económico, considerables divergencias con respecto al papel que debía desempeñar el Estado en el proceso económico.

Las mismas, operaron para impedir que fueran desmanteladas las diversas políticas de intervención estatal vigentes al momento, y que databan de comienzos de la década, como eran la política de promoción industrial, la obra pública, así como también el desarrollo de proyectos de inversión de tipo mixto, es decir, privado-estatales, en áreas especialmente determinadas.

Teniendo esto presente, es posible afirmar que el manejo de la política económica estuvo caracterizado por un elevado nivel de pragmatismo, a partir del cual se generaba una yuxtaposición de medidas que procuraban reducir el peso del aparato estatal en el proceso económico, como fue el caso de la privatización total y periférica de algunas actividades y/o empresas estatales, junto con otras que mostraban un perfil de profundo intervencionismo económico, tales como los planes de obra pública de gran envergadura, la promoción de determinadas actividades industriales y la ampliación del complejo militar-industrial liderado por Fabricaciones Militares y otras empresas estatales productoras de insumos básicos como SOMISA, YPF y Gas del Estado.[75]

En este sentido, el modelo liberal-corporativo que se constituyó durante la última dictadura militar se distinguió de los anteriores en tanto fue capaz de combinar las nuevas orientaciones de la tecnocracia liberal liderada por el ministro Martínez de Hoz con las ideas intervencionistas de varios sectores de las Fuerzas Armadas y con las viejas

[75] Castellani, Ana. "Gestión económica liberal-corporativa y transformaciones en el interior de los grandes agentes económicos de la Argentina durante la última dictadura militar". En Pucciarelli (comp.): **Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura militar**. pág. 175.

prácticas corporativas de la fracción más concentrada de la clase dominante nacional y de la tecnoburocracia estatal.

Por lo tanto, este modelo caracterizado por la superposición contradictoria de orientaciones en la gestión económica estatal, fue el que permitió la consolidación y la agudización de una característica central del régimen de acumulación de capital: la expansión de un grupo de empresas que operaban en el mercado local "en base a la obtención de altos márgenes de ganancia extraordinaria originados en la existencia de contextos privilegiados de acumulación creados y sostenidos en el accionar del aparato estatal".[76]

Como ya mencionáramos previamente en el desarrollo de este trabajo, el núcleo principal de la clase dominante argentina ha sostenido históricamente sus procesos de expansión en base a la captación de las denominadas "cuasi rentas de privilegio". Las mismas, se originan a partir de un conjunto de regulaciones estatales que permiten a las empresas desarrollar posiciones oligopólicas en sus respectivas actividades y mercados, lo cual les reditúa elevados niveles de beneficios. Al no ser un producto de la innovación tecnológica, dicho tipo de renta no resulta transitorio, por lo cual permanece en vigencia en tanto perduren las políticas económicas ejecutadas desde el Estado.

Cabe aclarar que este proceso no pone en evidencia lo que podría interpretarse como una conducta irracional por parte de la burguesía argentina, sino que, más bien al contrario, dicha búsqueda de maximización del beneficio constituye el comportamiento de cualquier clase dominante a nivel mundial. No obstante, y atendiendo al caso que nos compete, resulta importante dar cuenta de la forma en que los militares, junto con la tecnoburocracia estatal y el sector más concentrado del capital local, lograron instrumentar la perpetuación de dicho mecanismo de apropiación de renta extraordinaria.

Haciendo un repaso de la historia económica argentina, podemos observar tres principales tipos de cuasi rentas de privilegio. Las primeras, son aquellas que se derivan de la aplicación de políticas económicas de carácter general, tales como la privatización de empresas públicas, la liberación y la apertura del sistema financiero, la estatización de los pasivos privados externos, la pesificación de deudas privadas externas o la desregulación del mercado laboral. Las segundas, son aquellas ligadas a las políticas de promoción sectorial, tales como la promoción industrial, la protección de algún sector

[76] Ibidem. pág. 175.

económico en particular en un contexto de apertura comercial y el otorgamiento de subsidios directos o la realización de emprendimientos industriales con una importante promoción por parte del Estado. Finalmente, están aquellas vinculadas al funcionamiento específico del denominado complejo económico estatal-privado, tales como la concesión de obras públicas, la privatización periférica de actividades económicas realizadas por empresas estatales u organismos públicos, la compra de insumos a precios diferenciales y el acceso a los mercados de bienes y servicios demandados por el Estado.

Ahora bien, no obstante haber dado cuenta de los diferentes mecanismos de apropiación de las cuasi rentas de privilegio por parte de la clase dominante, nos queda por ver de que forma se instrumentaron dichos mecanismos de acumulación durante la última dictadura militar, los cuales estuvieron ligados, entre otras cosas, a la conformación y características de ese complejo económico estatal-privado, el cual provocó cambios de considerable importancia dentro de la cúpula empresarial, modificaciones que se encuentran ligadas al hecho de que las empresas estuvieran vinculadas o no a dicho complejo.

5.2 Consolidación del Complejo Económico Estatal-Privado

El denominado "complejo económico estatal-privado" hace referencia al "conjunto de actividades desarrolladas por empresas públicas, privadas y mixtas que operan en las ramas más dinámicas de la industria, en el sector petrolero, en la construcción de obras públicas y en algunos servicios clave como la electricidad, la provisión de gas y las comunicaciones."[77]

La realización de estas actividades, generalmente, implica la existencia de vínculos preferenciales entre el sector público y el privado, los cuales permiten sostener los procesos de expansión por parte de las empresas privadas, en base a la conformación de contextos privilegiados de acumulación: mercados de carácter oligopólico a los cuales sólo pueden acceder un número muy reducido de firmas, preferentemente de capital nacional, en los cuales existe un único demandante que fija el nivel de su demanda de acuerdo a criterios de corte político más que económico.

[77] Ibidem. pág. 194.

En dichos mercados, los proveedores apelan a mecanismos de establecimiento de precios de tipo discrecionales, los cuales se desarrollan ignorando las características de cualquier estructura de costos empresariales típica, a la vez que se encuentran protegidos de la competencia por la injerencia de diferentes recursos, tanto formales como informales, de regulación de su actividad y su producción.

No resultaba novedosa la existencia de este complejo, la cual se remonta al inicio de la industrialización sustitutiva, cuando se crearon las primeras empresas públicas, proceso en el cual las Fuerzas Armadas representaron un importante rol. Como resultado de esto, se vieron creados mercados que dependían, casi en forma exclusiva, de la demanda proveniente del sector público, como fueron los casos de las comunicaciones, la producción de material ferroviario, la construcción y la obra pública.

Si bien hacia fines de la Segunda Guerra Mundial el complejo recibió su impulso inicial, al comenzar la década del ’70, el carácter nacionalista de las políticas económicas, tanto durante la Revolución Argentina como durante la tercera presidencia de Perón, permitió a éste acrecentar su tamaño y su nivel de actividad, lo cual consistió un intento por superar las considerables trabas que evidenciaba la segunda fase del proceso de sustitución de importaciones, a la vez que generaba un importante incentivo sobre la demanda agregada.

Apoyadas en esta lógica, se implementaron diversas políticas públicas orientadas a procurar la integración de ciertas actividades industriales, las cuales eran consideradas estratégicas por razones de tipo geopolíticas y económicas, con el fin de ampliar la producción local y aumentar el volumen de sustitución de insumos importados.

De forma totalmente paradójica, y en paralelo a la puesta en práctica de las reformas liberales, el complejo experimentó un considerable impulso de parte del último gobierno militar, el cual fue el resultado de tres factores distintos pero complementarios: el primero fue el aumento de la inversión pública en obras de infraestructura y la concesión de obras por el sistema de peaje que generaron numerosas demandas sobre las grandes empresas constructoras (Sade, Techint, Impresit, Benito Roggio) y sobre las más importantes cementeras del país (Loma Negra, Corcemar, Minetti).

El segundo consistió en la puesta en marcha del proceso de privatización periférica, con especial énfasis en la actividad petrolera, el cual abrió nuevas posibilidades para la realización de negocios con un alto nivel de rentabilidad para

algunas empresas de capital nacional, proceso similar al que experimentó el sector telefónico.

Por último, el tercer factor fue la fuerte promoción industrial con la que se beneficiaron determinados sectores considerados estratégicos para el complejo militar-industrial, tales como la siderurgia, el cemento, la petroquímica y el papel, siendo las privilegiadas en este proceso, una vez más, las empresas de capital nacional, junto con unas pocas de capital extranjero. La descripción de este último factor debe complementarse mencionando la puesta en marcha de emprendimientos de carácter mixto, es decir, estatal-privados, con fuerte promoción por parte del sector público, como fue el caso del Polo Petroquímico Bahía Blanca.[78]

El mencionado crecimiento de la demanda por parte del Estado, en especial durante la gestión de Martínez de Hoz, provocó consecuencias de peso sobre la composición del gasto público, el nivel de actividad, el funcionamiento del aparato del estado y, sobre todo, en el conjunto de empresas vinculadas al complejo. En este sentido, y en relación al nivel de actividad, el papel dinamizador llevado a cabo por el sostenimiento del gasto y la inversión pública resultó mucho más relevante que en períodos anteriores y, a pesar de estar concentrado en algunas ramas específicas, el nivel de demanda estatal operó significativamente sobre muchas otras variables, generando una contradicción con respecto a los objetivos y lineamientos explícitamente anunciados con el modelo económico puesto en funcionamiento en 1976.

En relación a la estructura del gasto, los criterios adoptados por el equipo económico permitieron conciliar los objetivos de corte más ortodoxo, tales como la reducción del déficit fiscal, con otros de tipo keynesiano, como la utilización del gasto público para incentivar la demanda global. Con el fin de alcanzar estos resultados, no sólo se aumentaron los recursos corrientes, sino que además los asalariados del sector perdieron una parte considerable de sus ingresos reales, en tanto la disminución del déficit fiscal tuvo su origen en la importante caída de los gastos corrientes, sobre todo, en los salarios del personal, dando lugar a un incremento del gasto no corriente.

De la misma manera, la proliferación de actividades generadas por el complejo implicaba una transformación en los mecanismos de control administrativo del aparato estatal, el cual debía encargarse ahora de supervisar a los contratistas de obras públicas

[78] Ibidem. pág. 195-6.

que habían resultado beneficiados por la política de privatización periférica, a la vez que debía hacer frente a los nuevos núcleos de interés que se iban conformando alrededor de la realización de las distintas actividades que se desarrollaban en ese ámbito específico.

Por último, y en lo que se refiere a los grandes agentes económicos, es posible afirmar que las altas tasas de crecimiento del sector público tuvieron un impacto positivo en las actividades de una fracción en particular de la cúpula empresarial, que no son otros que los principales beneficiarios y protagonistas del nuevo modelo de acumulación, los grupos económicos locales y los conglomerados extranjeros.

Los mecanismos que permitieron la obtención de esos beneficios por parte del grupo más concentrado de la cúpula empresarial fueron: las significativas transferencias de ingresos vía precios relativos; la creación de nuevos mercados centrados en requerimientos estatales (energía nuclear, equipos militares, etc.); las licitaciones públicas de las empresas estatales, a las cuales algunos grupos económicos locales tenían su acceso garantizado en forma exclusiva; la política de stock encarada por las empresas y reparticiones públicas; y la transferencia de actividades rentables realizadas por el Estado.

De acuerdo al análisis llevado a cabo por Schvarzer, el nuevo comportamiento asumido por el Estado en este proceso consolidó la presencia de "empresas grandes, con tendencia a formar conglomerados en torno a las actividades que brinda el sector público, con precios y mercados determinados en forma externa e independientemente de sus costos (…) Empresas que nacen a partir de decisiones del sector público y que crecen en función del espacio dejado por este con un dinamismo que, objetivamente, no depende de ellas".[79] A esto, cabría agregarle las relaciones y prestaciones de larga data que el sector público mantenía con estas empresas, razón por la cual pudieron acceder con facilidad a las nuevas oportunidades de negocios que implicaban las nuevas actividades del complejo.

A fin de buscar un mayor nivel de precisión en esta descripción del proceso de consolidación del complejo económico estatal-privado, resulta pertinente aclarar que, dentro del grupo ya de por sí reducido y concentrado que conforma la cúpula empresarial, aquellas empresas y firmas que resultaron mayormente beneficiadas fueron aquellas que, perteneciendo a la misma, integraban a su vez la fracción vinculada al

[79] Schvarzer, Jorge. **La expansión económica del estado subsidiario 1976-1981**. pág. 114.

complejo y sus actividades. De esta manera, empresas tradicionales y que detentaban posiciones de liderazgo en sus respectivos mercados, tanto extranjeras como nacionales, pertenecientes a la cúpula empresarial, presentaron desempeños inferiores a aquellas firmas que se encontraban vinculadas a los negocios ofrecidos por el complejo económico estatal-privado, como fueron los casos de Esso, Shell, Fiat, Molinos, Philips y Ford.

Efectivamente, durante el período analizado, las rentabilidades promedio de las empresas que se encontraban vinculadas al complejo se ubicaron por encima de las de aquellas que no lo estaban, así como también por sobre las de la cúpula en su conjunto, situación que provocó el incremento de la distancia existente entre las rentabilidades relativas de ambas fracciones durante el período de análisis. A su vez, aumentó la participación de las empresas vinculadas en el total de la cúpula, dentro de la cual pasaron de 18 a 30, en el volumen total de ventas, pasando de un 19.9 a un 27.6% y, sobre todo, en la generación de utilidades, en las cuales pasaron de un 21.5 a un 65.9%.[80]

Al realizar un repaso de las rentabilidades y de los beneficios obtenidos por las empresas integrantes de la cúpula en el año 1983, puede observarse que las empresas vinculadas son mayoritarias en el interior del selecto grupo conformado por las firmas que obtienen las mayores masas de utilidades dentro del total de la cúpula, llegando a un total de 15 sobre las 25 primeras. Además, esas mismas firmas son las que perciben los mayores niveles de rentabilidad sobre ventas en relación a aquellas que más ganan pero que no están vinculadas al complejo, obteniendo un 29.3 contra un 13%. Estas diferencias comienzan a diluirse a medida que vamos descendiendo dentro de la cúpula: son escasas las empresas vinculadas que se ubican entre las segundas veinticinco y las restantes cincuenta, al mismo tiempo que las diferencias entre estas fracciones son mínimas en comparación con las empresas que integran la primera fracción.[81]

Al observar este nivel de disparidad en la evolución de las rentabilidades de los diferentes sectores, resulta difícil aceptar el hecho de que hayan obedecido a cuestiones de tipo exclusivamente microeconómico. Más bien, estarían dando cuenta de la estrecha relación existente en el país entre los procesos de crecimiento al interior de la cúpula empresarial y las gestiones del Estado en materia de política económica durante el

[80] Castellani, Ana. op.cit. pág. 200.
[81] Ibidem. pág. 200.

período analizado. No obstante lo señalado, no estaría completo este análisis sin una descripción más detallada de esta nueva fracción empresarial.

5.3 Las transformaciones al interior de la cúpula empresarial

Como se mencionó en el apartado anterior, las empresas integrantes de la fracción vinculada al complejo incrementaron notablemente su participación al interior de la cúpula durante el período de análisis. El mismo proceso se dio en los tres sectores clave en los cuales operaban: la industria, la construcción y la actividad petrolera, actividades que guardaban una relación directa con aquellas llevadas a cabo por el complejo, las cuales recibieron un fuerte impulso durante el gobierno militar. Esto último se hace evidente cuando observamos el ingreso de ocho nuevas empresas industriales en la conformación de la fracción vinculada.

No obstante, los datos más significativos surgen al comparar la evolución de las rentabilidades sectoriales de las fracciones durante el año 1983, dado que en todos los sectores de actividad las empresas vinculadas presentaron niveles mayores que aquellas que no lo estaban.

Efectivamente, en el caso de las firmas industriales la diferencia entre las rentabilidades promedio se incrementa de manera considerable. Las cifras arrojan, en favor de las vinculadas, un aumento del triple en sus niveles de rentabilidad, pasando de un 7.6 a un 24%. Como contrapartida, las empresas industriales no vinculadas ven disminuida su rentabilidad de un 6.5 a un 4.9%. Teniendo en cuenta estos datos, resulta llamativo el hecho de que, en el año 1976, la diferencia entre los niveles de rentabilidad de ambas fracciones del sector industrial fuera exigua, 7.6 contra un 6.5%, mientras que en 1983 llega prácticamente a duplicarse, alcanzando un 24 contra un 4.9%.[82]

A fin de complementar el análisis, los datos mencionados ameritan ser puestos en contexto. La gestión del equipo económico presentó dos etapas diferenciadas en lo que se refiere a la actividad industrial: la primera, que tuvo lugar entre 1976 y 1978, conservó la estrategia industrializadora pero con un cambio de signo, el cual implicó el desplazamiento desde la producción de bienes de consumo masivo hacia los bienes intermedios y de consumo suntuario; la segunda, acaecida entre 1979 y 1983, por el

[82] Ibidem. pág. 202.

contrario, provocó una crisis sin precedentes del sector, la cual alteró los históricos patrones de industrialización, y estuvo directamente relacionada con la puesta en funcionamiento del nuevo modelo de acumulación ligado al proceso de valorización financiera. Al comprobar que el nivel de derrumbe del producto industrial de 1979 a 1983 fue del 15%, resulta significativo que en dicho contexto las empresas vinculadas cuyas actividades correspondían al sector industrial evolucionaran de forma tan notable.

La sensación es la misma al repasar las rentabilidades promedio de las fracciones en la actividad petrolera, en la cual observamos que la tasa para las empresas vinculadas en 1983 fue de 14.9%, mientras que para las empresas que no lo estaban fue de apenas el 0.96%, dentro de un contexto más general en el cual, entre 1979 y 1983, la rentabilidad de las empresas petroleras vinculadas se cuatriplicó. Estos fabulosos incrementos de beneficios están directamente ligados al hecho de que, luego del proceso de privatización periférica de las actividades de explotación y exploración de petróleo, las firmas lograron establecer un esquema de precios muy conveniente para su producción, la cual estaba destinada a la propia empresa estatal, habiéndole esta última cedido los yacimientos y las áreas de explotación a dichos fines.

No estaría completo este semblante de las empresas de la cúpula sino analizáramos el tipo de conformación de sus propiedades. En este sentido, y evidenciando una gran sintonía con lo ocurrido en el proceso de valorización financiera, los grupos económicos locales vinculados al complejo incrementaron considerablemente sus tasas de rentabilidad durante el período, pasando de un 8.1 a un 20.3%, a lo cual hay que agregar que, al finalizar dicho período, su rentabilidad era notablemente superior a la de aquellos que no estaban vinculados, en un total de 20.3 contra un 8.2%, diferencia que creció exponencialmente sobre todo entre 1979 y 1983.[83]

Por supuesto, los conglomerados extranjeros no permanecieron ajenos a las oportunidades de negocios ofrecidas por el complejo, y aquellos que lograron vincularse vieron incrementadas sus rentabilidades en un 12.3%, contra el 2.8% de aquellos no vinculados.

Como no podía ser de otra manera, este proceso tuvo su contracara: el marcado deterioro de la participación de las empresas pertenecientes a la burguesía nacional y de

[83] Ibidem. pág. 204.

las empresas transnacionales, tanto dentro de la fracción vinculada al complejo como en el total de la cúpula empresarial y, por supuesto, de sus niveles de rentabilidad.

Por lo tanto, y en base a los datos que constan en los párrafos previos, podemos arribar a la conclusión de que los comportamientos de las firmas integrantes de la cúpula durante la última dictadura militar no estuvieron mayormente ligados al sector de actividad en el que operaban las empresas o a la forma de organización del capital de las mismas, sino más bien a la vinculación de las firmas a las actividades del complejo económico estatal-privado. En este sentido, es pertinente recordar que la mayoría de las firmas que se encontraban vinculadas lo estaban por más de una razón, es decir, pertenecían a diversos sectores de actividad, a la vez que se beneficiaban de la promoción sectorial estratégica del sector petroquímico y de la privatización periférica de la actividad petrolera, siendo estas las formas más habituales de vinculación de las empresas con el complejo.

A su vez, resultaban en verdad numerosas a nivel de conjunto las firmas dedicadas a la construcción de obras públicas de gran factura, las cuales, en muchos casos, se vieron además beneficiadas por la privatización periférica del sector petrolero, el cual generó altos niveles de demanda para este tipo de firmas.

Cabe agregar que la mayor parte de las empresas que en el año 1983 se encontraban vinculadas al complejo pertenecían a los grupos económicos locales que experimentaron los fabulosos procesos de expansión y crecimiento de los cuales diéramos cuenta en el capítulo anterior, y que los convirtieran en la nueva unidad económica hegemónica dentro de la lógica del modelo de acumulación puesto en funcionamiento por el equipo económico del gobierno militar.

En base a todo lo mencionado, y teniendo en cuenta sector de actividad y tipo de empresa, podemos realizar las siguientes afirmaciones: la mayor parte de las firmas operaban en el sector petroquímico (nueve de treinta), lo cual explica el notable nivel de expansión de dicha actividad durante el período analizado; en las ramas más dinámicas, la petroquímica y la siderúrgica, predominaron las formas de propiedad de tipo conglomerado por sobre los capitales independientes; en todas las ramas de actividad prevalecen los grupos económicos locales por sobre cualquier otra forma de organización del capital, lo cual se encuentra en estrecha consonancia con las

transformaciones al interior de la cúpula empresarial y con las actividades generadas por organismos estatales y las empresas públicas.

5.4 Tecnoburocracia estatal y liberalismo tecnocrático

Ahora bien, los profundos cambios en la estructura de la cúpula empresarial argentina, los cuales están directamente relacionados con la redefinición del perfil productivo de las empresas que la componen, la cual tiene que ver con los negocios promovidos por la consolidación de las actividades del complejo económico estatal-privado, no resultan azarosos ni arbitrarios en tanto obedecen a una lógica, tanto de tipo económica como política, que los guía y que, a la vez, nos permite delinear las características principales de los actores encargados de llevarlas a cabo.

En este sentido, y como mencionáramos previamente, el gobierno militar, atento a los fracasos evidenciados por las administraciones autoritarias previas, reconoció la complejidad de la herencia recibida, la cual abordaría con una estrategia radicalmente distinta a cualquier otra aplicada hasta el momento. A estos fines, se apoyaría "en el diagnóstico y las propuestas elaboradas por un nuevo plantel de expertos, economistas y funcionarios liberales incorporados desde el inicio a varios puestos estratégicos del elenco gubernamental".[84]

El acceso de este grupo a sectores de poder, así como también sus nuevas concepciones, parecían responder directamente a la poderosa influencia que venía acumulando, tanto en la administración de las grandes empresas oligopólicas, públicas y privadas, así como en la gestión de las instituciones del Estado, un nuevo tipo de "conglomerado burocrático", conformado por gerentes, técnicos y administradores.

Estos, a pesar de las diferencias que pudieran registrar en sus trayectorias, tanto profesionales como institucionales, se presentaban todos como portavoces de un nuevo tipo de cosmovisión social que tendia a homologarlos y a congregarlos entre sí detrás de un objetivo común: la restauración de los poderes económicos sociales e institucionales tradicionales, los cuales habían sido socavados durante el transcurso de las sucesivas

[84] Pucciarelli, Alfredo. "La patria contratista. El nuevo discurso liberal de la dictadura militar encubre una vieja práctica corporativa". En Pucciarelli, Alfredo (comp.): **Empresarios, tecnócratas y militares**. pág. 109.

etapas del modelo nacional desarrollista y de la industrialización por sustitución de importaciones.[85]

De esta manera, esa nueva comunión de ideas y conceptos, innovadora en la selección de los diferentes instrumentos políticos e institucionales a utilizar, y marcadamente conservadora en lo que respecta a sus objetivos, se estructuró alrededor de un axioma fundamental que le otorgaba sentido: la convicción de que el éxito de la gestión del equipo económico dependía del hecho de encarar los problemas y dilemas heredados del período anterior con una estrategia de transformación social radical y de carácter refundacional.

Tal como sostuviera el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) durante el año previo al golpe militar, estos nuevos grupos, en consonancia con los sectores más concentrados del empresariado nacional, habían arribado a la conclusión de que los males endémicos del sistema económico argentino, tales como la lentitud del crecimiento, el atraso relativo, el desequilibrio y la vulnerabilidad externa y, en especial, las consecuencias que esto producía en la exacerbación de la pugna distributiva, permanecerían inabordables en tanto y en cuanto las soluciones de los mismos siguieran planteándose en los mismos términos del anterior modelo nacional desarrollista, industrialista y con una marcada orientación hacia el mercado interno.

Visto desde esta lógica, el hecho de que estos problemas, que a priori se presentaban como meros obstáculos o anomalías, se convirtieran en rasgos estructurales y permanentes del funcionamiento económico del país, respondía principalmente a una causa principal: la injustificada existencia y proliferación de una serie de emprendimientos productivos que apenas podían sobrevivir en el contexto artificial de un mercado cerrado, con múltiples regulaciones y fuertemente protegido.

A ojos de los críticos liberales, el avance del proceso de industrialización sustitutiva provocaba, en forma simultánea, la evolución en sentido inverso del proceso de modernización de la producción y de acumulación de capital. En este sentido, la industria local orientada al mercado interno se presentaba cada vez más atrasada, en términos relativos, y menos eficiente, siendo la única forma de sostenerse la protección y el subsidio provenientes del sector público.

[85] Ibidem. pág. 110.

Fue por esta razón que ese Estado, que garantizaba la existencia de dicha industria en un contexto escasamente competitivo y artificial, no pudo resolver el problema de fondo mediante la aplicación de políticas públicas de fomento a la inversión y al incremento de la productividad en el sector privado. Por el contrario, el fuerte carácter intervencionista del Estado no hizo más que acentuar la tendencia predominante entre el empresariado de buscar, mediante la "colusión" con funcionarios de instituciones del sector público y de las empresas estatales, posiciones de tipo monopólicas y ganancias extraordinarias, realizando inversiones con bajo o nulo nivel de riesgo.

En base a estas concepciones, se interpretaba que las luchas distributivas, los enfrentamientos políticos y el caos institucional eran el producto de los reiterados pero inefectivos intentos realizados por el Estado para lograr articular los cuatro grandes principios del modelo desarrollista: fuerte y directa intervención por parte del sector público en la economía como productor de bienes y servicios, orientados a suplir las falencias del sector privado en este aspecto; impulso a la producción industrial privada a través de la regulación, el proteccionismo y los subsidios, a fin de aportar mayor dinamismo a los sectores proveedores del mercado interno; fomento al proceso de modernización del sector agroindustrial, con el objetivo de contribuir a modificar el estado de estancamiento en el que se encontraba; y el estimulo a la demanda interna mediante la acentuación de una política redistribucionista diseñada para aumentar la capacidad de consumo de los sectores trabajadores y populares y la movilidad social, promoviendo la mejora del salario directo e indirecto.[86]

Por lo todo mencionado, en consecuencia, la única estrategia capaz de superar el conjunto de obstáculos y dificultades de un modelo de acumulación y desarrollo definitivamente agotado residía en devolver el funcionamiento de la economía a su cauce natural, el mercado, eliminando de esta manera las formas de participación del Estado en la actividad económica y, sobre todo, en los mecanismos de regulación de la distribución del ingreso y de la inversión de capital.

Liderado por José Alfredo Martínez de Hoz, el nuevo elenco liberal, antidesarrollista y antiproteccionista que se incorporó al gobierno de la última dictadura militar, constituyó desde el principio mismo una sólida fracción interna capaz de llevar

[86] Ibidem. pág. 112.

adelante, a pesar de sus propias diferencias internas, un programa integral de reformas estructurales guiado por la lógica de la destrucción creativa, extraída de las experiencias de resolución de las grandes crisis de los países capitalistas centrales.[87]

Dichas diferencias permiten a Mariana Heredia describir al equipo económico encabezado por Martínez de Hoz como un "espacio de convivencia entre dos tipos de liberales: los tradicionales, representantes exclusivos hasta entonces de la filosofía del libre mercado, y los tecnocráticos, que luego de hacer su primera experiencia durante el gobierno de la dictadura, se consolidaron como los portavoces más dinámicos y eficientes del discurso antiestatista con la llegada de la democracia".[88]

No obstante, esas diferencias no representaron impedimento alguno para que el equipo económico se abocara de lleno a la consecución de sus tres objetivos principales: la contención de la inflación en el marco de una alteración de precios relativos de la economía; la reducción del déficit fiscal a partir de la eliminación de los distintos tipos de "subsidios estatales" (proteccionismo, política salarial, promoción desde el Estado de distintos sectores y agentes económicos); y la dotación al conjunto del sistema económico de mayores niveles de eficiencia y competitividad.

Ese espíritu renovador que atravesaba a los miembros del equipo económico puede apreciarse con toda claridad en uno de los primeros y más significativos eslóganes lanzados por el Ministro de Economía: "achicar el Estado para agrandar la nación". El mismo, no hacía más que confirmar esta nueva concepción, basada en una profunda ruptura con el modelo anterior de Estado, regulador e intervencionista.

Dicha estrategia apuntaba a lograr la reconversión tecnológica de aquellas empresas dispuestas a aumentar su productividad y eficiencia a través de la libre competencia en el mercado, así como la desaparición de aquellas firmas que no pudieran o no quisieran enfrentar los nuevos desafíos relativos a la competitividad empresaria y a la instalación de nuevos emprendimientos.

Como fuera mencionado previamente, esta nueva concepción engarzaba perfectamente con la necesidad de ir eliminando del mercado a esa multitud de pequeñas y medianas empresas que habían sido protagonistas del modelo de desarrollo previo y que, en reiteradas ocasiones, habían logrado enfrentarse con éxito a las ofensivas

[87] Ibidem. pág. 112.
[88] Heredia, Mariana. "El proceso como bisagra. Emergencia y consolidación del liberalismo tecnocrático: FIEL, FM y CEMA". En Pucciarelli, Alfredo (comp.): **Empresarios, tecnócratas y militares**. pág. 316.

encaradas desde los sectores más concentrados de la clase dominante nacional. De esta manera, daba comienzo un prolongado período de ajuste de cuentas, al cual denomináramos de "revancha oligárquica", entre la fracción más poderosa del capital nacional, la oligarquía diversificada, y aquellas fracciones subordinadas de la burguesía nacional que se encontraban en franco retroceso, acosadas y sin posibilidad de reacción frente a un proceso disolutivo que se extendería largamente luego del final del gobierno militar.

Vista desde los resultados obtenidos, dicha ofensiva eficientista afectó solamente a dicho sector, dado que no alteró el desempeño de los negocios y emprendimientos productivos llevados a cabo por el sector conocido habitualmente como la "patria contratista", al mismo tiempo que conservó intacto el modo de operación de las empresas del sector público. Por lo tanto, la cruzada renovadora no sólo careció de efectos propios, sino que contribuyó a generar el efecto contrario al buscado: un crecimiento fabuloso de los mecanismos de obtención de beneficios extraordinarios alcanzados mediante la protección y expansión de diversas formas de colusión entre las empresas privadas vinculadas al complejo económico estatal-privado y ciertos sectores de la administración pública, así como también el fortalecimiento de las conductas corporativas del conglomerado tecnoburocrático que tenía a su cargo la implementación de dichas medidas.

Por lo tanto, y a pesar de las sucesivas proclamas provenientes desde la trinchera liberal, el Estado no redujo durante el período analizado ni su nivel de gasto ni el de su inversión. El mismo permaneció garantizando el funcionamiento de ese parte del mercado privilegiada y protegida heredada del período anterior, a través del mantenimiento de una enorme demanda de obras, bienes y servicios, haciendo especial énfasis en la participación de las grandes empresas oligopólicas, tanto de capital nacional como extranjero. Este mecanismo se instrumentó mediante una serie de decisiones gubernamentales, entre las cuales se destacan el proceso de "privatización periférica" de algunas de las grandes empresas del Estado, así como la versión modificada de las políticas activas de promoción industrial y regional.

Dichas medidas fueron articuladas frente a la imposibilidad que experimentó el equipo económico para instrumentar un plan de transferencia lisa y llana de dichas actividades al sector privado, lo cual alcanzó, en cierta forma, logrando la privatización

parcial de algunas de sus actividades. En cuanto a la nueva versión de la ley de promoción industrial, los novedosos criterios adoptados, que reducían tanto los montos totales como las cuotas individuales de los subsidios, a la vez que incrementaban las exigencias de rentabilidad y "eficiencia" de los proyectos, no fueron capaces de impedir la propagación de una serie de relaciones corporativas entre funcionarios del gobierno nacional, caudillos políticos de las provincias pobres y empresas privilegiadas.

Este entramado corporativo dio lugar a un nuevo sistema distorsionado de radicación industrial precario y ficticio, compuesto en su mayoría por las denominadas "fábricas con rueditas", que resultaba un conjunto de emprendimientos simulados, desplazados artificialmente y conformados por empresas preexistentes, hacia determinadas zonas para poder incluir dentro de los regímenes de promoción la producción realizada en otras plantas instaladas en las regiones industriales tradicionales.[89]

Toda esta serie de medidas no hicieron más que expresar la nueva visión que poseía respecto de estos grandes dilemas históricos "ese nuevo conjunto de capas y sectores sociales de origen técnico-burocrático capaz de incorporarse con su propia identidad y perspectiva de análisis en el campo de creciente tensión que la prolongación del 'empate hegemónico' venía generando desde mucho tiempo atrás entre las dos fracciones principales de la clase dominante".[90]

En esencia, se trata de un grupo novedoso, relativamente heterogéneo, conformado por una serie de sectores y capas sociales diferenciadas pero articuladas de manera férrea, en el marco de una compleja red de relaciones signada por la naturaleza, a grandes rasgos, común de las funciones y actividades que desempeñaban. Su surgimiento se produce durante la segunda etapa de sustitución de importaciones y se consolida con el predominio que comienzan a ejercer en dicho proceso las grandes firmas oligopólicas, industriales y de servicios, privadas y estatales, nacionales y extranjeras.

El mismo, no poseía autonomía ni poder económico propio, a la vez que no pertenecía a la fracción más concentrada de la clase dominante propiamente dicha pero, las dadas las funciones que ejecuta, resulta capaz de enriquecer y complejizar sus perspectivas y expectativas, ejerciendo una poderosa influencia sobre la totalidad de su

[89] Pucciarelli, Alfredo. op. cit. pág. 115.
[90] Ibidem. pág. 117.

área de incidencia y operación. Los puestos que ocupaban sus miembros, ligados a la función de dirección y planificación dentro de las grandes firmas oligopólicas, en general en las empresas extranjeras, en las empresas públicas de servicios y en el creciente complejo militar industrial en expansión, les permitieron aportar una visión que resultaba verdaderamente de peso a nivel de las altas esferas de decisión de la estructura.

En este sentido, el criterio adoptado y aplicado por estos nuevos liberales en todo lo referente a aquellas medidas ligadas a la privatización periférica y a la promoción industrial no hizo más que dar cuenta del alto nivel de pragmatismo y de "cintura" política que pusieron en juego estos profesionales a fin de neutralizar el espacio de confrontación entre los dos sectores de las Fuerzas Armadas divergentes respecto de esta cuestión, a la vez que buscaban hacer más accesible la inserción de las empresas privadas en aquellas áreas estatales que por su complejidad y extensión parecían encontrarse fuera de su alcance.

En base a esto, podemos arribar a la conclusión de que una y otra vez, frente a los diversos reclamos a los que se enfrentaba, el equipo económico tuvo que apelar permanentemente a su pragmatismo y a respuestas de corto plazo, las cuales, a fin de cuentas, forjaron los resultados reales de su política económica. Apoyándose en los fracasos en los cuales incurrieron las experiencias anteriores, el grupo liderado por Martínez de Hoz procuró siempre encontrar los mecanismos para que su política durara y el equipo permaneciera en los puestos de mando del aparato estatal.

Esto puede comprobarse en el criterio de plazos que aplicó en su gestión. En el largo plazo, su estrategia apuntaba a lograr una reestructuración de la organización económica, tanto del mercado como de la sociedad, la cual debía favorecer a los sectores más concentrados del capital, los cuales resultaban su principal núcleo de apoyo. En el corto plazo, en cambio, debía preparar las condiciones que garantizaran esa continuidad en el largo plazo. Teniendo en cuenta esto, resulta pertinente, a la vez que necesario, señalar la importancia de la política, en el sentido más amplio del término, a fin de interpretar las modificaciones introducidas en el funcionamiento de la economía, sobre todo en el sector financiero, el cual fue privilegiado sistemáticamente desde el comienzo mismo del gobierno militar de 1976.[91]

[91] Schvarzer, Jorge. op. cit. pág. 113.

El hecho de que el equipo económico asumiera la representación de los intereses y objetivos del establishment permite echar por tierra aquellas posiciones que pretenden explicar las acciones llevadas a cabo por este grupo asignando a las mismas un carácter "maquiavélico". En este sentido, no hay que perder de vista el hecho de que todas ellas presentaban la característica común de procurar el reforzamiento del poder de aquellos que las tomaban. A su vez, la fuerte convicción evidenciada por los integrantes del equipo en lo referente a la superioridad de su política económica resulta un elemento de suma importancia en el análisis de sus decisiones de corto plazo.

Es esta misma convicción la que operó para considerar que los costos pagados en su aplicación, así como los inconvenientes que estos acarrearon, podían justificarse apelando a los resultados a los que se llegaría en el futuro, el cual, por lejano que fuere en el tiempo, no quitaba mérito alguno a la gestión del equipo económico. Frente a esto, dicha ideología debe haber actuado como "un factor de cohesión de sus miembros frente a la pobreza de resultados macroeconómicos y como una justificación adicional para encarar ciertas políticas que, si bien llevaban a resultados perversos, tenían una ventaja funcional para el largo plazo". [92]

Es por eso que, y en base a todo lo señalado previamente, resulta verdaderamente dificultoso evitar la tentación de pensar en este grupo como una fracción social autónoma, autosubsistente, provista de objetivos que le son propios e independientes y especializada en la articulación entre cierto tipo de poder económico y el poder político de turno a través de la complejísima red de intereses y relaciones que se teje alrededor del aparato del Estado.

Es esta misma red la que parece ir estableciendo las condiciones óptimas para hacer converger en un nuevo ámbito social a aquellos que muestran la capacidad de acumular poder político-militar (funcionarios del gobierno militar), político-electoral (dirigentes de partidos), poder social (dirigentes de corporaciones empresarias y no empresarias), poder económico (viejos y sobre todo nuevos empresarios) y poder del conocimiento, o sea, saber técnico imprescindible para llevar a cabo las nuevas políticas económicas, es decir, aquellas versiones actualizadas de la tecnocracia y la ingeniería institucional.[93]

[92] Ibidem. pág. 124.
[93] Pucciarelli, Alfredo. op. cit. pág. 126.

Ahora bien, habiendo dejado asentado el perfil de este nuevo grupo de poder, cabe preguntarse acerca del origen del mismo, así como también del proceso que los llevó a las nuevas posiciones de privilegio que detentan. A ese fin está abocado el próximo apartado de este capítulo.

5.5 Origen del nuevo liberalismo tecnocrático

Los años posteriores al derrocamiento del general Perón fueron el escenario de una profunda renovación institucional en lo referente a las ciencias económicas a nivel local, lo cual llevó a más de un estudioso de dicha época, la década de 1955-1965, a denominar a ese período histórico "la edad de oro de los economistas".

Una vez que se aceptó el hecho de que el desarrollo económico no implicaba necesariamente el curso natural que debía seguir el proceso, concepción sostenida por el liberalismo ortodoxo, o como el mero fruto de una voluntad política soberana, posición detentada por el peronismo, se crearon las condiciones propicias para la definición de ciertos problemas, así como las capacidades ligadas a su resolución. Diversas instituciones educativas y organismos de planificación fueron delimitando los contornos de un nuevo cuerpo de conocimiento y, de esta manera, fundando las bases de una disciplina novedosa.

En este contexto, y como ejemplo más representativo de un conjunto de emprendimientos e iniciativas de corte similar, en 1958 se inaugura el Centro de Investigaciones Económicas (CIE) del Instituto Torcuato Di Tella, siendo los fondos aportados a dicho efecto por una empresa familiar de capital nacional (SIAM-Di Tella), aporte al que luego se sumarían otros provenientes de subsidios de fundaciones internacionales.

La fundación del Centro no hace más que expresar el proceso de americanización de la cultura en este campo, el cual llegaba a la Argentina con una década de atraso con respecto al resto del mundo occidental, y que contribuyó a fijar un patrón de reclutamiento y estrictos requerimientos de excelencia, los cuales pretendían emular aquellos predominantes en la academia norteamericana. Fue así como la obtención de títulos de posgrado anglosajones, la publicación en revistas reconocidas académicas extranjeras, la participación en redes internacionales de producción y

aplicación de conocimiento científico se erigieron como criterios válidos para evaluar la calidad del desempeño intelectual a nivel local.

Este acercamiento a la academia norteamericana responde directamente a la férrea voluntad de las elites modernizadoras locales y a la pretensión de los Estados Unidos de desplegar una nueva estrategia diplomática, la cual debería representar la política cultural predominante en occidente en el contexto de la Guerra Fría. En este sentido, y consumado el triunfo de la Revolución Cubana, la administración de Kennedy en la presidencia de la potencia del norte promovió la conformación de la "Alianza para el Progreso", la cual permitiría, a cambio de asistencia de tipo técnica y financiera, evitar la polarización de la política en América Latina en una derecha ultra conservadora y una izquierda revolucionaria y pro-cubana.[94]

A nivel académico, dicha nueva perspectiva diplomática se combinó en forma fluida con el prestigio de las universidades norteamericanas, las cuales durante esos años se vieron profundamente favorecidas por la afluencia de numerosos intelectuales judíos europeos, y con los recursos provenientes del intercambio por parte de las agencias "filantrópicas" estadounidenses. En el caso específico de las ciencias económicas, el renombre de los claustros anglosajones comenzaba a afirmarse, para alcanzar su consolidación durante las décadas posteriores.

Durante los años sesenta, los espacios académicos argentinos experimentaron la difusión de diversas teorías y la incorporación de ciertas pautas de excelencia y productividad predominantes en los círculos profesionales del norte, las cuales eran promovidas por la creciente circulación de hombres e ideas. Efectivamente, poco después de haberse creado las nuevas licenciaturas en Economía, sus autoridades estructuraron un programa para promover los intercambios con dichos centros. La Universidad de Buenos Aires, la de Tucumán y la de Cuyo, de esta manera, suscribieron convenios que facilitaron la visita de diferentes personalidades intelectuales al país, así como la continuidad de los estudios de numerosos estudiantes en el extranjero.

El auge experimentado por las nuevas carreras, con especial énfasis en la de Economía, efectivamente, se produjo en el contexto de un clima político que reclamaba en forma progresiva, tanto de izquierda a derecha del espectro político, un cambio profundo de estructuras. En base a esto, no resulta llamativa la voluntad de estos nuevos

[94] Heredia, Mariana. op. cit. pág. 323.

profesionales de encontrar una aplicación práctica inmediata para sus conocimientos, la cual potenciaba aún más su valor si desde las instancias decisionales del Estado se podía definir el rumbo de la organización de la sociedad en su conjunto. De esta forma, una gran parte de las nuevas generaciones de economistas consideraron, hacia 1966, que su consagración residía en la posibilidad de realizar una labor utilizable para aquellos que detentaban el poder.

Fue en este marco intelectual caracterizado por una creciente valorización de las ideas, conceptos y recursos venidos del norte que los principales miembros de los futuros centros de investigación liberales se incorporaron a ellos o partieron hacia los Estados Unidos con el fin de continuar sus estudios en la materia. Como se haría evidente más adelante, el paso de estos intelectuales por las universidades norteamericanas superó largamente la transmisión de conocimientos y la obtención de un determinado título. Más que una filiación de tipo coyuntural, lo que las experiencias en el extranjero representaban era la incorporación a redes internacionales que descansaban, a su vez, sobre lazos personales y supuestos saberes compartidos.

El compartir estos espacios fluidos donde economistas matemáticos, consultores y funcionarios se entremezclaban y brindaban las discusiones más actualizadas con respecto a la implementación de políticas públicas resultaba una inversión muy redituable en términos de reputación y recursos, lo cual contrastaba con la decadencia y la pobreza intelectual de las universidades y la administración pública local.

De esta manera, apenas comenzados los años sesenta, y a través del apoyo de la Fundación Ford, diversas entidades se propusieron la creación conjunta de una fundación de estudios económicos de orientación liberal. Fue así que, el 7 de febrero de 1964 nacía FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas), la cual entraría efectivamente en funcionamiento diez meses más tarde. Para entonces, contaba con el apoyo de cuatro de las corporaciones empresarias más importantes del país: la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BC) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

De acuerdo con uno de los dirigentes empresarios fundadores, la fundación de FIEL se planteaba como objetivo permutar el sistema de "ojímetro" por procedimientos que se basaran en técnicas modernas. No obstante, este impulso inicial brindado por las corporaciones empresarias no se tradujo en un apoyo económico que pudiera

considerarse significativo. En efecto, el respaldo financiero fue provisto principalmente, como se mencionó, por la Fundación Ford (FF), la cual aportó 380.000 dólares para becas, visitas del extranjero y gastos de instalación y funcionamiento.[95]

El convenio suscripto entre ambas instituciones establecía que la contribución de la FF revestiría un carácter decreciente: durante el segundo año, dicha entidad no aportaría más que el 50%, para ser progresivamente reemplazada en este aspecto por fondos provenientes de las entidades patronales. Para 1966, se preveía que las cuatro entidades argentinas que patrocinaban la fundación de FIEL destinarían 80.000 dólares, mientras que la FF aportaría otros 20.000. El vínculo con las corporaciones empresarias y con la FF, sin embargo, no implicaba para FIEL un acuerdo de exclusividad en forma alguna. De hecho, el convenio contemplaba la posibilidad de que el centro de estudios se procurara ingresos adicionales, a través de acuerdos con terceros para la realización de estudios específicos por contrato.

Ahora bien, en la realidad concreta, aquella voluntad inicial de conformar un centro de estudios común se manifestó insuficiente para consolidar una base sólida de financiamiento por parte de las corporaciones empresarias. De forma temprana, la prevista comunión entre FIEL y las entidades patronales dio lugar a un régimen de financiamiento e investigación más complejo, en el cual la fundación reemplazaba los fondos provenientes de la FF por el patrocinio y los estudios demandados por las empresas individuales. Esta nueva modalidad de financiamiento, junto con el acercamiento que se produjo entre esas cuatro entidades empresariales, el cual se traduciría en la conformación de ACIEL (Acción Coordinadora de Instituciones Empresariales Libres), convirtió a FIEL en la consultora de las más grandes empresas privadas del país.

Echando un vistazo a las veinticinco empresas que figuran como "miembros patrocinantes" del centro en el año 1967, podemos comprobar que más de la mitad de las mismas figuraba entre las cien primeras posiciones de la cúpula empresarial en lo referente a su nivel de ventas. Cabe agregar como complemento al perfil de estas firmas patrocinantes la participación de grupos que integraban varias empresas bajo una misma dirección. La presencia, entre otras de igual relevancia, de nombres como Esso, Shell, Bunge y Born, Celulosa Argentina, Pirelli, y el Banco de Boston dan la pauta del

[95] Ibidem. pág. 337.

renombre de dichas compañías. Hacia el fin de la década de los sesenta, la vinculación de FIEL ya no se limitaba a las cúpulas empresariales nucleadas en ACIEL, sino que alcanzaba ya a casi la mitad de los miembros del Consejo Empresario Argentino (CEA).[96]

Por su parte, de la misma manera que el caso de FIEL, la creación de la Fundación Mediterránea (FM) respondió al acercamiento de un grupo de empresarios, cordobeses en este caso. En el año 1969, la Asociación de Industriales de Córdoba (ADIC) llevó a cabo un proceso de renovación de sus autoridades, el cual fue testigo del ascenso de dos nuevos dirigentes gremiales: Jaime Roca y Piero Astori. Las nuevas autoridades procuraron diferenciarse desde un principio de las precedentes, a través de un discurso que representaba un desafío directo a la concentración económica porteña, reclamando de esta forma la instrumentación de una política de descentralización regional.

Con un origen inicialmente desarrollista, los nuevos dirigentes habían arribado a la conclusión de que la geografía política era la principal razón para la pérdida de dinamismo de la industria de su provincia. Fue así como, a partir de un estudio encargado por ellos, elaborarían un diagnóstico situacional que les indicaría que determinadas particularidades de la legislación laboral local, como el sábado inglés, las tarifas del servicio de energía eléctrica, el precio de los combustibles pesados y de los fletes, resultaban profundamente discriminativos para la región mediterránea del país en relación con la del litoral.

Estas consideraciones primigenias, de carácter gremial y técnico, alentaron la configuración de una geografía impositiva, así como de un estudio acerca de la distribución nacional del gasto público y de un proyecto de Promoción Industrial. Este último, de hecho, fue presentado a las autoridades de la UIA por el delegado de la ADIC y, ante la ausencia de respuestas, la asociación cordobesa presentó su renuncia a la Unión. La persistencia mostrada por los autores del proyecto los llevó a plantear sus propuestas al gobierno peronista de 1973. No obstante, y pese a haber sido discutida en el Congreso Nacional, la propuesta no resultó exitosa debido a los obstáculos impuestos por el entonces Ministro de Economía, José Ber Gelbard, cuyo origen estaba ligado a la Confederación General Económica (CGE), y que minó la posibilidad de un acercamiento

[96] Ibidem. pág. 338.

entre el empresariado cordobés, desafiliado de la UIA, y la entidad que aglutinaba a las pequeñas y medianas empresas de capital nacional.

El relativo impacto de los proyectos de los empresarios y economistas cordobeses, combinado con la indiferencia de las autoridades nacionales, dio pie a la posibilidad de dar un sustento institucional propio a sus ideas, que revitalizara el gremialismo del interior del país. Con características menos personalizadas, las pretensiones políticas se hallaban en el núcleo mismo de creación de la fundación. La temprana experiencia de la ADIC, junto con el ejemplo que ofrecía la conformación de FIEL, reveló a los dirigentes cordobeses la conveniencia de fundar un centro de estudios afín sus ideas.

Finalmente, la idea se materializó en julio de 1977, cuando se creó la fundación que daría sustento material al Instituto de Estudios Económicos de la Realidad Argentina y Latinoamericana (IEERAL). El proyecto fue financiado por una treintena de empresas, las cuales adoptaron el compromiso de realizar un aporte inicial de 6.000 dólares cada una, pagándose a su vez una cuota mensual de 500 dólares, cifra que equivalía aproximadamente al sueldo de un cadete administrativo.[97]

El grupo originario estaba compuesto por empresas cordobesas, medianas y pequeñas, que habían surgido al calor de la segunda etapa de sustitución de importaciones, entre las cuales se puede destacar a Arcor o a la Aceitera General Dehesa, las cuales mostraban un futuro prometedor. Todas estas eran firmas independientes, de capital nacional, y mostraban un perfil en el cual predominaban la producción de alimentos, materiales para la construcción y la metalurgia. Al año de existencia de la fundación, el grupo patrocinante se había duplicado, gracias a la admisión de bancos, financieras y compañías de seguros.

No obstante este proceso de continuo crecimiento, el verdadero salto de calidad efectuado por la FM se produjo luego del paso de Domingo Cavallo por la presidencia del Banco Central. En el año 1982 se concreta la fundación de la filial Buenos Aires de la Fundación, de la cual participaron un conjunto de empresarios que se diferenciaban notablemente del núcleo cordobés original. En efecto, la nueva sede recibiría el apoyo de firmas de gran relevancia, como Bagley, Bagó, Bridas, Gatic, Ledesma y Massuh. Producidas estas incorporaciones, la FM experimentó un alivio en sus restricciones

[97] Ibidem. pág. 342.

presupuestarias, las cuales estaban directamente ligadas a la difícil situación por la que atravesaban las pequeñas y medianas empresas fundadoras.

Al poco tiempo, la Fundación adquiriría un carácter nacional, mediante la instalación de sucursales regionales en diversos puntos del país. Hacia 1984, el perfil de la fundación se había modificado radicalmente: de un total de ciento nueve empresas, treinta y ocho eran firmas líderes a nivel nacional, doce pertenecían a grandes grupos económicos, y una era una empresa transnacional.

Al igual que en el caso de los dos otros centros, la fundación del CEMA (Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina) es la expresión del encuentro entre economistas con formación en el extranjero y empresarios individuales. Hacia fines de los años setenta, Pedro Pou persuadió a un pariente suyo, Nicolás Catena, acerca de la posibilidad de invertir en la creación de un centro de investigaciones económicas. A esos efectos se creó la fundación País, iniciativa de la cual participaron también grandes empresas del sector primario, junto con entidades bancarias.

Aunque resulte dificultoso determinar con precisión el total de empresas que acompañaron la fundación del centro, las cuales se encuentran alrededor de la docena, los fundadores del CEMA coinciden en destacar la participación de Catena, Bunge y Born, Cargill, el Banco de Boston y el Citibank.

Pou, que había cursado estudios de posgrado en la Universidad de Chicago, tomó contacto con sus antiguos compañeros de la entidad norteamericana y los invitó a formar parte del proyecto. De esta manera, Roque Fernández y Carlos Rodríguez se integraron y fueron contratados por el centro. Inicialmente, el aporte realizado por los empresarios no sólo se destinó a dar impulso a la fundación del CEMA y a repatriar al grupo que supo ser su iniciador, sino también a crear una carrera de posgrado en Economía, la cual ofrecería becas de dedicación exclusiva a sus estudiantes.

Con una estructura curricular de cuatro cuatrimestres, los cuales se centraban en teoría de precios, macroeconomía, econometría y comercio internacional, el posgrado era dictado por un cuerpo de ocho profesores, todos los cuales detentaban títulos de posgrado en los Estados Unidos, y de los cuales seis se habían formado en Chicago. La convocatoria, originalmente lanzada en abril de 1979, fue vuelta a abrir al año siguiente.

El carácter radicalmente liberal de los economistas del CEMA se convirtió en un factor que les significó no sólo un nivel considerable de críticas, sino que además

perjudico la posibilidad de incrementar el número de sus patrocinantes. A partir de esto, surgió la idea de convertir al centro en una institución de educación superior que ofreciera carreras de maestría en Economía y administración de empresas. Los programas de dedicación full-time, con becas para los estudiantes, fueron reemplazados por propuestas de otra índole, las cuales procuraban adaptar sus horarios, así como la propia sede de la institución, a las necesidades de los alumnos que, con sus cuotas, contribuían ahora a mantener el funcionamiento del centro. En efecto, a principios de los ochenta, el matriculado se convirtió en el principal mecanismo de sustento de la entidad.

Teniendo en cuenta el perfil de tipo más academicista de los economistas del CEMA, y la tendencia de la producción de sus fundadores a presentar un carácter altamente formalizado y "matematizado", las publicaciones del centro tienen rasgos más técnicos y crípticos que las de sus pares de las otras instituciones. Su producción fue siendo editada bajo el formato de "Documentos de trabajo", los cuales siguen una serie ininterrumpida desde fines de los años setenta hasta nuestros días. Esta literatura de corte específico era acompañada por la actividad pedagógica de sus autores, los cuales participaban con asiduidad de foros empresarios y medios de prensa.

Ahora bien, la actividad intelectual y profesional de estos nuevos economistas liberales no se iba a restringir a apariciones en contextos académicos y científicos, así como tampoco a cuestiones ligadas simplemente con la consultoría a nivel empresarial. Los mismos participarían de las discusiones más importantes que se libraron durante el gobierno militar en todo lo referente a la política económica, en las cuales sus conocimientos prácticos se verían altamente apreciados.

La participación de estos profesionales llegaría, incluso, a los más altos niveles de la administración económica del Estado, alcanzando, en ocasiones, a formar parte inclusive del equipo económico de la última dictadura. A fin de ser más ilustrativos con respecto a este tema, a continuación se presenta un cuadro en el que se detalla, en forma precisa, cuales fueron los miembros de los centros de investigación económica que participaron del gabinete económico durante el Proceso, así como también cuales fueron sus funciones y de que institución provenían.

5.6 Miembros del gabinete económico pertenecientes a las principales "fundaciones de investigación económica" entre 1976 y 1983

Miembro	Cargo	Fundación de pertenencia y puesto ocupado en la misma
José A. Martínez de Hoz	Ministro de Economía entre 1976 y 1981	FIEL (vicepresidente hasta 1976)
Juan Alemann	Secretario de Hacienda durante la gestión de Martínez de Hoz y Ministro de Economía en 1981-1982	FIEL (asesor general)
José M. Dagnino Pastore	Representante financiero de Argentina en Europa durante la gestión de Martínez de Hoz y Ministro de Economía en 1982	FIEL (primer director y asesor)
Luis Martínez García	Jefe del Gabinete de Asesores durante la gestión de Martínez de Hoz	FIEL (economista asociado)
Armando Ribas	Asesor del Gabinete Económico durante la gestión de Martínez de Hoz	FIEL (economista asociado)
Carlos Brignone	Asesor del Gabinete Económico durante la gestión de Martínez de Hoz	FIEL (economista asociado)
Manuel Solanet	Secretario Técnico del Instituto Nacional de Planificación Económica Secretario de Hacienda de la Nación	FIEL (consejero académico)
Carlos Rodriguez	Asesor del Gabinete Económico durante la gestión de Martínez de Hoz	CEMA (fundador)
Roque Fernández	Asesor del Gabinete Económico durante la gestión de Martínez de Hoz	CEMA (fundador)
Domingo Cavallo	Asesor Externo durante la gestión de Sigaut y Director del Banco Central en 1982	FM (director)
Aldo Dadone	Director del BCRA en 1982	FM (investigador asociado)
Humberto Petrei	Director del BCRA en 1982	FM (investigador asociado)
José Castro Garaayzábal	Asesor del BCRA en 1982	FM (investigador)
Rafael Conejero	Asesor del BCRA en 1982	FM (investigador)
Gustavo Parino	Asesor del BCRA en 1982	FM (investigador)

Fuente: Castellani, Ana. "Estado, empresas y empresarios. La relación entre intervención económica estatal, difusión de ámbitos privilegiados de acumulación y desempeño de las grandes firmas privadas. Argentina 1966-1989". Buenos Aires. Tesis Doctoral, UBA, mimeo, Capítulo VI. pág. 206.

CONCLUSIONES

Este trabajo se planteó como hipótesis de desarrollo analizar si, efectivamente, existió un proceso de convergencia entre los proyectos de la fracción más concentrada de la clase dominante nacional, a la cual dimos en llamar la "oligarquía diversificada", y el proyecto refundacional encarado por el conjunto de las Fuerzas Armadas, las cuales ejecutaron el golpe militar del 24 de marzo de 1976, el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.

A fin de proveer de un contexto histórico que pudiera orientar la comprensión de dicho suceso histórico, señalamos la dinámica política que se inauguró con el golpe militar de 1930, y que implicó que, a partir de ese año, y hasta la finalización del "Proceso" en 1983, se evidenciara en lo referente al manejo y el control del aparato del Estado una permanente sucesión de gobiernos civiles y militares, la cual consagró al golpe de Estado institucional como un mecanismo legítimo de recambio de autoridades.

Dichos golpes, mostraban la particularidad de no ser acciones ejecutadas de manera exclusiva por iniciativa de las Fuerzas Armadas, en especial por el Ejército, que constituía su fuerza más antigua y organizada, sino que estuvieron atravesados por complicadas y cada vez más complejas relaciones de intereses y proyectos que incluían, además de a los militares, a los sectores más poderosos e influyentes a nivel económico y social, los cuales procuraban acercarse a las organizaciones castrenses a fin de imponer sus proyectos o intereses particulares.

No obstante, sería incorrecto afirmar que esta particular lógica política y social convertía a las Fuerzas Armadas en el "brazo armado" de los intereses corporativos o de clase de los grupos más concentrados y poderosos de la clase dominante nacional. En este sentido, los militares siempre esgrimieron intereses propios como organización, los cuales provocaron que dichas alianzas entre grupos civiles y militares revistieran siempre un carácter espurio e inestable, las cuales tenían como consecuencia más perversa para la vida política y social de la nación la generación de un permanente y estructural estado de crisis e incertidumbre.

Ahora bien, en el caso específico del Proceso de Reorganización Nacional, la mencionada colusión entre los proyectos de las Fuerzas Armadas y la fracción más

concentrada del capital argentino se produjo como resultado de la coincidencia de diagnósticos que existió entre ambos grupos con respecto a que debía hacerse a fin de devolver el orden, la certidumbre y la tranquilidad a la nación.

En el caso de las Fuerzas Armadas, los militares procesistas estaban convencidos de que la única forma de reencausar a la Argentina era a través de un proceso de reforma social y política ejecutado "desde arriba", en tanto la sociedad en su conjunto estaba "enferma", por lo cual, las soluciones no podían provenir de ningún sector de la sociedad civil, ni mucho menos, de los partidos políticos, los cuales se hallaban en una situación de profundo descrédito, y a los cuales se acusaba, en gran medida, de ser los responsables de la crisis política por la que atravesaba el país.

Por su parte, la fracción más concentrada de la clase dominante argentina, a la cual llamamos "oligarquía diversificada", se planteaba como principal objetivo recuperar los mecanismos de control de la política económica, luego de sucesivas décadas de frustraciones en ese sentido, las cuales eran producto, ya sea de los fracasos que habían experimentado algunos de sus miembros cuando tuvieron a su cargo dicha tarea o, en un nivel más general, por el propio modelo de acumulación adoptado desde el triunfo del peronismo en 1946, el cual había provocado no sólo que el eje del proceso de apropiación de excedente se desplazara desde la actividad agropecuaria hacia la industrial, sino que además había incorporado a la vida pública a los sectores que hasta ese momento permanecían sin voz: las clases populares y trabajadoras.

En este sentido, el proceso industrializador iniciado durante los dos primeros gobiernos de Perón había dado lugar a la conformación de una "alianza defensiva" entre dichas clases y aquellos sectores menos relevantes de la burguesía nacional, cuyo núcleo principal estaba constituido por una enorme cantidad de pequeñas y medianas empresas nacidas al calor de dicho proceso económico.

Por lo tanto, la intención del grupo de poder más influyente del país de controlar los lineamientos económicos radicaba, no sólo en el hecho de implementar aquellas doctrinas que creían las verdaderamente superadoras, las cuales estaban tradicionalmente ligadas al liberalismo, sino también en derribar dicha alianza defensiva y poder llevar a cabo su "revancha oligárquica", la cual se proponía ajustar cuentas con los integrantes de la burguesía nacional y, en especial, con los sectores trabajadores y populares que durante tanto tiempo habían logrado conjurar los distintos embates

provenientes desde los sectores más poderosos de la Argentina.

Teniendo en cuenta este cuadro de situación, la mencionada coincidencia de diagnósticos fue la que posibilitó la posterior convergencia de los proyectos de ambos grupos. Por parte de los militares, estos comprendieron que, a nivel económico, el fuerte y profundo de disciplinamiento propuesto desde la trinchera liberal, sector que había logrado recuperar la imagen de sus propuestas de política económica, permitiría controlar y reencausar a una clase trabajadora y a un sindicalismo que habían logrado acumular una gran capacidad de presión y de influencia sobre los distintos gobiernos anteriores, inclusive aquellos de tipo militar que habían pretendido ejercer un estricto control de la vida política, económica y social.

Por el lado de la clase dominante, el mérito de sus integrantes más destacados consistió en haber logrado convencer a las cúpulas militares (aunque no a todas) de que a fin de disciplinar a esa sociedad enferma y corrompida, no alcanzaba con someterla a un profundo proceso de disciplinamiento y control, sino que había que modificar también la razón misma que sustentaba su funcionamiento: el modelo de acumulación basado en la sustitución de importaciones.

Fue en base a este diagnóstico que podemos apreciar, de acuerdo a lo ocurrido, como la "receta" se aplicó de manera separada. Por un lado, los "grupos de tareas" y demás agrupaciones militares llevaron a cabo una perversa y feroz política de represión, tanto legal como ilegal, ejecutada desde el mismo aparato del Estado, en una escala absolutamente sin precedentes. El terrorismo estatal se ejecutó de manera ampliada, alcanzando no sólo a las organizaciones guerrilleras y otros grupos armados, sino también a todo aquel que pudiera considerarse "subversivo", término que se utilizó con un carácter altamente amplificado, y que les permitió a los encargados de la represión transpolar la "amenaza subversiva" a otros territorios, como el campo educativo, el ámbito laboral e incluso el religioso, caracterizando a los subversivos como enemigos de la Patria y del modo de vida "occidental y cristiano".

En este sentido, la novedad que presentaba la modalidad represiva de la dictadura procesista radicaba, no sólo en el alcance y magnitud de la represión (la cual además presentó un carácter verdaderamente cruento), sino también en el método de las "desapariciones", el cual consistía en la captura del sujeto subversivo, para su posterior traslado a un centro clandestino de detención, donde era sometido a todo tipo de torturas

y, finalmente, se lo asesinaba.

De esta manera, los militares evitaban cualquier tipo de investigación al respecto, así como también lograban eludir los reclamos de familiares y amigos de las víctimas que los buscaban. No obstante, no era esta la única finalidad que perseguía esta metodología represiva: el miedo a ser el próximo provocaba el silencio y la inacción por parte de cualquiera que tuviera la intención de manifestarse en contra del régimen.

Cabe mencionar como complemento de esta situación de parálisis que experimentaba la sociedad civil, la "virtud" que tuvieron los militares de consagrarse como los únicos capaces de devolver al país a su cauce logrando, al mismo tiempo, hacer que la mayoría de los grupos sociales adoptaran un enorme grado de responsabilidad por el estado de crisis e inestabilidad por el que atravesaba la nación, llegando a sentir incluso que los castigos que emprendieron los militares a través de la represión ejecutada desde el aparato del Estado estaba justificados dado el estado de corrupción en el que se hallaba el sistema político y el desorden en el cual estaba la sociedad civil, y que había permitido, en última instancia, que sus representantes políticos pudieran haber alcanzado tal nivel de descrédito.

En este sentido, esta culpa asumida desde la sociedad civil fue la que terminó por justificar, por lo menos durante los años iniciales del gobierno militar, la represión ampliada y el terrorismo de Estado, condescendencia que se vio plasmada en frases que pasaron a formar parte del lado más triste y perverso del imaginario colectivo nacional, como el ya clásico "por algo será", cuando se presenciaba la detención pública de alguien, actitud que respondía a la necesidad de diferenciarse de aquellos que eran devorados por el accionar de la maquinaria represiva.

Ahora bien, como dijimos, la "receta" refundacional del Proceso tuvo dos aspectos diferenciados. Es por eso que al funcionamiento de la lógica represiva debemos agregar lo que fueron las modificaciones del modelo de acumulación, el cual vio alterado su mecanismo principal de apropiación de excedente hasta ese momento, la actividad industrial, por un desplazamiento hacia las actividades especulativas y que no se encontraban relacionadas con inversiones productivas, dinámica a la cual dimos en llamar de "valorización financiera".

La misma consistió en desplazar el eje de acumulación de capital hacia aquellas actividades relacionadas con la especulación financiera, debido al manejo que

realizaban los miembros del equipo económico con respecto a su política económica y los mecanismos de control de las tasas de cambio y, sobre todo, de interés. Este cambio de orientación permitió a los miembros de la oligarquía diversificada realizar negocios fabulosos, colocando en el mercado bursátil local los fondos que adquirían en el exterior a una tasa de interés infinitamente más baja que aquella existente en el plano nacional.

Esta lógica les permitió trasladar el grueso de sus inversiones desde las actividades industriales hacia aquellas de carácter improductivo, lo cual tuvo impacto muy profundamente negativo sobre la actividad industrial, como consecuencia también del indiscriminado proceso de apertura de la economía, el cual obligó a los productores locales a competir con las mercancías provenientes del extranjero. El deterioro de la actividad productiva provocó una enorme transferencia de recursos desde las clases populares y trabajadoras hacia la clase dominante, la cual llevó a cabo un proceso de valorización de su capital absolutamente sin precedentes.

Como agravante, cabe mencionar que esta dinámica de la valorización financiera fue la que generó el proceso de crecimiento exponencial de uno de los males estructurales más condicionantes de la historia económica argentina del último siglo: la deuda externa.

El gobierno del Proceso, en una primera instancia, intentó promover la estabilidad de un sistema financiero que se estaba volviendo progresivamente cada vez más volátil, asegurando el retorno de la inversión realizada a todos aquellos que tomaran compromisos o deuda en el exterior, a través del manejo discrecional de la tasa de cambio. Sin embargo, este comportamiento alcanzó su mayor nivel de perversidad en el año 1982, cuando se produjo el proceso de estatización de la deuda privada.

Sin embargo, y no obstante el desplazamiento de la actividad industrial como eje principal del proceso de acumulación de capital, algunas de las firmas de la cúpula empresarial se vieron altamente beneficiadas dada su relación privilegiada con el gobierno militar, así como por algunas de las políticas implementadas por este en materia económica. Esta prioridad que experimentaron dichas empresas se vio plasmada en la conformación del "complejo económico estatal-privado", a través del cual esas firmas experimentaron enormes ingresos por su condición de contratadas o proveedoras del Estado Nacional.

La provisión de materiales y servicios a las actividades productivas encaradas

del sector público, permitió a las firmas que operaban en sectores considerados clave para el Estado realizar negocios muy redituables, como el fue el caso de la actividad química, petrolera y de la construcción. En este sentido, y a pesar del discurso liberal, eficientista y modernizador del equipo económico, la vinculación de las grupos económicos nacionales (la nueva unidad económica preponderante dentro de la cúpula empresarial) con el complejo económico estatal-privado les permitió a estos incrementar sus márgenes de rentabilidad y productividad en forma exponencial, proceso que tuvo como contrapartida, el considerable retroceso que experimentaron en su participación las empresas transnacionales y, sobre todo, aquellas pertenecientes a la burguesía nacional.

Al realizar un repaso por las acciones llevadas a cabo y las decisiones tomadas por los integrantes del gobierno militar del Proceso de Reorganización Nacional es inevitable experimentar una sensación de repudio y de enorme espanto ante las mismas. La sanguinaria metodología de las desapariciones, el carácter desmedido y desbordado de la maquinaria represiva, junto con las transformaciones a nivel económico que provocaron el férreo disciplinamiento de las clases populares y trabajadoras no pueden menos que provocarnos una sensación de escalofrío con su sola mención, especialmente cuando se recuerda lo cercanos en el tiempo que están.

Ahora bien, y no obstante la contundencia de estos hechos y el dolor que genera el recordarlos como el episodio más oscuro en la vida política, económica y social del país, da la sensación de que lo verdaderamente importante que surge al realizar su repaso, amén de lo terrible de su vivencia durante el período de gobierno de la dictadura, son consecuencias.

A nivel político, provocó un enorme nivel de descrédito de las organizaciones partidarias, sobre todo de las más tradicionales, las cuales debieron, con el retorno de la democracia, buscar mecanismos de apelación al electorado alternativos a los habituales, dado que encontraron en la sociedad civil un gran descontento con respecto a la política como actividad, así como también un importante descreimiento en relación a las figuras políticas que se postulaban para liderar un proceso de retorno al funcionamiento del sistema representativo, dentro de un clima de poderosa incertidumbre.

En lo que respecta a la economía, el cambio de eje del proceso de acumulación de capital, desde la industria hacia la actividad financiera especulativa, asestó un

durísimo golpe a las clases trabajadoras, las cuales vieron disminuida su participación en el producto nacional en una forma notable, a la vez que se generó en estos sectores una gran incertidumbre con respecto a su situación, dado el temor, inédito hasta el momento, de perder su puesto de trabajo. A esto habría que agregar el alto nivel de rotación que se generó en la ocupación de la mano de obra, la cual, a su vez, vivió un proceso de profunda pauperización en sus condiciones de empleo.

A esto, y como uno de sus principales agravantes, el primer gobierno democrático heredó la pesada carga del proceso de estatización de la deuda externa privada, el cual se presentaría como uno de los principales condicionantes de la soberanía del país en todo lo relacionado a las decisiones que se tomaban en materia de política económica, lo cual llevó a denominar a los años ochenta como la "década perdida".

En este sentido, todas las reformas producidas en ente aspecto durante la década del noventa, con la aplicación de las políticas neoliberales y desreguladoras, se presentan como el corolario de aquel proceso iniciado durante la segunda mitad de la década de los setenta, cuyas consecuencias, podemos observar con claridad como se extienden hasta nuestros días, y que no hacen más que naturalizar el hecho de que la Argentina sea, a nivel estructural, un país que deba cargar siempre a cuestas con el enorme peso de una deuda externa, cuya responsabilidad recae sobre una sociedad que, en su enorme mayoría, no contribuyó a su generación.

Es por todo esto que resulta tan importante tener siempre presente las consecuencias heredadas del Proceso, no sólo por los horrores de la represión y el terrorismo de Estado, los cuales provocaron la muerte y desaparición de millones de argentinos, sino también por las "deudas" a nivel social que, hasta el día de hoy, permanecen impagas.

La posibilidad de encarar un proyecto nacional y soberano, que pueda devolver al país a la senda del crecimiento y desarrollo, con justicia e inclusión, deberá estar siempre atenta a estos condicionamientos si pretende alcanzar algún nivel de éxito. En tanto y en cuanto no se resuelvan estas "cuentas pendientes", pesará sobre la nación y, en especial, sobre su pueblo, la pesada carga de unos obstáculos que le impiden superar el estructural estado de crisis e inestabilidad en el que parece estar sumergido el país desde hace varias décadas.

En resumen, la importancia del Proceso y sus consecuencias debe radicar en constituir aquel ejemplo más contundente que nos indique, de una vez y para siempre, aquel camino que nunca más se ha de volver a transitar.

BIBLIOGRAFIA

- Acuña, Carlos y Catalina Smulovitz. "Militares en la transición argentina: del gobierno a la subordinación constitucional". En VV.AA.: **Juicio, castigos y memorias. Derechos humanos y justicia en la política argentina**. Nueva Visión. Buenos Aires, 1993.
- Azpiazu, Daniel; Basualdo, Eduardo y Khavisse, Miguel. **El nuevo poder económico en la Argentina de los años ochenta**. Siglo XXI. Buenos Aires, 1994.
- Basualdo, Eduardo. **Estudio de historia económica argentina desde mediados de siglo XX a la actualidad**. FLACSO-Siglo XXI. Buenos Aires, 2006.
- Canelo, Paula. "La política contra la economía: los elencos militares frente al programa económico de Martinez de Hoz". En Pucciarelli, Alfredo (comp.): **Empresarios tecnócratas y militares**. Siglo XXI. Buenos Aires, 2004.
- Canitrot, A. "La disciplina como objetivo de la política económica". En: **Desarrollo Económico.** Nº 76. Buenos Aires, 1980.
- Canitrot, Adolfo. **Orden social y monetarismo**. CEDES. Buenos Aires, 1983.
- Castellani, Ana. "Gestión económica liberal corporativa y transformaciones en el interior de los grandes agentes económicos de la Argentina durante la última dictadura militar". En Alfredo Pucciarelli (comp.): **op. cit**, 2004.
- Castellani, Ana. **Estado, empresas y empresarios. La relación entre intervención económica estatal, difusión de ámbitos privilegiados de acumulación y desempeño de las grandes firmas privadas. Argentina 1966-1989**. Tesis Doctoral, UBA. Mimeo. Buenos Aires, 2006.
- Castellani, Ana. "La relación entre intervención estatal y comportamiento empresario. Herramientas conceptuales para pensar las restricciones al desarrollo en el caso argentino". En: **revista virtual Papeles de Trabajo, año 1, número 1**. IDAES, abril de 2007.
- Halperín Donghi, Tulio. **La larga agonía de la argentina peronista**. Ariel. Buenos Aires, 1994.
- Landi, Oscar. **La tercera presidencia de Perón: gobierno de emergencia y crisis política**. CEDES. Buenos Aires, 1978.

- Llach Juan. **Otro siglo, otra Argentina**. Ariel. Buenos Aires, 1997.
- Novaro, Marcos y Vicente Palermo. **La dictadura militar 1976/1983. Del golpe de Estado a la restauración democrática**. Paidós. Buenos Aires, 2003.
- O´Donnell, Guillermo. "Estado y alianzas en Argentina". En: **Desarrollo Económico**. N° 64. Buenos Aires, 1977.
- O'Donnell, Guillermo. "Notas para el estudio de la burguesía local, con especial referencia a sus vinculaciones con el capital transnacional y el aparato estatal". En: **Estudios Sociales**. Nº 12. CEDES. Buenos Aires, 1978.
- Portantiero, Juan C. "Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual. En: Oscar Braun (comp.): **El capitalismo argentino en crisis**. Paidos. Buenos Aires, 1973.
- Pucciarelli, Alfredo. "Los dilemas irresueltos en la historia reciente de la sociedad argentina". En Pucciarelli, Alfredo (comp.): **La primacía de la política. Lanusse, Perón y la Nueva Izquierda en tiempos del GAN**. Eudeba. Buenos Aires, 1999.
- Pucciarelli. Alfredo. "Introducción". En Pucciarelli, Alfredo (comp.): **Empresarios tecnócratas y militares**. Siglo XXI. Buenos Aires, 2004.
- Pucciarelli, Alfredo. "La patria contratista. El nuevo discurso liberal de la dictadura militar encubre una vieja práctica corporativa". En Pucciarelli, Alfredo (comp.): **op. cit**, 2004.
- Quiroga, Hugo. **El tiempo del Proceso. Conflictos y coincidencias entre políticos y militares. 1976-1983**. Fundación Ross. Rosario, 1990.
- Rapoport, M. y Col. **Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000)**. Ediciones Machi. Buenos Aires, 2000.
- Rouquié, Alain. "Hegemonía militar, Estado y dominación social". En: Rouquié, Alain (comp.): **Argentina Hoy**. Siglo XXI. Buenos Aires, 1982.
- Rouquié, A. y Schvarzer, J. **¿Cómo renacen las democracias?** Emecé. Buenos Aires, 1985.
- Schorr, Martín. **Cambios en la estructura y el funcionamiento de la industria argentina entre 1976 y 2004. Un análisis socio-histórico y de economía política de la evolución de las distintas clases sociales y fracciones de clase durante un período de profundos cambios estructurales**. Tesis Doctoral,

FLACSO. Mimeo, 2006.

- Schvarzer, Jorge. **La expansión del estado subsidiario 1976-1981.** CISEA Buenos Aires, 1981.
- Schvarzer, Jorge. **Martínez de Hoz: La lógica política de la política económica**. CISEA. Buenos Aires, 1983.
- Schvarzer, Jorge. **Implantación de un modelo económico: la experiencia argentina entre 1975 y el 2000**. AZ Editora. Buenos Aires, 1998.
- Sidicaro, Ricardo. "Coaliciones golpistas y dictaduras militares: el "proceso" en perspectiva comparada". En Pucciarelli, Alfredo (comp.): **op. cit**, 2004.
- Thwaites Rey, Mabel. "La noción gramsciana de hegemonía en el convulsionado fin de siglo. Acerca de las bases materiales del consenso". En: **Gramsci mirando al sur. Sobre la hegemonía en los 90**. K&ai Editor. Colección Teoría Crítica. Buenos Aires, 1994.
- Yannuzzi, María de los Ángeles. **Política y dictadura. Los partidos políticos y el Proceso de Reorganización Nacional. 1976-1982**. Fundación Ross. Rosario, 1996.

INDICE

Introducción …….. Pág. 2

Capítulo I: Antecedentes de los principales actores del
Proceso de Reorganización Nacional …..…… Pág. 8
1.1 Inestabilidad y fragilidad del sistema político nacional:
la alternancia entre civiles y militares …… Pág. 8
1.2 Institucionalización y legitimidad política de las
Fuerzas Armadas argentinas …….. Pág. 13
1.3 Perfil, origen y comportamiento de la
"oligarquía diversificada" argentina ……. Pág. 17
1.4 El círculo vicioso del crecimiento inestable
y la lucha por la hegemonía social …… Pág. 24

Capítulo II: el golpe militar de 1976 en su contexto ……. Pág. 36
2.1 Las dictaduras militares del
Cono Sur de América Latina ……. Pág. 36
2.2 El contexto internacional ……. Pág. 45
2.3 Derrumbe y caída del tercer gobierno peronista …….. Pág. 48

***Capítulo III*: las Fuerzas Armadas y el**
Proceso de Reorganización Nacional …… Pág. 53
3.1 Los militares golpistas de 1976: un enfoque desde las teorías
de la soberanía y las dictaduras …… Pág. 53
3.2 El golpe militar del 24 de marzo de 1976: consenso y legitimación
del Proceso de Reorganización Nacional …… Pág. 56
3.3 Identificación y caracterización del
"enemigo": la "condición subversiva" …… Pág. 63
3.4 La "receta" militar contra el enemigo del "soberano" ……... Pág. 67
3.5 La "receta" y su puesta en práctica: el método
de las "desapariciones"…….. Pág. 71

3.6 La agudización de la represión y la
extensión de la amenaza subversiva ……. Pág. 75
3.7 El rol funcional de los partidos políticos …… Pág. 81
3.8 La conformación de una "nueva sociedad política" ……... Pág. 84
3.9 El Proceso y su legitimidad dentro de la sociedad civil ……. Pág. 88

Capítulo IV: **el plan económico del**
Proceso de Reorganización Nacional …… Pág. 94
4.1 La coincidencia de proyectos entre el régimen militar
y la oligarquía diversificada argentina ……. Pág. 94
4.2 El nuevo patrón de acumulación: la valorización financiera …….. Pág. 101
4.3 Dinámica y funcionamiento
de la valorización financiera ……. Pág. 107
4.4 Preeminencia de la oligarquía diversificada
durante la valorización financiera ……. Pág. 110
4.5 La eterna herencia: la deuda externa privada y la incidencia de la
oligarquía diversificada en el proceso de gestación de la misma ……. Pág. 118
4.6 El lado perverso de la eterna herencia: la estatización
de la deuda privada ……... Pág. 119

Capítulo V: **la convergencia entre militares y la**
fracción más concentrada del capital …… Pág. 125
5.1 El equipo económico del Proceso: viejos y nuevos liberales
frente a una novedosa gestión corporativa ……... Pág. 125
5.2 Consolidación del Complejo
Económico Estatal-Privado …….. Pág. 128
5.3 Las transformaciones al interior
de la cúpula empresarial ……... Pág. 133
5.4 Tecnoburocracia estatal y liberalismo tecnocrático …… Pág. 136
5.5 Origen del nuevo liberalismo tecnocrático ……..... Pág. 144

Conclusiones **…… Pág. 153**

Bibliografía **…….. Pág. 161**